



*Universidad Nacional
"Pedro Ruiz Gallo"*



ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO

**"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD**

AUTORA:

Abog. **CLAUDIA HAYDEE DAVILA CHICOMA**

ASESOR:

M.Sc. **MARIANO LARREA CHUCAS**

**LAMBAYEQUE – PERÚ
2018**

Elaborada por:

Abog. **CLAUDIA HAYDEE DÁVILA CHICOMA**
TESISTA

M.Sc. **MARIANO LARREA CHUCAS**
ASESOR DE TESIS

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Para optar el Grado Académico de:

Maestra en Derecho con mención en Constitucional y Gobernabilidad

Aprobada por:

DR. JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE DEL JURADO

M. Sc. AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE
SECRETARIO DEL JURADO

M. Sc. FREDDY WIDMAN HERNÁNDEZ RENGIFO
VOCAL DEL JURADO

Lambayeque, Mayo 2018

PRESENTACIÓN

Me corresponde en calidad de Asesor, presentar el informe Final de Tesis titulado **“LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO”**, elaborado por la Abogada CLAUDIA HAYDEE DAVILA CHICOMA, para optar el Grado de Magister en Derecho, con Mención en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, a otorgar por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; trabajo, a través del cual postula un tema de relevante interés jurídico-social como es el estudio del proceso Inmediato en casos de flagrancia delictiva y otros supuestos, y que a través de este dispositivo procesal penal se viene vulnerando una serie de derechos fundamentales como son el derecho a la libertad personal o ambulatoria, el derecho a los plazos razonables, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a un jue imparcial. Siendo que con esta transgresión de derechos fundamentales lo hace una Decreto Legislativo inconstitucional, pese a que su aplicación resulta ser importante porque se tienen juicios rápidos y eficaces, pero no por ello se puede dar pie para vulnerar derechos fundamentales. Siendo que lo que se propone con la investigación es precisamente que este dispositivo legal se ajuste a los parámetros de la Constitución Política y la eficacia y la celeridad con que se resuelven estos procesos inmediatos sean constitucionales.

De la Investigación se tiene que los derechos afectados por el Decreto Legislativo N° 1194, son el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la defensa adecuada del abogado y el derecho a un juez imparcial.

M.Sc. MARIANO LARREA CHUCAS
Asesor de Tesis

ÍNDICE

RESUMEN.....	9
ABSTRACT.....	10
I. INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	
1.1. UBICACIÓN.....	13
1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA.....	13
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.....	18
1.4. METODOLOGÍA.....	18
1.4.1. Planteamiento del Problema.....	20
1.4.2. Justificación del estudio del problema a investigar.....	20
1.4.3. OBJETIVOS.....	21
1.4.3.1. Objetivo General.....	21
1.4.3.2. Objetivos Específicos.....	22
1.4.4. Formulación de Hipótesis.....	22
1.4.4.1. Hipótesis.....	22
1.4.4.2. Identificación de Variables.....	23
1.5. DESARROLLO METODOLÓGICO.....	23
1.5.1. Área de Estudio – Ubicación Metodológica.....	23
1.5.2. Delimitación de la Investigación.....	23
1.5.3. Métodos y Técnicas.....	24
1.5.4. Población y Muestra.....	24

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

SUBCAPÍTULO I: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. ANTECEDENTES.....	26
2. CONCEPTO.....	28
3. CARACTERÍSTICAS.....	32
3.1. Mayor Valor.....	32
3.2. Efecto Irradiador y Fuerza expansiva.....	33
3.3. Eficacia horizontal y vertical.....	34
3.4. Doble Dimensión: Subjetiva y objetiva.....	35
3.5. Alto grado de indeterminación.....	36
4. ESTRUCTURA.....	37
4.1. Normas regla y normas principio.....	37
4.2. Las disposiciones, las normas y las posiciones de derecho fundamental.....	38
5. LÍMITES.....	39

SUB CAPÍTULO II: LA FLAGRANCIA Y EL PROCESO INMEDIATO

1. LA FLAGRANCIA.....	45
1.1. Concepto.....	45
1.2. Tipos de Flagrancia.....	48
1.2.1. La flagrancia clásica.....	48
1.2.2. Cuasiflagrancia.....	49
1.2.3. Flagrancia Presunta.....	50
1.3. La Detención en la Flagrancia.....	52

2. EL PROCESO INMEDIATO.....	53
2.1. Antecedentes.....	53
2.2. Concepto.....	54
2.3. Naturaleza Jurídica.....	56
2.4. Obligatoriedad de la Incoación.....	56
2.4.1. En el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.....	58
2.4.2. En el delito de Conducción en Estado de Ebriedad.....	60
2.5. Supuestos de Aplicación.....	62
2.5.1. El Imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito.....	63
2.5.2. El Imputado ha confesado la comisión del delito.....	64
2.5.3. Elementos de Convicción Suficientes.....	65
2.6. Supuestos de Improcedencia.....	66
3. TRAMITACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO.....	68
3.1. Existencia de una audiencia única para determinar la procedencia del proceso inmediato.....	68
3.2. El mantenimiento de la detención policial del imputado.....	69
3.3. Concentración de los pedidos.....	70
3.4. Mecanismos alternativos de solución de conflictos.....	71
3.5. Oportunidad para incoar el proceso inmediato.....	72
3.6. Plazo para formular el requerimiento acusatorio.....	72
3.7. El ofrecimiento de pruebas.....	73
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO INMEDIATO.....	73

4.1. Es obligatorio.....	73
4.2. Es restrictivo de la libertad.....	74
4.3. Celeridad.....	74
4.4. Audiencias Inaplazables.....	75
4.5. Es Sancionador.....	76
4.6. Es garantista.....	76
4.7. Audiencias concentradas.....	77
4.7.1. Audiencia única de incoación del proceso inmediato.....	77
4.7.2. Audiencia única de juicio inmediato.....	78
4.8. Citación de parte.....	81
4.9. Impugnable.....	81
4.10. Excepcional.....	82
5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL PROCESO INMEDIATO.....	82
6. EL PROCESO INMEDIATO EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL.....	84
7. EL PROCESO INMEDIATO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.....	90
7.1. En Costa Rica.....	90
7.2. En Chile.....	96

SUB CAPÍTULO III

DERECHOS VULNERADOS CON EL PROCESO INMEDIATO

1. DERECHO A LA LIBERTAD.....	103
1.1. Concepto.....	103
1.2. El Derecho de Libertad Personal.....	105

1.3. Derecho Fundamental de la Libertad de Tránsito.....	110
2. DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN EN DERECHO QUE PONGA FIN AL PROCESO.....	113
2.1. Derecho a la Efectividad de las Resoluciones Judiciales.....	114
2.2. El Debido Proceso.....	118
2.2.1. El Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas.....	123
2.2.2. El Derecho a un Juez Imparcial.....	126
2.3. Derecho a la Defensa.....	129
2.4. Derecho a Pluralidad de Instancias.....	131
2.4.1. Concepto.....	131
2.4.2. Base Constitucional.....	136
 CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
3.1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO.....	138
3.1.1. Procesos Inmediatos en el Distrito Judicial de Lambayeque.....	139
3.1.2. Cuadros Estadísticos – Encuestas	145
3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	167
3.3. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DONDE SE VULNERAN DERECHOS.....	179
3.4. DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	204
CONCLUSIONES.....	211
RECOMENDACIONES.....	213
PROYECTO DE LEY.....	214
BIBLIOGRAFÍA.....	221

RESUMEN

En nuestro país existe una elevada criminalidad que genera inseguridad en la población ciudadana, es por ello que con la finalidad de controlar la criminalidad se han promulgado una serie de normas para hacerle frente, pero resulta que estas normas permiten que el análisis de un caso se realice dentro de un proceso largo, es decir con tiempos extensos en la que predomina la justicia tarda pero llega, es precisamente con la finalidad de que los procesos sean céleres o rápidos se promulgó el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el Proceso Inmediato en los casos de Flagrancia y otros supuestos, el cual entró en vigencia a nivel nacional desde el 29 de Noviembre de 2015 hasta la actualidad.

Ahora bien debemos entender que el Proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación. Este tipo de proceso se fundamenta en la facultad del estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación.

La flagrancia está vinculada al preciso momento en que el sujeto es percibido o apreciado en la ejecución del delito por parte de un tercero, de modo que proporciona, a nivel procesal, una mayor convicción al juzgador tanto respecto a la realización del hecho delictivo como de la responsabilidad de aquél en el suceso. El Código Procesal Penal de 2004 tiene un concepto amplio de flagrancia, pues, además de autorizar la detención policial cuando el autor es descubierto durante la ejecución del hecho punible o apenas acabado de cometerlo (flagrancia tradicional o estricta), incluye también supuestos de cuasi flagrancia, flagrancia evidencial o presunción legal de flagrancia, cuando el imputado fuga y es detenido luego de ser

identificado de inmediato por la víctima, testigo presencial o por medio audiovisual, dentro de las 24 horas de producido el hecho.

De otro lado, el presente trabajo de investigación muestra que el proceso inmediato resulta ser un instrumento procesal eficaz en cuanto a que los procesos se resuelven muchísimo más rápido que en un proceso ordinario o común, pero también su aplicación errónea viene produciendo la vulneración de derechos fundamentales como son los derechos a la Libertad Personal, el derecho a la defensa técnica adecuada, el derecho a un juez imparcial, es por ello que se propone un cambio en la normatividad procesal penal para que de esta manera el Decreto Legislativo N° 1194 se encuentre con arreglo al marco Constitucional peruano y sea de utilización adecuada por parte de todos los operadores del derecho, ya sea desde los juzgadores penales, Fiscales, Abogados litigantes e incluso la población nacional.

Finalmente, debemos precisar que la aplicación del procedimiento inmediato debe ser para procesos de trámite fácil y sencillo y no para delitos en la que la pena es elevada por encima de los 12 años por resultar de mayor complejidad, así mismo se propone que el juez de juzgamiento no podrá mediante resolución fundada en derecho pretender regresar el expediente tramitado como proceso inmediato a un proceso común o lato, para evitar vulnerar el derecho a un juez imparcial.

LA AUTORA.

ABSTRACT

In our country there is high crime that generates insecurity in the urban population, which is why the purpose of crime control have promulgated a series of regulations to address, but it turns out that these rules allow the analysis and one case perform within a broad process, ie with extensive time in which predominates justice takes but it arrives, it is precisely in order to make processes Céleres or fast Legislative Decree No. 1194, which regulates the immediate process was enacted flagrancy cases and other assumptions, which came into force at the national level since November 29, 2015 to the present.

Now we must understand that the immediate process is a special process different from the common process. It is a process that aims to simplify and speed stage of the joint process, and is intended for those cases where it is not required further investigation for the prosecutor achieve its conviction regarding a particular case and to make accusation. This type of process is based on the power of the state to organize the response of the criminal justice system with criteria of rationality and efficiency, especially in those cases where, by their very nature, are unnecessary greatest acts of investigation.

Flagrancy is linked to the precise moment when the subject is perceived or appreciated in the execution of the crime by a third party, so that it provides, at a procedural level, greater conviction the judge both regarding the conduct of the criminal act as the former's responsibility in the event. The Criminal Procedure Code of 2004 has a broad concept of flagrante delicto, because in addition to authorize police custody when the author is discovered during the execution of the offense or just finish commit (traditional or strict flagrante delicto), also it includes

cases of quasi flagrante , evidential or legal presumption of flagrante delicto flagrante delicto, when the accused escape and is stopped after being identified immediately by the victim, witness or audiovisual means, within 24 hours of occurrence.

On the other hand, this research shows that the immediate process proves to be an effective procedural instrument in that process are resolved much faster than in an ordinary or common process, but also its erroneous application has been producing the violation of rights fundamental as the rights to personal liberty, the right to adequate technical defense, the right to a fair trial, which is why a change is proposed in the procedural criminal legislation so that in this way the Legislative Decree No. 1194 is find under Peruvian Constitutional framework and is appropriate use by all operators the right, either from criminal judges, prosecutors, lawyers and litigants even the national population.

Finally, we should point out that the application of immediate procedure must be for processes easy and simple procedure and not for crimes in which the penalty is raised above 12 years to be more complex, so it is proposed that the judge trial may not by pretending right decision based on the file processed as return immediately to a common process or lato process to avoid violating the right au impartial judge.

The Author.

INTRODUCCIÓN

En la realidad nacional se viene aplicando el Decreto Legislativo N° 1194, sobre el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos, a partir del 29 de Noviembre de 2015 hasta nuestros días, con lo cual los procesos son céleres y de eficaces, pero existe un inconveniente que con su aplicación se vienen transgrediendo derechos fundamentales como son precisamente el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa técnica adecuada, y el derecho a la imparcialidad del juzgador. Es en ese sentido que el expediente N° 4053-2016 se ha podido precisar que se ha vulnerado hasta tres derechos fundamentales como son el derecho a la libertad ambulatoria entendida como la libertad personal o ambulatorio para realizar actividades de cualquier naturaleza, el derecho a una defensa técnica adecuada que precisamente se ve afectado porque los plazos para armar una adecuada defensa son muy cortos y el derecho a un juez imparcial, porque no se puede favorecer a una de las partes, señalando que el juzgado colegiado no puede disponer de oficio una naturaleza de juicio para que un expediente tramitado bajo las reglas del proceso inmediato siga su curso en un proceso ordinario.

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado en tres capítulos claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí; teniendo su parte introductoria, el primer capítulo referido al Análisis del Objeto de Estudio, en donde se abordan temas precisos sobre la ubicación del objeto de estudio, como surge el problema, como se manifiesta y qué características tiene y la descripción de la metodología, permitiéndonos la formulación de la hipótesis posteriormente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como específicos.

El Segundo capítulo de la investigación corresponde al Marco Teórico, estructurado en tres sub capítulos, el primero referido a los Derechos Fundamentales, el segundo sub capítulo aborda el tema relacionado a la

flagrancia y al proceso inmediato, y el tercer y último sub capítulo abarca lo referente a los derechos vulnerados con el proceso inmediato.

El Tercer y último Capítulo lo conforma Los Resultados y Discusión de los datos estadísticos obtenidos en la investigación a través de encuestas aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, cuya tabulación se encuentra contenida en los cuadros y gráficos estadísticos, elaborados por la propio investigadora; los cuales son sometidos a la respectiva interpretación, análisis y discusión de los resultados expuestos, todo ello con la finalidad de contrastar la hipótesis formulada y de dar sustento a las conclusiones y recomendaciones formuladas; las cuales se ponen en consideración de la comunidad jurídica, local y Nacional, para las críticas a que hubieran lugar, expresando de antemano que el presente trabajo de investigación no pretende ser un tema que agote el debate sino que por el contrario, esperamos que sirva para avivarlo.

Lambayeque, Mayo de 2018.

Abog. CLAUDIA HAYDEE DÁVILA CHICOMA
TESISTA

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN

El presente trabajo de investigación se ubica en la vulneración de derechos fundamentales de las personas con la dación del Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia; es decir, en el quehacer diario del ámbito jurisdiccional, especialmente en la Corte superior de Justicia del Distrito Judicial de Lambayeque, en donde los juzgadores penales de la ciudad de Chiclayo vienen aplicando el proceso inmediato con transgresión de derechos fundamentales de los imputados, así como también por parte de los representantes del Ministerio Público que actualmente con dicho Decreto se encuentran obligados a incoar el proceso inmediato.

En ese sentido, el problema se ubica en el tiempo desde la implementación del proceso inmediato, es decir desde el 29 de Noviembre de 2015 hasta la actualidad, en donde con la ayuda de expedientes tramitados bajo el proceso inmediato se demuestra que se han vulnerado o se viene vulnerando derechos fundamentales de los procesados como son el derecho a la libertad personal o ambulatoria, el derecho a la defensa técnica adecuada, el derecho a la imparcialidad del juez.

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA

La realidad en que vivimos evidencia el incontrolable crecimiento de la delincuencia, la cual ha ocasionado que la población no sólo en el ámbito local sino en todo el territorio nacional viva una inseguridad terrible, a tal punto que se inició una campaña denominada “*Chapa tu choro y déjalo parálítico*”, debido a que el Estado peruano no encontraba formulas rápidas y efectivas para hacerle frente a este gravísimo problema social.

Ahora bien, el Estado peruano con la finalidad de combatir a la delincuencia ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de Flagrancia, publicado el 30 de Agosto del 2015 y entró en vigencia el 29 de noviembre del año pasado. Esta norma modifica y adelanta la vigencia

en todo el país de los artículos 446°, 447° y 448° del Nuevo Código Procesal Penal, asimismo obliga al representante del Ministerio Público a formular proceso inmediato en los casos en los que haya pruebas evidentes de la comisión del delito, es decir la persona hallada con las manos en la masa será inmediatamente procesado y sancionado, con la afirmación que se evita la demora de los procesos comunes.

Asimismo, debemos acotar que antes de la modificatoria introducida por el Decreto materia de análisis, el código Procesal Penal de 2004 regulaba en el Libro Quinto: “Los Procesos Especiales”, Sección I: “El Proceso Inmediato” en los artículos 446°, 447° y 448°, siendo que en su artículo 446.1° señalaba como supuestos de proceso inmediato en la que el fiscal podría solicitar esta vía cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; b) el imputado ha confesado la comisión del delito; y c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

En el proceso inmediato actualmente sólo se podrá incoar, cuando se presente alguno de los siguientes requisitos: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259° del Código Procesal Penal; b) el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160°; c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes; d) cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria (artículo 149° del Código Penal); e) conducción en estado de ebriedad o drogadicción (artículo 274° del Código Penal).

Ahora bien, el Código Procesal Penal señala en el inciso 1°, del artículo 264° que la detención policial de oficio o la detención preliminar sólo durará un plazo de veinticuatro horas. A cuyo término el fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si, comunicando al juez de la investigación preparatoria la continuación de las investigaciones solicita la prisión preventiva u otra

medida alternativa; pero con el actual proceso inmediato esto no se cumple, toda vez que cuando se incoe el proceso inmediato, por el supuesto de flagrancia, el fiscal pondrá al detenido a disposición del juez de la investigación preparatoria, su detención se mantendrá hasta el momento en que se realice la audiencia de incoación del proceso inmediato. Es decir a todas luces se viola el derecho fundamental a la libertad.

La audiencia única de incoación del proceso inmediato, tendrá lugar dentro de las 48 horas siguientes de recibido el requerimiento fiscal; luego de haber sido programada y notificada debidamente por el personal judicial encargado, se lleva a cabo de manera inaplazable en la fecha y hora previamente coordinadas.

Por su parte, el artículo 448°, inciso 1° señala que recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

Por lo tanto, con el Decreto legislativo N° 1194, se vulnera el derecho a la libertad, porque inclusive se llega a privar de la libertad hasta por un plazo de 72 horas sin que exista necesidad de ello, como por ejemplo en los casos de conducción en estado de ebriedad, pese a aplicarse el principio de oportunidad sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es posible requerir prisión preventiva, el imputado de este delito tendrá que permanecer privado de su libertad como mínimo tres días.

Así también, otro de los derechos fundamentales vulnerados por el Decreto Legislativo que regula el Proceso Inmediato en casos de flagrancia, es el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, ya que la nueva norma propone un plazo irrazonable para culminar un juicio, comenzando desde la detención de las diligencias preliminares.

Finalmente, debido a que los plazos son muy reducidos el tiempo para preparar la defensa es cortísimo, vulnerando de esta manera el derecho a una

defensa adecuada ya que incoado el proceso inmediato, el juez competente fijará en un plazo no mayor de 72 horas la audiencia única de juicio inmediato, que además es oral, publica e inaplazable y en donde las partes tendrán el mismo plazo, es decir las 72 horas, para convocar sus órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos.

Asimismo, el proceso inmediato tal y como esta normado viola también otro derecho como es precisamente el derecho a un juez imparcial. Al respecto, se tiene que el artículo 447°, inciso 6, del Código Procesal Penal refiere que: Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. Con esta redacción se entiende que es el juez penal unipersonal o colegiado quien dictará acumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio oral, afectando de esta manera el derecho constitucional a un juez imparcial, ya que como bien sabemos el juez de juzgamiento no puede conocer actos de investigación pues perjudica al procesado al generarse un prejuicio sobre su responsabilidad.

En consecuencia, el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, resulta inconstitucional por transgredir derechos fundamentales como el de privación de la libertad de tránsito, el derecho a un proceso dentro del plazo razonable, el derecho a una defensa adecuada, al juez imparcial y doble instancia.

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA:

El problema se manifiesta, a través de la vulneración de los derechos fundamentales como el de privación de la libertad de tránsito, el derecho a un proceso dentro del plazo razonable, el derecho a una defensa adecuada, al

juez imparcial y doble instancia, a través del Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia.

El problema materia de nuestra investigación presenta como características: resulta anticonstitucional el Decreto Legislativo N° 1194 sobre el proceso inmediato por flagrancia, por vulnerar derechos fundamentales, así como también se caracteriza por presentar información actualizada, ya que su promulgación ha sido promulgada el año pasado, también se caracteriza por generar errores en los operadores de justicia, es decir tanto por parte de los representantes del Ministerio Público, así como de los jueces, secretarios y asistentes jurisdiccionales. Otra característica es los niveles bajos de incidencias sobre los procesos inmediatos, debido también a que su ejecución es desde diciembre del 2015, no llegando incluso al año de vigencia.

1.4. METODOLOGÍA

La metodología a emplear es muy didáctica, con la finalidad de comprender el problema materia de investigación, siendo que para ello se debe proponer y formular el problema, proporcionando una posible solución al problema, a través de la hipótesis, formulando para ello los objetivos tanto generales como específicos para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones.

Agregado a ello debemos señalar que se aplicará una encuesta a los jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, que hayan llevado o llevan casos a través del proceso inmediato, con la finalidad de recabar una opinión clara y consistente de los encuetados sobre el tema materia de investigación, así mismo, se extraerán información proporcionada por los juzgados penales que lleven procesos inmediatos, referentes a datos estadísticos desde la vigencia del decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato sobre la

flagrancia, es decir desde el 29 de Noviembre de 2015 hasta el mes de Julio del 2016.

De lo anterior, conlleva a preguntarnos: ¿Qué es el proceso inmediato?, ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso inmediato?, ¿Qué se entiende por incoación de proceso inmediato?, ¿En qué supuestos se aplica el proceso inmediato? ¿En qué consiste la flagrancia?, ¿Cuáles son los requisitos para configurar la flagrancia? ¿Cuántas modalidades de flagrancia hay?, ¿El D. L N° 1194 resulta constitucional?; ¿El proceso inmediato vulnera derechos fundamentales?, ¿Los plazos del proceso inmediato son muy cortos para preparar una adecuada defensa?, ¿El proceso inmediato es un proceso que se lleva dentro de un plazo razonable?, ¿resulta pertinente privar a una persona de su libertad ambulatoria hasta por 72 horas, cuando la norma constitucional precisa que sólo puede ser hasta por 24 horas?, ¿Cuál es el tratamiento que se le viene dando al proceso inmediato en el Distrito Judicial de Lambayeque?, ¿Cuál es la posición mayoritaria acerca de la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1194?, ¿El proceso inmediato por flagrancia delictiva, resulta aplicable a todos los delitos contenidos en el ordenamiento penal?

1.4.1. Planteamiento del Problema

¿Se protegen realmente los derechos fundamentales de los procesados en los plazos para privar de la libertad al detenido, en la acusación y defensa, y en la imparcialidad de los jueces con el proceso inmediato en casos de flagrancia, así como resulta adecuada su aplicación en la realidad nacional?

1.4.2. Justificación del estudio del problema a investigar

Para el presente caso se tiene que su estudio se justifica porque permite enriquecer nuestros conocimientos en cuanto al tema del proceso inmediato en casos de flagrancia, siendo que podemos conocer las diversas doctrinas que ocupan su estudio tanto a nivel nacional como en la

legislación comparada; asimismo como los supuestos para su aplicación o su incoación de manera obligatoria por parte del representante del Ministerio Público.

También se justifica el presente proyecto porque se abordará el tema de la flagrancia, su naturaleza jurídica, los presupuestos para que se configure, las modalidades de la flagrancia. En ese sentido, la investigación se dirige a demostrar que el proceso inmediato vulnera derechos fundamentales como son el derecho a la libertad ambulatoria por privarlo de su libertad hasta por un plazo de 72 horas, también se afecta al derecho de un plazo razonable debido a que el tiempo es demasiado pequeño como para realizarse un proceso y el derecho a la defensa adecuada lo cual se desprende que existe muy corto plazo para la defensa fundamentar adecuadamente sus pretensiones.

En consecuencia, con el análisis practicado al Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, se concluye que este resulta ser anticonstitucional, toda vez que vulnera derechos fundamentales como son los derechos a la libertad ambulatoria, a no permanecer detenido por más de 24 horas sin una justificación judicial, el derecho al plazo razonable, el derecho a la imparcialidad del juez y a la defensa adecuada.

1.4.3. OBJETIVOS

1.4.3.1. Objetivo General

Analizar la constitucionalidad del proceso inmediato en casos de flagrancia, con la finalidad de establecer plazos adecuados tanto en la acusación y defensa del procesado, bajo la conducción de un juez imparcial, sin privar de la libertad del detenido para respetar sus derechos fundamentales.

1.4.3.2. Objetivos Específicos

1. Estudiar y comprender la constitucionalidad del proceso inmediato en casos de flagrancia.
2. Demostrar la vulneración de los derechos fundamentales de la libertad personal, de defensa, plazo razonable e imparcialidad del juez con la aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, en el Distrito Judicial de Lambayeque.
3. Precisar la opinión de la jurisprudencia nacional sobre el proceso inmediato en casos de flagrancia.
4. Proponer una reforma legislativa en la que se regule los plazos adecuados tanto en la acusación y la defensa del procesado sin privar de la libertad del detenido por más del tiempo permitido, en un proceso inmediato, a través de un juez imparcial.

1.4.4. Formulación de Hipótesis

1.4.4.1. Hipótesis:

“**SI** se establecieran plazos adecuados para la acusación y la defensa, bajo la conducción de un juez imparcial, sin privar de la libertad del detenido por el máximo establecido por ley en el proceso inmediato en casos de flagrancia; **Entonces**, se protegerán realmente los derechos fundamentales de los procesados, resultado adecuada su aplicación en la realidad nacional”.

1.4.4.2. Identificación de Variables:

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos:

A. Variables Independientes:

Establecimiento de plazos adecuados para la acusación y la defensa bajo la conducción de un juez imparcial, sin privar de la

libertad del detenido por el máximo establecido por ley en el proceso inmediato en casos de flagrancia.

B. Variables Dependientes:

- Protección de los derechos fundamentales de los procesados.
- Aplicación adecuada en la realidad nacional del proceso inmediato en procesos de flagrancia.
- La Constitucionalidad del D: L: N° 1194.

1.5. DESARROLLO METODOLÓGICO

1.5.1. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:

- a. **Área de estudio** : Dimensión Praxiológica
- b. **Nivel Epistemológico** : Valoración.
- c. **Tipo de Investigación** : Investigación Jurídico- Propositivo.

1.5.2. Delimitación de la Investigación

- a. **Espacial:** En la ciudad de Chiclayo
- b. **Temporal:** Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.
- c. **Cuantitativa:** Cantidad de casos establecidos con el proceso inmediato en el Distrito Judicial de Lambayeque.
- d. **Cualitativa:** Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del derecho en cuanto al proceso inmediato en casos de flagrancia y que hayan llevado casos a través de este proceso.

1.5.3. Métodos y Técnicas

- A. **Métodos:** Dentro de los diferentes métodos científicos que podemos encontrar tenemos: Inductivo-Deductivo, Exegético, Análisis, Sintético, Descriptivo-explicativo, Dogmático.
- B. **Técnicas de Recopilación de Datos:** Entre las técnicas de recopilación de datos tenemos: observación, bibliográficas, fichaje, encuestas, Población de Estudio.

1.5.4. Población y Muestra

La población viene a estar conformada por las opiniones vertidas por todos los operadores del derecho, Jueces, Fiscales, y Abogados litigantes que lleven o hayan tenido casos en los que se aplica el proceso inmediato en casos de flagrancia del Distrito Judicial de Lambayeque, los mismos que hasta la fecha asciende a un total de más de 7,000; y, que por motivos de estudio, se abordará una población de 3,000 abogados.

Por su parte, la muestra viene conformada por el porcentaje estadístico necesario que permita establecer una visión especial de la problemática planteada. Las muestras obtenidas contienen los datos relacionados con el problema de la investigación, por lo que han sido recogidas tomando en cuenta a la población en estudio.

Se aplicará en porcentaje de 3% del total de casos sentenciados a medida de internamiento por parte de los Juzgados, fiscales y abogados del Distrito judicial de Lambayeque.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

SUBCAPÍTULO I: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. ANTECEDENTES

Sobre los antecedentes de los derechos fundamentales señala PAZO PINEDA (2014):

No aparecieron con el propio surgimiento del ser humano; de hecho, muchas sociedades antiguas se caracterizaron por la supresión absoluta en contra de determinados grupos. En la edad media, el reconocimiento estamental fue esencial para gozar de ciertas prerrogativas o favores reales, incluso la revolución francesa no presentó un carácter marcadamente igualitario, toda vez que los derechos solamente fueron reconocidos a la cada vez más sobresaliente burguesía (p, 28).

El profesor español PECES-BARBA señala que: el punto de partida será ese desacuerdo, y esa imposibilidad de desarrollar los planteamientos individualistas de la burguesía (1999, p, 138-139).

El profesor nacional CHANAME ORBE (2007) refiere que:

El derecho natural utilizó una denominación para estos derechos fundamentales como la de derechos individuales, considerando que los hombres tienen facultades anteriores a la formación del Estado. En Francia, antes de la Revolución en 1770, se empezó a especular sobre el “*Droits fondamentaux*” que condujo directamente al establecimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 (p, 101).

El mismo profesor nacional (2008) indica que:

El término Derechos Fundamentales es de origen alemán (Grundrechte) y es utilizado por primera vez en la Constitución del 20 de Diciembre de 1848 aprobado por la Asamblea Nacional en la Paulkirche de Frankfurt (p, 93).

Este proceso de reconocimiento de los derechos fundamentales tuvo como principal impedimento la aparición de poderes absolutos, los cuales mermaron cualquier derecho de los ciudadanos de contradecir la voluntad gubernamental.

En un inicio la equiparación del poder real con el poder divino generó una sujeción incondicionada de las personas a los designios gubernamentales, lo cual no era sino parte del destino que había otorgado el creador.

En nuestro Perú, señala PAZ SOLDAN (2005) que:

El primer texto constitucional que consagró derechos fundamentales fue la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 4° cuando regula que: “*La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen*”. La carta de 1821 reconoció una serie de garantías individuales, lo cual como bien sabemos este término actualmente se utiliza para nombrar a los procesos constitucionales reguladas en el artículo 200° de la actual Constitución. Sin embargo, el reconocimiento de derechos fue, en este punto muy reducido. Similar apreciación puede realizarse respecto de la denominada Constitución Vitalicia de 1826 (p, 44).

La Carta Constitucional de 1834 será la primera que empieza a recoger, en un solo capítulo, la regulación de estos derechos y de manera regularmente extensa; sin embargo, las constituciones del siglo XIX, se caracterizaron por reconocer principalmente derechos civiles y políticos, constituyendo en este sentido la Constitución de 1920 el punto de quiebre en lo relacionado con el reconocimiento de los derechos fundamentales, siendo que en el Título IV contenía la regulación de determinadas garantías sociales, entre las que se encontraba el derecho a la asociación (artículo 37°), la seguridad del trabajo industrial (artículo 47°), y la enseñanza primaria obligatoria (artículo 53°). En todo caso, pese a su denominación, este título no reguló tantos derechos fundamentales como potestades en favor del Estado.

Finalmente, debemos indicar que la Constitución de 1993 mantiene una lógica similar al incluir diversas potestades del Estado. También otorga especial protección a la madre, la niñez y la familia; se comienza a perfilar, el carácter

social del Estado, el cual encontrará su punto álgido con la Constitución de 1979.

2. CONCEPTO

Denominados también derechos humanos son superiores e intangibles (SOSA, 2008, p, 503 y ss) y, en ese sentido, los consideran “*derechos morales*” (NINO, 1989, p, 14); “*cotos vedados*” (GARZÓN, 1989, p, 209) o “*triunfos políticos*” frente a las mayorías, una “esfera de lo indecible” alejada de las decisiones provenientes del poder público o privado.

En nuestra constitución política peruana, los derechos fundamentales se recogen en el artículo 2°, asimismo en el artículo 3° contiene una cláusula *numerus apertus*, la cual permite el reconocimiento progresivo de nuevos derechos. También se ha obligado el Estado, a través de la Cuarta Disposición Final y Transitoria, a respetar los derechos reconocidos a nivel Internacional.

Al respecto el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL peruano proporciona un concepto de los derechos fundamentales, en la sentencia recaída en el expediente N° 10087-2005-PA/TC., precisando que:

Constituyen una manifestación de la dignidad de la persona humana, aquellos tienen una posición central en el ordenamiento jurídico. Esa centralidad implica, a su vez, la previsión de mecanismos jurídicos que garanticen su eficacia real, pues cuando se vulnera un derecho fundamental se afecta tanto el derecho subjetivo de las personas cuanto el conjunto de valores y bienes constitucionales que precisan ser igualmente protegidos. Ello justifica que nuestra Constitución (artículo 200°) haya previsto determinadas garantías constitucionales a fin de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (F. j. 6).

En la doctrina nacional, se tiene que ALFREDO QUISPE, (2007) define a los derechos fundamentales como:

Derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana (p. 89).

Para el Profesor FERNÁNDEZ SESSAREGO, en la obra la Constitución Comentada (2005):

Son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un status especial en cuanto a garantías de tutela, tratándose así, de derechos delimitados espacial y temporalmente y su denominación responde a su carácter básico o fundamentador del sistema jurídico político de derecho. Así pues, “*los derechos fundantes*” constituyen el presupuesto de todos los demás derechos y, a su vez, encuentran su fundamento en la dignidad inherente a la persona humana (p, 2).

Por su parte, el profesor ALEJANDRO NAVARRETE (2012) señala que los derechos fundamentales:

Poseen una naturaleza diferenciada (diversa) de los derechos subjetivos ordinarios, puesto que regulan la dignidad e inclusive la existencia misma de la persona humana, por lo que su violación entraña, a parte de un perjuicio individual, una repercusión social cuyo desconocimiento puede afectar a toda la comunidad (p, 150).

Desde un punto de vista subjetivo, los derechos fundamentales son considerados, como señala LUIS CASTILLO: contiene todas las facultades de acción que el derecho reserva a su titular y que exige la abstención por parte del poder público (...) a fin de lograr el pleno ejercicio y (...) eficacia (2005, p, 308).

En la doctrina española, se define a los derechos fundamentales como:

Para PÉREZ LUÑO (1998) son:

Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional (p, 46).

En ese sentido, señala PRIETO SANHIS que los derechos fundamentales son la traducción normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad (1992, p, 20), y BERNAL PULIDO, señala que: todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho fundamental (2002, p, 82).

Desde el punto de vista formal señala el profesor italiano LUIGI FERRAJOLI (2001) los derechos fundamentales son:

Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendido por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status, la condición de un sujeto, puesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas o autor de los actos que son ejercicio de estas (p, 19).

Desde el punto de vista objetivo, PAZO PINEDA (2014) señala que:

Se evidencia que los derechos fundamentales tienen tanta trascendencia que también constituyen principios del ordenamiento jurídico, sin los cuales es imposible construir un esquema compatible con la dignidad humana (p, 84).

Finalmente, BIDART CAMPOS (2007) sobre los derechos fundamentales refiere que:

Una Constitución es un patrimonio adquirido a lo largo del tiempo, del uso, de la prescripción. La simetría perfecta de un régimen no surge de la creación racional sobre una tabla rasa, ni de elaboraciones abstractas o apriorísticas (...). La realidad está en la historia y en la experiencia. Las libertades y los derechos concretos de unos hombres también concretos (...) son producto de una experiencia recibida de los antepasados y de las instituciones (p, 248).

En conclusión, opinamos que los derechos fundamentales son esencialmente derechos de índole constitucional y que constituyen la máxima expresión jurídica que garantizan y protegen las facultades y libertades de todas

las personas, las mismas que constituyen una manifestación de la dignidad humana.

3. CARACTERÍSTICAS

3.1. Mayor Valor

Los derechos fundamentales se caracterizan por su rango máximo, máxima fuerza jurídica y máxima importancia.

Señala ROBERT ALEXY (2003) que la característica de los derechos fundamentales a que tiene mayor valor se trata de una afirmación aceptada casi unánimemente por la doctrina, los ordenamientos jurídicos y la jurisprudencia constitucionales (p, 32-33).

La Carta Máxima Nacional en su artículo 1° refiere que las personas y sus derechos son merecedores de una protección calificada. Así, a pesar de existir diversos bienes constitucionalmente protegidos, la sociedad y el Estado quedan vinculados de manera prioritaria a los derechos constitucionales, con el deber no sólo de respetarlos, sino incluso de promoverlos.

El máximo intérprete de la Constitución Peruana, sobre el tema ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N° 00569-2003-AC/TC, f. j. 14, que “los derechos fundamentales tienen una posición preferente en el ordenamiento jurídico y que estos no admiten zonas de indefección”.

3.2. Efecto Irradiador y Fuerza expansiva

El efecto irradiador o la fuerza irradiante de los derechos fundamentales alude a cómo sus contenidos penetran en las distintas ramas del derecho, e incluso la vida política y social en general. Con mayor claridad se manifiesta este efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico. No existe área del derecho, ni instancia que no lo aplique o que quede ajena a la fuerza de los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N° 0976-2001-AA/TC, que:

Los derechos fundamentales tienen la capacidad de irradiarse por todo el ordenamiento jurídico, empezando, desde luego, por la ley y las normas con rango de ley. Lo que significa que las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con los derechos fundamentales y que, en caso de que así no suceda, los jueces ordinarios se encuentran especialmente comprometidos en resolver las controversias para las cuales son competentes, de conformidad con esos derechos. Como también antes se ha expresado, ello se deriva del especial deber de protección que todos los poderes públicos están llamados a desarrollar a partir del carácter objetivo de los derechos fundamentales (f. j. 9).

Además de esta propagación material y jurídica de los derechos, se reconoce también una fuerza expansiva: los derechos van en aumento, tanto respecto a los supuestos que protegen como el número de derechos. Esto se expresa, por ejemplo, en la ampliación de los titulares de los derechos fundamentales; la ampliación de los sujetos obligados por estos derechos; la extensión, desarrollo y actualización de los contenidos iusfundamentales cubriendo nuevos supuestos, la proliferación de nuevos derechos (o derechos no enumerados) de acuerdo con la evolución de las sociedades contemporáneas.

3.3. Eficacia horizontal y vertical

Los derechos fundamentales en su formulación inicial habrían surgido básicamente como inmunidades frente al poder público estatal. Sin embargo, el constitucionalismo implica ante todo una técnica de control y restricción de toda forma de poder, sea público o privado.

Actualmente se reconoce que los derechos fundamentales tienen una eficacia vertical, esto es, frente al poder estatal (que, figurativamente, vendría de arriba hacia abajo), y una eficacia horizontal, es decir entre pares, con lo

cual se afirma que los derechos valen también en las relaciones entre particulares (también se le denomina eficacia de los derechos inter privados o frente a terceros).

Por su parte el Tribunal Constitucional Peruano, en la sentencia recaída en el expediente N° 5215-2007-AA/TC, señala que:

La fuerza normativa de la constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privados o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretende conculcar o desconocerlos (...) (f. j. 7 y 9).

Por nuestra parte, somos de opinión que esta característica de los derechos fundamentales implica que las personas pueden ejercer sus derechos fundamentales sin que el poder estatal los vulnere, es decir garantiza que el Estado y sus poderes no transgredan estos derechos y velen por su pleno cumplimiento y respeto, lo mismo sucede en el otro plano, es decir entre particulares.

3.4. Doble Dimensión: Subjetiva y objetiva

Esta doble dimensión de los derechos fundamentales, tanto subjetiva como objetiva implica que pueden entenderse como atributos subjetivos – directamente exigibles por sus titulares- y al mismo tiempo como mandatos objetivos que generan una serie de deberes y responsabilidades para la comunidad política: Estado y sociedad.

El profesor español PÉREZ LUÑO (1993), enseña que:

Hace mucho que los derechos constitucionales dejaron de entenderse solo como derechos subjetivos, sino que también son valores supremos que rigen todo el ordenamiento jurídico y representan las líneas directrices de

comportamiento para el aparato estatal. Dicho de otra forma, los derechos fundamentales se comportan como principios estructurales básicos del derecho positivo y la actividad estatal.

Sobre la dimensión de los derechos fundamentales el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2050-2002-AA/TC, señala que:

Por ello, los derechos fundamentales deben ser observados en las diferentes actividades públicas, como son la expedición de normas, su interpretación y aplicación jurídicas, la intervención de la fuerza pública, la actuación administrativa, etc. (f. j. 25).

En consecuencia, la referida dimensión objetiva está estrechamente vinculada a la fuerza irradiante de derechos, en el sentido de que estos nutren las normas y las decisiones políticas del Estado.

3.5. Alto grado de indeterminación:

El alto grado de indeterminación de los derechos fundamentales hace sumamente importante la labor del intérprete, en especial los jueces constitucionales.

Con respecto al alto grado de indeterminación ROBERT ALEXY (2003) señala que:

Hoy en día no se puede colegir lo que representan los derechos fundamentales a partir del sucinto texto de la ley fundamental, sino sólo a partir de los 94 volúmenes de sentencias del Tribunal Constitucional Federal (...) Los derechos fundamentales son lo que son sobre todo a través de la interpretación. (p, 35).

Esta característica de los derechos fundamentales resalta principalmente la interpretación que se debe hacer sobre estos derechos fundamentales, dejándose entrever que la parte interpretativa de ellos y la constitución es el Tribunal Constitucional.

4. ESTRUCTURA

Avanzando de modo más específico en la naturaleza y estructura de una norma de derecho fundamental, el Tribunal Constitucional ha aludido a la conocida distinción entre norma-regla y norma-principio, planteada por Robert Alexy, en estos términos:

4.1. Normas regla y normas principio

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 1417-2005-PA/TC refiere que:

La distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que estas puedan ser divididas entre normas regla y normas principio. Mientras que las primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización (f, j, 11).

4.2. Las disposiciones, las normas y las posiciones de derecho fundamental

Tal como expresa BERNAL PULIDO (2003):

Todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y normas vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho fundamental (p, 76).

De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho fundamental.

El profesor ETO CRUZ (2011) refiere que:

Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido

interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad (p, 97).

Las posiciones de derecho fundamental, son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atribuidos que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos.

Estos atributos vinculan a todas las personas y que, por tanto, pueden ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una relación jurídica sustancial, susceptibles de ser proyectadas en una relación jurídica procesal en forma de pretensiones al interior de los procesos constitucionales de la libertad (sea el amparo, el hábeas Corpus o el Hábeas Data).

En conclusión, si bien el legislador es competente para crear derechos subjetivos a través de la ley, empero, la protección jurisdiccional de estos debe verificarse en los procesos ordinarios, mientras que por imperio del artículo 200° de la Constitución y el artículo 38° del Código procesal constitucional, a los procesos constitucionales de la libertad es privativa la protección de los derechos de sustento constitucional directo.

5. LÍMITES

La doctrina suele distinguir dos tipos de límites: intrínsecos y extrínsecos. Los primeros devienen del carácter y naturaleza de cada derecho y de su función social. A su vez en este tipo de límites, se suele diferenciar los límites objetivos derivados de cada realidad del específico derecho de que se trate; y los límites subjetivos que surgen de la actitud del titular del sujeto y de la forma como va a ejercitar su derecho (ETO, 2011, p, 83).

Los límites extrínsecos devienen de esa existencia vinculada con el respeto y convivencia con otros derechos y que obviamente impuestos por el ordenamiento. Este tipo de límites muchas veces los impone la propia

constitución en forma indirecta y directa; y en otros a través de cláusulas mediatas e indirectas.

De ahí que los derechos de la persona no pueden formularse en términos absolutos e ilimitados, sino que por el contrario, su formulación debe partir del hecho de que el contenido de los derechos es un contenido limitado, y que debe convivir con las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente como principios de la organización social.

Por otro lado, en una visión conflictivista de los derechos fundamentales, la colisión en la que incurren los derechos debe ser salvada mediante el trazo de límites desde fuera de cada de cada derecho mismo; incluso algún autor ha escrito que *“la colisión de derechos fundamentales se ha de entender como una problemática especial de la limitación de los derechos fundamentales”*.

En referencia a las posiciones conflictivistas, señala SERNA (2000) que:

Los derechos no son ilimitados, esto es, que tienen límites, entendiendo principalmente por tales no sus propias fronteras, sus contornos inmanentes o internos, sino ciertos factores externos de demarcación (p, 13).

Se debe interpretar el derecho no como una realidad en principio ilimitada, sino precisamente como todo lo contrario, como una realidad que por su propia naturaleza es una realidad esencialmente limitada por unos contornos que vienen definidos por la propia naturaleza y finalidad del derecho mismo.

Con otras palabras, ESPINOZA-SALDAÑA (2000) señala que:

Los diferentes derechos cuentan con rasgos propios que limitan sus alcances (p, 407). Por lo que, cuando se afirma que determinar el contenido esencial es (...) mirar hacia los límites internos de cada derecho en litigio, hacia su naturaleza, hacia el bien que protegen, hacia su finalidad funcional; es atender a sus respectivos contornos y a sus esferas de funcionamiento razonable (p, 42).

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia recaída en el expediente N° 0003-2005-AI/TC que:

Los derechos fundamentales no son absolutos sino relativos, por cuanto su goce y ejercicio están limitados por otros derechos y bienes constitucionales (f, j, 42). Y más específicamente, frente a un derecho constitucional concretizado, siguiendo su propia línea teórica ha indicado en el expediente N° 2700-2006-PH/TC, que:

Los derechos fundamentales no son absolutos y, por ende, pueden ser restringidos con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que el derecho a la libertad de información puede ser restringido, razonablemente, cuando se trate de garantizar la seguridad personal del interno o la seguridad del establecimiento penitenciario (f, j, 18).

El mismo Tribunal en el expediente N° 00014-2002-AI/TC, ha aclarado que la limitación de los derechos fundamentales no supone en modo alguno supresión, por lo que el poder de reforma constitucional debe respetar el contenido esencial de estos, constituyéndose en un límite material al poder de reforma:

Como en diversas ocasiones ha tenido oportunidad de recordar este tribunal, si bien en el estado Constitucional de Derecho no hay derechos absolutos, pues, con poquísimas excepciones, todos ellos son susceptibles de ser regulados y limitados; sin embargo, ello no autoriza a que el legislador los pueda vaciar de contenido, suprimir o disminuirlos.

Una cosa, en efecto, es limitar o restringir el ejercicio de un derecho constitucional, y otra, muy distinta, disminuirlo o suprimirlo. La limitación de un derecho no comporta su disminución o supresión, sino solo el establecimiento de las condiciones dentro de las cuales deberá realizarse un ejercicio. De allí que el Tribunal Constitucional haya sido enfático en señalar que no se puede despojar de contenido a un derecho so pretexto de limitarlo o acaso, suprimirlo,

pues la validez de tales limitaciones depende que ellas respeten el contenido esencial de los derechos sobre los cuales se practica la restricción.

Aunque la Constitución de 1993 no tenga una cláusula semejante a la que existe en los ordenamientos de España o Alemania, por mandato de las cuales se exige al legislador que respete el contenido esencial de los derechos, es claro que se trata de un límite implícito, derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa, que, desde luego, en modo alguno, puede equipararse a la que supuso el reconocimiento del derecho, esto es, a la del poder constituyente.

En segundo lugar, del hecho que la supresión y disminución de los derechos fundamentales no puedan ser sometidas a referéndum, esto es, que se trate de materia que incluso no puedan ser decididas por el pueblo en cuanto poder constituido, se deriva que, en la totalidad del texto constitucional, las cláusulas que reconocen los derechos fundamentales ocupan una posición muy especial, en cuanto recogen el plexo de valores materiales de todo el sistema constitucional y que, en ese sentido, legitiman toda la organización estatal.

Precisamente por ello, el Tribunal Constitucional considera que las cláusulas que lo reconocen constituyen verdaderos límites materiales sobre la potestad de reforma parcial de la constitución. De esta forma, el órgano autorizado a realizarla no podrá disponer la disminución o supresión de los derechos fundamentales ni siquiera siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 206° de la Carta Política.

Desde luego, se trata de un límite que opera solo en sentido negativo, esto es, que impide que el órgano de la reforma pueda suprimir o disminuir los derechos fundamentales; pero no en sentido positivo, es decir, la licitud de la reforma constitucional, si es que ella tiene por propósito ampliar, optimizar o reconocer nuevos derechos constitucionales (ff, jj. 93-96).

SUB CAPÍTULO II: LA FLAGRANCIA Y EL PROCESO INMEDIATO

1. LA FLAGRANCIA

1.1. Concepto

La acción flagrante parte de la etimología de flagrar. A su vez, esta proviene del latín *flagrans* o *flagrare* que significa “que actualmente está siendo ejecutado”, este latinajo proviene del verbo *flagare*, que significa “arder, resplandecer como fuego o llama, quemar”.

El concepto de flagrancia parte del supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir (ARAYA, 2015, p, 62). Por su parte SAN MARTÍN CASTRO, señala que el delito flagrante es el hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observación convence al testigo de que está presenciando la comisión de un delito (1999, p, 807).

Para ARAYA VEGA (2015) la flagrancia delictiva: Está vinculada al preciso momento en que el sujeto es percibido o apreciado en la ejecución del delito por parte de un tercero, de modo que proporciona, a nivel procesal, una mayor convicción al juzgador tanto respecto a la realización del hecho delictivo como de la responsabilidad de aquél en el suceso (p, 64-65).

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2012), señala que:

El Código Procesal Penal de 2004 tiene un concepto amplio de flagrancia, pues, además de autorizar la detención policial cuando el autor es descubierto durante la ejecución del hecho punible o apenas acabado de cometerlo (flagrancia tradicional o estricta), incluye también supuestos de cuasi flagrancia, flagrancia evidencial o presunción legal de flagrancia, cuando el imputado fuga y es detenido luego de ser identificado de inmediato por la víctima, testigo presencial o por medio audiovisual, dentro de las 24 horas de producido el hecho (p, 153).

El profesor VÁSQUEZ GANOZA (2015, p, 34), señala que el concepto clásico de flagrancia significa:

Sorprender a alguien con las manos en la masa, sin embargo nuestra legislación establece un concepto mucho más amplio que incluye a la Cuasiflagrancia y flagrancia presunta.

El código procesal penal de que la flagrancia ya no sólo constituye el hecho de encontrar al sujeto cometiendo el acto delictivo o cuando es descubierto apenas haya acabado de cometerlo, sino también supuestos de cuasi flagrancia, flagrancia evidencial o presunción legal de flagrancia, cuando el imputado fuga y es detenido luego de ser identificado de inmediato por la víctima, testigo presencial o por medio audiovisual, dentro de las 24 horas de producido el hecho.

El Magistrado SAN MARTÍN CASTRO (2016), señala que existen dos principios en la flagrancia:

El *fumus commissi delicti* y el *periculum libertatis*; el primero es conocido como atribución del delito, requiere la existencia de percepción directa e inmediata del tercero de la comisión del delito o bien en parte de la fase de la ejecución del mismo, hasta lograrse su aprehensión. En caso de consumación del delito es indispensable una conexión material: huellas, instrumentos, entre otros, entre la comisión del ilícito y el sujeto vinculado al hecho delictivo. El segundo parte de la necesidad de la intervención. Se refiere a que, ante el descubrimiento, urge la aprehensión del sujeto, para hacer cesar el delito, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho, esto es la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial (p, 154).

Ahora bien, es necesario indicar lo que señala el Magistrado GUILLERMO PISCOYA (2016) cuando señala que:

No todo supuesto de flagrancia encierra uno de flagrancia delictiva, porque lo que “arde”, lo que “flagra”, puede ser un hecho que solo tenga la apariencia

de delito, y esté muy lejos de serlo a la luz del juicio de tipicidad, máxime si la percepción inicial de la flagrancia está en manos de un tercero –Efectivo policial que detiene sin mandato judicial o de la persona que practica un arresto ciudadano- que no necesariamente está en la capacidad de discernir entre la comisión de un delito o la apariencia de este (p, 111).

En consecuencia, la flagrancia delictiva existe cuando el agente del hecho punible es encontrado con las manos en la masa, o escapando luego de cometerlo, o posterior a su realización con suficientes medios probatorios que lo incriminan como autor del delito.

1.2. Tipos de Flagrancia

En efecto conforme se desprende del artículo 259° del Código procesal Penal, se permite la detención policial sin la autorización judicial cuando exista flagrancia, la cual puede ser:

1.2.1. La flagrancia clásica:

También es conocida como flagrancia real, estricta, en sentido estricto (*strictu sensu*) o propiamente dicha. Hace referencia al descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los hechos. Es decir, acontece cuando se acaba de cometer un delito y el responsable es percibido por un tercero en su comisión.

En estos casos de flagrancia, debe recordarse que se autoriza al tercero a lograr la aprehensión del responsable, facultad inspirada en la obligación que tienen los particulares de auxiliar a la autoridad pública en el combate de la delincuencia y en hacer valer sus derechos de víctima, siempre y cuando resulte proporcionada la acción a partir del supuesto de hecho en que ocurre, para cumplir con los fines políticos-sociales de justicia y lograr la detención del responsable junto con la obtención de los elementos probatorios necesarios para su juzgamiento (ARAYA, 2015, p, 68).

Los incisos 1 y 2 del artículo 259° del Código Procesal Penal regulan esta forma de flagrancia. Va del inicio del iter criminis a la consumación del delito. En cualquiera de ellos el sujeto es sorprendido y detenido, sin que exista huida.

“1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto”.

1.2.2. Cuasiflagrancia:

Llamada también Flagrancia material, en ella, el agente es descubierto por un tercero durante la ejecución o consumación del hecho delictivo y a través de la persecución inmediata se logra su aprehensión (ARAYA, 2015, p, 68).

SAN MARTÍN CASTRO (2016) al respecto, refiere que:

Abarca al individuo que logra huir de la escena del delito, pero es perseguido e inmediatamente detenido después de cometerlo o intentarlo – no se exige la percepción directa de la comisión delictiva-. En todo caso, la evidencia del delito sólo puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las percepciones de los agentes policiales con la comisión del delito o la participación de un sujeto determinado prácticamente de forma instantánea, por lo que si fuera preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia (pp, 154-155).

El inciso 3 del artículo 259° del Código Procesal Penal regula este tipo de flagrancia. Aquí el agente ha sido descubierto por un tercero, pero ha huido. Su aprehensión se produce inmediatamente luego de su huida. Se dice que este tipo de flagrancia tiene dos elementos que la caracterizan, esto es, la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo).

“3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible”.

En este supuesto procesal están presentes los siguientes elementos: La inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo), percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción (luego del hecho, el sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata y sin interrupción, es decir, no cesó la acción de aprehensión; también es posible que se trate de una persecución sucesiva, en donde un sujeto persigue, y al no poder detener al responsable, le pide a otro que continúe la persecución y logre su aprehensión, este caso se trataría de una persecución indirecta del hecho según las circunstancias).

1.2.3. Flagrancia Presunta:

Uno de los presupuestos procesales de detención flagrante más delicados es, sin duda, la flagrancia presunta, también conocida como flagrancia evidencial, diferida, virtual o ex post ipso.

El inciso 4° del artículo 259° del Código Procesal Penal, regula esta modalidad de flagrancia. A diferencia de los dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido nunca al autor (inmediatez personal), solo hay una presunción de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que supuestamente ha cometido. La norma además abandona el elemento temporal para su configuración.

“4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”.

ARAYA VEGA (2015) al respecto refiere que:

En ella se parte de las presunciones para su determinación, se equipara al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en ninguna fase del iter criminis (ni ejecución, ni consumación); es decir, no se le sorprende ni ejecutando ni consumado el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Sólo existen indicios razonables que harían suponerlo autor del hecho. Este supuesto coincide con la determinación normativa del supuesto donde, en tiempo inmediato a la comisión del delito, el sujeto fuere encontrado con rastros, señales, armas o instrumentos utilizados en la comisión del hecho; o señalado por las víctimas o por testigos presenciales como el autor del delito (p, 69).

Los elementos presentes en esta flagrancia son: inmediatez personal (hallazgo del responsable), percepción sensorial directa de materialidad (podría tratarse de los instrumentos, objetos, rastros, huellas, vestimentas o cualquier medio que permita relacionar al sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío normativo que debe ser llenado por el operador jurídico al establecerse el “acaba de cometerlo”) y aprehensión del responsable de forma próxima en el tiempo y de manera material al evento.

1.3. La Detención en la Flagrancia:

Es la medida coercitiva excepcional, por la cual se dispone el encarcelamiento del imputado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia, resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave.

En un sentido amplio, CALDERON CRUZ y FABIÁN ROSALES (2008), señalan que:

La detención es toda medida de hecho, justa o injusta, y adoptada por una persona o por su orden, contra otra, que suponga una vulneración de la

libertad ambulatoria o de movimientos. Es toda privación de la libertad de movimiento que no consista en la ejecución de una pena o en el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, adoptada en el marco de un proceso penal abierto o por abrir (p, 128).

Por otro lado, AGUILAR LÓPEZ, señala que:

Debe precisarse que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención del inculcado que determinen que ésta sea considerada inconstitucional (p, 239).

ANGULO ARANA (2016), señala que:

La detención policial por delito flagrante surge de la sospecha. La sospecha, como construcción mínima de un juicio, es consecuencia, de modo natural y lógico, de una información antecedente que es el indicio. El indicio es un elemento básico, un hecho, que por ser indicativo de algo puede ser objeto de análisis y raciocinio para que de él se pueda extraer juicio o conclusiones, es decir, una sospecha, contenida en la afirmación: él lo hizo (pp, 235-254)

En consecuencia, somos de opinión que la detención de una persona en estado de flagrancia es un hecho que se produce debido a una conducta tipificada como delito por el código penal y que el autor es encontrado dentro de los supuestos señalados por el Código Procesal Penal.

2. EL PROCESO INMEDIATO

2.1. Antecedentes

El proceso inmediato fue regulado por primera vez en el Perú en el Libro Quinto del Código Procesal Penal de 2004, específicamente en los artículos 446°, 447° y 448°. Sin embargo la escueta regulación sobre el proceso inmediato, basada únicamente en los supuestos de procedencia, el momento

de incoación del proceso inmediato, y el juez encargado de dar trámite al proceso inmediato, en la práctica se originó una serie de interpretaciones con respecto a las reglas establecidas para su aplicación.

Con fecha 1 de julio se publicó la ley N° 30336, mediante la cual el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el termino de 90 días- calendario.

En virtud de dicha ley, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1194, del 30 de agosto de 2015, que tiene como principal objetivo regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, realizando una modificatoria sustancial a tres preceptos del Código Procesal Penal; siendo estos los artículos 446°, 447° y 448°.

Finalmente, El Decreto Legislativo N° 1194°, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos, empezó en todo el país desde el 29 de noviembre de 2015 hasta la actualidad, significando un avance en cuanto a la resolución de procesos de manera rápida y aparentemente efectiva, pero muchas veces vulnerador de derechos fundamentales.

2.2. Concepto

El juez ZELADA FLORES (2015) proporciona un concepto del proceso inmediato, señalando que:

Es aquel proceso que ante la contundencia de los elementos de convicción encontrados durante la investigación, que acreditan con suficiencia la existencia del hecho delictuoso y su vinculación con el acusado, hacen innecesario continuar con la investigación, permitiendo al fiscal, en su calidad de titular de la acción penal y responsable de la carga de la prueba, pasar directamente a la etapa de juzgamiento, previo control judicial.

REYNA ALFARO (2010), al respecto refiere que:

El proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común.

Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación (p, 107).

El Ministerio de justicia y Derechos Humanos (2012), señala que:

El Proceso Inmediato es un mecanismo de simplificación procesal, que tiene por finalidad resolver en plazo breve la situación jurídica de un imputado, cuando existan elementos probatorios suficientes que demuestren su responsabilidad, lo que hace innecesario formalizar o continuar la Investigación Preparatoria, así como la Etapa Intermedia (p, 192).

Por su parte los abogados HURTADO HUAILLA y REYNA ALFARO, (2015), señalan que:

En el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, emitido en el VI pleno Jurisdiccional de las Salas Permanentes Penales y Transitorias de la Corte Suprema, expresamente se señala que este tipo de proceso se fundamenta en la facultad del estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación (p, 12).

En consecuencia, el proceso inmediato, es el proceso que ante la evidencia contundente del hecho delictivo cometido por el autor, salta las etapas de un proceso común y que por el poco tiempo en los plazos, el acceso a una buena defensa e incluso a la imparcialidad del juzgador, se vulneran muchas veces los derechos fundamentales del sujeto activo del delito, razón por la cual despertó la inquietud de investigar con mayor profundidad sobre el proceso inmediato.

2.3. Naturaleza Jurídica

La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su esencia o característica principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro de recursos como el tiempo y otros aspectos innecesarios.

En ese sentido, el proceso inmediato tiene como finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los casos en que es innecesaria una prolongada o compleja investigación.

2.4. Obligatoriedad de la Incoación

La obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato constituye la principal modificatoria en este proceso en cuanto al trámite del proceso inmediato se refiere, ya que antes de la modificatoria el proceso inmediato era una facultad para el fiscal de iniciar dicho proceso, mientras que actualmente es obligatorio bajo responsabilidad funcional.

Sin embargo señala HUAYLLA MARÍN (2015) que:

Ello no debe entenderse a la literalidad de la norma sino, por el contrario, en función a la finalidad del procedimiento especial, que es lograr la celeridad de las investigaciones sin utilizar plazos innecesarios con miras a lograr una sentencia condenatoria (p, 223).

En ese sentido, y a modo de ejemplo, significa que de existir un delito de hurto cometido en flagrancia, donde exista la declaración de la parte agravada, de los efectivos policiales que realizaron la intervención, así como la aceptación de cargos del propio investigado, lo que corresponde es que el fiscal, durante las primeras 24 horas –que es un plazo que forma parte de las diligencias preliminares-, inste un criterio de oportunidad y así culminar el proceso sin necesidad de judicializarlo.

Si no es posible aplicar un criterio de oportunidad en esas 24 horas, lo único que le queda al fiscal es incoar el proceso inmediato. Es decir que cuando la norma se refiere al deber del fiscal d incoar el proceso inmediato,

ello no debe entenderse que en todos los casos debe hacerlo, sino únicamente cuando el proceso no pueda culminarse con otro mecanismo alternativo.

Sobre la obligatoriedad, algún sector de procesalistas ha señalado que vulnera la independencia y autonomía del Ministerio Público en cuanto estrategia de la acción penal. En ese sentido, señala VLADIVIEZO GONZÁLES (2015) que:

Ello no es así, porque el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, tal como lo establece el artículo 159° de la Constitución, pero su autonomía no puede superponerse a los principios y valores que sustentan el Estado Constitucional de derecho. Dentro de ellos se encuentra el deber del estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (artículo 44° de la Constitución) (p, 242).

El mismo autor señala que: en tal sentido, si partimos de la idea de que la norma que inspira el proceso inmediato busca abreviar el proceso para combatir el crimen de manera más eficaz, no podemos poner delante la autonomía del fiscal. De otro lado, el proceso inmediato está diseñado para determinado supuestos, los cuales no requieren mayores actos de investigación. Por tanto, no es que obligue al fiscal a instar el proceso inmediato e ir al juicio sin pruebas con las que pueda obtener una condena, pues ya las tiene y, por ello, es innecesario que transite por todas las fases del proceso ordinario (p, 242).

2.4.1. En el delito de Omisión a la Asistencia Familiar

Este delito se tramitará bajo las reglas del proceso inmediato luego de obtener elementos de convicción suficientes, los que se recabarán en las diligencias preliminares, pues, conforme al último párrafo del artículo 447°, el fiscal luego de utilizar el plazo de las diligencias preliminares incoará el proceso inmediato.

En tal sentido, el fiscal, al tomar conocimiento de este tipo de delitos, procederá a abrir las diligencias preliminares y realizará las pertinentes para los fines de investigación, entre las que destacan la citación a las partes procesales. Culminado el plazo de diligencias preliminares, el fiscal incoará el proceso inmediato siempre que no se haya podido solucionar el proceso mediante otros mecanismos.

Luego de presentado el requerimiento de incoación, el juez programará una audiencia dentro de las 48 horas, en donde se determinará la procedencia del proceso inmediato y donde también se podrá arribar a una salida alternativa. De aplicarse la salida alternativa, el proceso se sobreseerá; en caso contrario, el juez decidirá la incoación del proceso inmediato. Entonces, el proceso procederá a formular acusación en el plazo de 24 horas, bajo responsabilidad ante el juez de la investigación preparatoria, quien lo remitirá al juez de juzgamiento competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral, y quien además, en el día o a más tardar en el plazo de 72 horas, realizará la audiencia de juicio inmediato.

El profesor HUAYLLA MARÍN (2015), al respecto señala que:

La diferencia sustancial de la modificación radica en simplificar plazos procesales que muchas veces eran excesivos, pues con el nuevo proceso inmediato un proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar tendrá una duración no mayor a siete días aproximadamente (contados después de culminadas las diligencias preliminares), claro está, siempre y cuando se cumplan de manera exacta los plazos (p, 225).

2.4.2. En el delito de Conducción en Estado de Ebriedad

Este delito se tramita siguiendo las reglas del artículo 447°, esto es bajo el supuesto de la flagrancia delictiva, en donde ya no se utilizará el plazo normal de las diligencias preliminares, sino únicamente el de 24 horas,

toda vez que terminado el plazo de detención policial, el fiscal requerirá la juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. Este último decidirá, previa audiencia, en el plazo de 48 horas, si dispone la incoación del proceso inmediato y de ser procedente, el fiscal formulará la acusación dentro de las 24 horas y lo remitirá al juez de investigación preparatoria, a fin de que este, a su vez, lo remita en el día al juez de juzgamiento para que realice la audiencia de juicio inmediato en un plazo no superior a 72 horas.

HUAYLLA MARÍN (2015), precisa que se pueden presentar algunos inconvenientes que es necesario destacar:

1. Obtención del dosaje etílico: el inconveniente radicará en aquellos casos en donde no se obtenga el certificado de dosaje etílico dentro del plazo de 24 horas de detenido, pues, caso contrario, el fiscal tendría que aplicar lo dispuesto en el artículo 446, inciso 2 (de manera motivada) o continuar el proceso bajo las reglas del proceso común. ya posteriormente podrá solicitar la incoación del proceso inmediato conforme al artículo 447° último párrafo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicho párrafo es exclusivamente para los casos donde no se presente flagrancia delictiva.
2. Poca incidencia de salidas alternativas a nivel preliminar (fiscalía): si el legislador ha considerado como obligación incoar un proceso inmediato, ¿entonces las salidas alternativas solamente se deben aplicar a nivel judicial y nunca más a nivel preliminar?, ¿por más que un investigado quiera arribar a un criterio de oportunidad a nivel preliminar, ello será imposible, pues existe la obligación de incoar el proceso inmediato ante el juez? Si entendemos la norma en un sentido estrictamente literal, evidentemente nunca aplicaríamos salidas alternativas a nivel fiscal, sino únicamente ante el órgano jurisdiccional.

Se debe entender la finalidad de lo que pretende el legislador con el

proceso inmediato, que significa dar agilidad a los procesos penales y no utilizar plazos innecesarios. Siendo así, un fiscal ante un caso de flagrancia delictiva realizará diligencias preliminares durante el plazo de detención, esto es, dentro de las 24 horas (plazo que constituye dentro de las diligencias preliminares), resultando válido, legítimo y legalmente posible instar un criterio de oportunidad y dar solución al proceso dentro de esas 24 horas, evitando que un caso se judicialice, pues, de no ser así, congestionaríamos el sistema a nivel del Poder Judicial.

3. El inciso 1 del artículo 447° en su parte final señala que la detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. Al respecto nos preguntamos: tratándose de delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad ¿es necesario que el investigado se encuentre detenido hasta que el juez programe la audiencia de incoación de proceso inmediato?, ¿el investigado en este tipo de delitos permanecerá detenido 72 horas? Consideramos que esa norma debe interpretarse teniendo como parámetro los criterios para imponer una medida coercitiva de carácter personal, pues de no cumplirse con dichos criterios carece de objeto mantener detenida a una persona por más de 24 horas. En tal supuesto estimamos que, tratándose de delitos de conducción en estado de ebriedad, los investigados deberán permanecer detenidos por el plazo de 24 horas, luego de lo cual se dispondrá su inmediata libertad, sin perjuicio de continuar con el trámite del proceso inmediato.

2.5. Supuestos de Aplicación

El Código Penal de 2004 regula el proceso inmediato dentro del Libro Quinto de la Sección I, dentro de los denominados procesos especiales, dedicándole tres disposiciones (artículo 446° a 448°).

El artículo 446.1° regla los supuestos de aplicación, señalando que el fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; b) el imputado ha confesado la

comisión del delito; c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

2.5.1. El Imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito

El profesor NEYRA FLORES (2015), señala que:

Flagrancia debe entenderse como el hecho donde el autor es sorprendido en el momento de realizar el delito o en circunstancias inmediatas a su perpetración, resplandeciendo de manera ostentosa o escandalosa el hecho delictivo (p, 49).

Por otra parte, VALDIVIEZO GONZÁLES (2015), señala que el proceso inmediato se aplica cuando se presenta cualquiera de los tipos de flagrancia reconocidos en el artículo 259° del Código procesal penal de 2004 (p, 229):

- a) Flagrancia tradicional estricta:** el agente es descubierto en la realización del hecho punible.
- b) Cuasiflagrancia:** el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
- c) Flagrancia virtual o por sindicación:** El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se ha registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
- d) Flagrancia evidencial o presunta:** el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

2.5.2. El Imputado ha confesado la comisión del delito

El Profesor ROSAS YATACO (2002) señala que:

La confesión en el procedimiento penal es un acto procesal que consiste en la declaración necesariamente personal, libre, consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado, ya sea durante la investigación o en el juzgamiento, aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que se le imputa p, 254).

El Profesor SAN MARTÍN CASTRO (2003) señala que:

La confesión es la declaración que en contra de sí hace el imputado, reconociéndose culpable del delito y demás circunstancias. En rigor, la confesión importa la admisión del imputado de haber cometido una conducta penalmente típica, aun cuando contenga alegaciones encaminadas a atenuar o a excluir la pena (p, 620).

Por su parte NEYRA FLORES (2015) afirma que:

La confesión sincera es entendida como el acto procesal que consiste en la declaración necesariamente personal, libre, consistente, sincera, verosímil y circunstanciada, hay sea durante la investigación o el juzgamiento, aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que se le imputa (p, 52).

El artículo 160° del código procesal penal de 2004 establece que la confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o incriminación formulada en su contra. Y sólo tendrá valor probatorio cuando:

- a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción;
- b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas;
- c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y,
- d) Sea sincera y espontánea.

2.5.3. Elementos de Convicción Suficientes

ROJAS LÓPEZ (2015) al respecto, señala que:

Cuando los elementos de convicción que han sido acumulados en el desarrollo de las diligencias preliminares, previa declaración del imputado, son evidentes. Este inciso se refiere a los casos de suficiencia probatoria, debido a que el fiscal ha recopilado suficientes elementos de prueba, los cuales bastan para fundamentar un requerimiento acusatorio (p, 231).

VALDIVIEZO GONZÁLES (2015) refiere que:

En este supuesto se está frente a lo que el profesor Sánchez Velarde denomina suficiencia probatoria, en virtud de que se cuenta con los elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación y la eventual sentencia de condena. Los elementos probatorios son de tal magnitud que se hace innecesario continuar la investigación preparatoria (p, 240).

2.6. Supuestos de Improcedencia

El artículo 446° del Código Procesal Penal, con la última modificación, expresamente señala que quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342° del Código Procesal Penal, sean necesarios ulteriores actos de investigación. De esta forma, se establece expresamente un supuesto de improcedencia de incoación de proceso inmediato.

Señalan HURTADO HUAILLA y REYNA ALFARO (2015) que para invocar el supuesto de improcedencia, se deben innovar los supuestos de complejidad previstos en el numeral 3 del artículo 342° del CPP, que señala expresamente que corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucre una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demande la realización de pericias que comportan la revisión de

una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesite realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucre llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revise la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella, o que actúan por encargo de esta. Es decir, en los casos que presentan algunas de las características de complejidad, no procede la aplicación del proceso inmediato (p, 18).

Pero no sólo no es procedente el proceso inmediato en aquellos casos en que el proceso haya sido declarado complejo o pueda incurrir en los supuestos para que sea declarado complejo, sino inclusive cuando la investigación preparatoria se prolongue por más de 30 días después de haberse emitido la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; por lo tanto, para invocar la improcedencia del proceso inmediato no es necesario que exista una disposición que declare complejo el proceso inmediato, ni que se presenten las características de complejidad previstas en el artículo 342° del CPP, sino que inclusive será improcedente si no es invocado dentro de los 30 días después de haberse dispuesto la formalización de la investigación preparatoria.

Por otro lado, el otro supuesto de improcedencia del proceso inmediato está referido a los casos en los que se trate de varios imputados implicados en delitos diferentes, pues sólo será procedente el proceso inmediato cuando se trate de una investigación seguida contra varios imputados, siempre y cuando todos los imputados se encuentren en alguno de los supuestos de flagrancia, confesión, evidencia suficiente, y sean investigados por el mismo delito, o se trate de procesos seguidos por delitos de omisión de asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

Finalmente, sin cambio alguno se continúa señalando que no se acumularán al proceso inmediato los procesos en los que otros imputados estén involucrados en delitos conexos, salvo que ello perjudique el esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable, en dicho caso se deberán seguir las reglas de acumulación contempladas en el Código Procesal Penal, y se deberá verificar el cumplimiento de los supuestos y evaluar la procedencia del proceso inmediato para cada uno de los imputados.

3. TRAMITACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

El trámite del proceso inmediato para los casos de flagrancia delictiva es:

3.1.Existencia de una audiencia única para determinar la procedencia del proceso inmediato

Señala VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (2015) que se ha dispuesto que en los casos de flagrancia con detención policial, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato lo que no estaba regulado en la norma anterior (p, 50).

El legislador cuando reguló el proceso inmediato estableció en el artículo 448.1° del código procesal penal de 2004, que el juez de la investigación preparatoria, previo traslado al imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo, si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. Dicha regulación no sólo era contraria al modelo procesal penal, caracterizado por la oralidad, sino también a la propia naturaleza sumaria de este proceso especial. Los tres días en la realidad era seis días o varas semanas o meses, y la procedencia se dictaba sin audiencia ni debate entre partes.

El legislador subsanó este error al establecer en el artículo 447.1° que la determinación de la procedencia del proceso inmediato se resuelve en

audiencia única, la cual debe celebrarla el juez de la investigación preparatoria dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal.

Otro aspecto importante es el carácter inaplazable que se da a dicha audiencia única. El legislador ha querido evitar cualquier tipo de dilación por los sujetos procesales, equiparando dicha audiencia única a una de prisión preventiva. De esa manera, los jueces pueden hacer uso de las facultades disciplinarias contra los sujetos procesales para garantizar la instalación de dicha audiencia.

3.2.El mantenimiento de la detención policial del imputado

Con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en la audiencia de procedencia de proceso inmediato, el legislador ha establecido que la detención del imputado se mantenga hasta su realización, esto es, hasta las 48 horas.

VALDIVIEZO GÓNZALES (2015), considera:

Un desacierto este aspecto de la norma. El legislador precisa que vencido el plazo de la detención policial, es decir las 24 horas, el fiscal requerirá el inicio del proceso inmediato, luego el juez señalará dentro de las 48 horas la audiencia única, donde debe estar presente el imputado, para lo cual se mantiene restringida su libertad.

Si bien es cierto no estamos frente a una prolongación de la detención policial, se ha querido equiparar la audiencia única con la de prisión preventiva, que son dos audiencias distintas. Según el artículo 253° del código procesal penal de 2004, la restricción de un derecho fundamental requiere de expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción.

Igualmente, solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.

Finalmente, la pregunta sería: ¿es proporcional y necesario restringir la libertad de un conductor ebrio por 48 horas tratándose de un delito de bagatela, cuya pena no supera los dos años? A nuestro parecer, esta norma vulnera el derecho a la libertad. En la legislación comparada, en lo que respecta a los delitos de flagrancia, la audiencia se realiza antes de las 24 horas de producida la detención, de esa manera no se presentan problemas de cuestionamiento a la detención.

3.3. Concentración de los pedidos

Otro aspecto relevante de la modificación del proceso inmediato, señala VALDIVIEZO GONZÁLES (2015) es que:

Dentro del mismo requerimiento de incoación del proceso inmediato el fiscal puede solicitar las medidas de coerción que considera necesarias (comparecencia con restricciones, prisión preventiva, etc.). Esto es bastante positivo debido a que antes el fiscal debía efectuarlo de manera separada, lo que a veces desalentaba a solicitar el inicio del proceso inmediato (p, 244).

Asimismo, es importante lo señalado por el legislador en el artículo 447.4° del Código procesal penal de 2004, respecto a que en la audiencia única debe discutirse la medida de coerción, los mecanismos alternativos y la procedencia del proceso inmediato.

Existen opiniones que señalan que en la audiencia única debe debatirse en primer orden la existencia de la flagrancia delictiva como sucede en otras legislaciones; en ellas se justifica porque existe un proceso de flagrancia es un supuesto del proceso inmediato y, en tal medida, las

partes pueden cuestionar su presencia dentro de la audiencia de determinación de proceso inmediato. Igualmente, el juez para determinar la procedencia del proceso inmediato debe verificar el cumplimiento de ese supuesto.

3.4. Mecanismos alternativos de solución de conflictos

El inciso 3 del actual artículo 447° del código procesal penal de 2004 señala que, en la audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio y la terminación anticipada, según corresponda.

Es un acierto del legislador establecer que, además de la terminación anticipada, pueda aplicarse el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio. De esa manera no solo se privilegia el proceso penal, sino también otras salidas alternativas al conflicto penal igualmente válidas y eficaces.

3.5. Oportunidad para incoar el proceso inmediato

Respecto a la oportunidad para solicitar el proceso inmediato, el artículo 447° inciso 7 establece que en el supuesto de flagrancia delictiva (artículo 446.1°) el fiscal debe solicitar inmediatamente su aplicación sin esperar la culminación de las diligencias preliminares. Solo en los supuestos de confesión y suficiencia probatoria debe hacerlo en ese plazo o antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria.

3.6. Plazo para formular el requerimiento acusatorio

El legislador precisa el plazo para que el fiscal formule acusación (24 horas), llenando de esta manera el vacío legal existente en la norma anterior, que daba lugar a que se recurra al plazo previsto en el artículo 344.1° del código procesal penal 2004, esto es, 15 días, desnaturalizándose el carácter célere de este proceso especial.

Es decir, el fiscal está obligado bajo responsabilidad a solicitar el requerimiento de incoación de proceso inmediato, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos del artículo 259°, inciso 4 del Código Procesal Penal, “el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. El juez, a solicitud del fiscal dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal realizará la audiencia para determinar la procedencia de la incoación del proceso inmediato, que contará con la presencia obligatoria del fiscal, del imputado y su abogado defensor.

3.7.El ofrecimiento de pruebas

En lo que atañe a la etapa de juzgamiento, resulta importante que se haya señalado que las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, así como de garantizar su presencia. En un modelo procesal como el nuestro es responsabilidad de la parte que ofrece un medio de prueba concurrir con esta a la audiencia.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO INMEDIATO

Según el juez ZELADA FLORES (2015, p, 217-222) El proceso inmediato presenta las siguientes características:

4.1.Es obligatorio

A partir de la modificación, el proceso inmediato dejó de ser opcional para los representantes del Ministerio Público, sino más bien en mérito de los numerales 1 y 4 del artículo 446° del código procesal penal de 2004, tienen la obligación de incoarlo cuando se encuentren frente a cualquiera de los cinco supuestos como presupuestos materiales (flagrancia, confesión sincera, elementos de convicción, OAF y conducción en estado de ebriedad). Su

incumplimiento genera responsabilidad funcional en los fiscales, salvo que motivadamente consideren encontrarse frente a un supuesto de excepción, en los términos antes indicados.

4.2. Es restrictivo de la libertad

Esto porque, en el marco de los supuestos de flagrancia, el imputado permanece detenido por 24 horas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 447° del Código Procesal Penal de 2004, y además dicha detención se mantendrá hasta que se lleve a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato, con lo cual la detención podrá prolongarse hasta por 48 horas adicionales. Con ello se busca que el detenido en flagrancia, sin mayores actividades dilatorias, se encuentre presente en la audiencia única de incoación del proceso inmediato, donde puede someterse a diversas formas de solución del conflicto penal para evitar llegar al juicio.

4.3. Celeridad

Este proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional, se realice en un tiempo breve; incluso los pasos son contemplados en horas y el plazo mayor no excede las 72 horas, conforme se desprende de los numerales 1,4, 5 y 6 del artículo 447° y el numeral 1 del artículo 448°. Es así que:

- El fiscal, al término del plazo de la detención, esto es, dentro de las 24 horas (salvo en los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje), debe solicitar la incoación del proceso inmediato, y de ser el caso, solicitar la imposición de alguna medida coercitiva que asegure la presencia del imputado durante todo el proceso.
- El juez debe citar a la audiencia única de incoación del proceso inmediato (o audiencia del control del proceso inmediato) dentro de las 48 horas de

recibido el requerimiento, disponiendo que el imputado se mantenga en calidad de detenido hasta la realización de dicha audiencia.

- El pronunciamiento del juez, que puede ser positivo si admite a trámite la incoación del proceso inmediato, o negativo si lo rechaza, es inmediato y se realizara oralmente dentro de la misma audiencia.
- Admitida la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas para formular acusación bajo responsabilidad.
- Recibida la acusación por el juez de la investigación preparatoria, en el día, deberá remitirlo al juez penal competente.
- Recibidos los actuados, el juez penal debe citar a la audiencia única de juicio inmediato en el día o, en todo caso, en un plazo que no debe exceder las 72 horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

4.4. Audiencias Inaplazables

Dentro del proceso inmediato se realizan dos audiencias: la audiencia única de incoación del proceso inmediato y la audiencia única de juicio inmediato. Ambas tienen el carácter de inaplazable, conforme lo señala el numeral 4 del artículo 447° y el numeral 2 del artículo 448° del código procesal penal de 2004, debiendo entenderse por inaplazable, que se trata de una audiencia impostergable, cuya realización es inminente. Por ello, para estas audiencias la norma dispone la aplicación del artículo 85° del código procesal penal de 2004, esto es, el cambio inmediato del abogado privado por el defensor público en caso aquel no asista a la audiencia, ello bajo un hipotético caso de que sea el abogado privado quien bajo algún interés o negligencia pretenda provocar la frustración de la audiencia.

4.5. Es Sancionador

Porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidades funcionales a sus infractores, tanto a jueces como fiscales, e incluso es posible

sancionar al abogado defensor que no asiste a la audiencia única de incoación del proceso inmediato o a la audiencia única de juicio inmediato, en aplicación del numeral 3 del artículo 85° del CPP de 2004. Al tener las audiencias la categoría de inaplazables, de este modo busca asegurar su realización.

4.6. Es garantista

Porque las decisiones trascendentales se van a tomar en audiencia (sea en la audiencia única de incoación del proceso inmediato o en la audiencia única del juicio inmediato), bajo los principios de inmediación oralidad, contradicción y publicidad, conforme a las exigencias de un sistema acusatorio.

Así por ejemplo se toma la decisión trascendente sobre la solicitud presentada por el fiscal sobre medida cautelar personal de prisión preventiva la misma que se desarrolla y se resuelve si se declara fundada o no tal solicitud es en la audiencia de incoación de proceso inmediato, así como el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato.

4.7. Audiencias concentradas

Porque en las dos audiencias que implica el proceso inmediato, se van a tomar una multiplicidad de decisiones, conforme se detallan:

4.7.1. Audiencia única de incoación del proceso inmediato

En ella, de conformidad con el numeral 4 del artículo 447° del CPP de 2004, el juez de la investigación preparatoria, previo debate, se pronunciará:

- **Sobre la procedencia de alguna medida coercitiva (real o personal) requerida por el fiscal:** para lo cual el fiscal debe, conjuntamente con su requerimiento del proceso inmediato, solicitar motivadamente la imposición de alguna medida de coerción procesal, pudiendo ser cualquiera de las reguladas en la Sección III del CPP de 2004 o las mencionadas en el Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116, en cuanto sean aplicables, acompañando los elementos de convicción que lo sustenten.

- **Sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada:** Ello en mérito a la solicitud de las partes antes o durante la audiencia, con lo cual se promueve una forma alternativa de resolución de conflicto por la vía del consenso.
- **Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato:** Consiste en el control que deberá realizar el juez sobre la concurrencia de los presupuestos materiales y procesales del proceso inmediato. Puede pronunciarse en la misma audiencia: i) de forma positiva, emitiendo un auto de procedencia del proceso inmediato, en cuyo caso corresponderá al fiscal formular acusación; o ii) de forma negativa, emitiendo un auto de rechazo del proceso inmediato, correspondiendo que el fiscal emita la disposición que corresponda (por ejemplo ampliando las diligencias preliminares, formalizando la investigación, preparatoria, realizando acusación directa, etc.)

4.7.2. Audiencia única de juicio inmediato

En ella el juez de conformidad al numeral 2 del artículo 448°, debe pronunciarse, previo debate, por diversos aspectos. Sin embargo, nada impide que en este momento, efectuando un control de legalidad, advierta que el proceso inmediato ha sido indebidamente admitido (por ejemplo, se trata de un caso complejo por lo que se encuentra dentro de un supuesto de excepción, o el requerimiento de incoación del proceso inmediato ha sido presentado a los dos meses de haberse formalizado la investigación preparatoria, por lo que no se cumple un presupuesto formal). En tal caso, previo traslado a las partes, dejará sin efecto la admisión del proceso inmediato, y procederá a devolver los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Ahora bien, cabe precisar que en esta audiencia se buscará que:

- **El juez de juzgamiento realice el control formal de la acusación:** para ello, verificará si esta cumple con los requisitos del artículo 349° del CPP de 2004, de no ser así dará la oportunidad para que el fiscal la subsane dentro de la misma audiencia.
- **Las partes ejerciten su derecho de defensa:** en efecto, esta es la oportunidad para que los sujetos investigados e, incluso, el agraviado realicen las acciones que convengan a su derecho (por ejemplo, deducción de excepciones, ofrecimiento de medios de prueba, constitución en actor civil, entre otras según corresponda), conforme lo establece el numeral 1 del artículo 350° del CPP de 2004 y el Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116.
- **Se propenda a las convenciones probatorias:** el juez, atendiendo a lo manifestado por las partes al momento del debate, de no existir cuestionamientos sobre algunos elementos de la imputación, deberá promover el arribo a convenciones probatorias, con la finalidad simplificar el juicio y procurar que en él se debatan únicamente los extremos relevantes y que sean materia de contradicción u oposición por los sujetos interesados. Cabe precisar que para que ello opere, debe estar presente el acusado, pues es la única persona que puede aceptar los hechos imputados.
- **Se realice el saneamiento del proceso:** El juez deberá pronunciarse motivadamente sobre todos los puntos puestos en cuestión, llámese excepciones, defensas previas, imposición o revocación de medidas coercitivas, sobreseimiento, admisibilidad de medios de prueba, etc., conforme lo indican los artículos 349° y 350° del CPP de 2004. Además debe realizar un control sustancial de oficio y emitir acumulativamente el auto de enjuiciamiento respectivo y de citación a juicio de manera inmediata.

- **Se realice el juzgamiento:** Ello en el supuesto de que el acusado se encuentre presente en esta audiencia única, pues, de lo contrario, deberá declararse su contumacia, toda vez que, conforme a lo establecido en el numeral 12 del artículo 139° de la Constitución, nadie puede ser condenado en ausencia.

Superada esta situación y estando presente el acusado, una vez emitido el auto de enjuiciamiento, corresponde que inmediatamente y en la misma audiencia se lleve a cabo el juzgamiento, el cual se realizará conforme a las reglas del proceso común, en lo que fuera aplicable.

Así, por ejemplo, no procederá la admisión de nuevos medios de prueba, pues esto, de conformidad con el artículo 373°, numeral 1 del CPP del 2004, primer supuesto, solo procede cuando se trate de hechos conocidos con posterioridad a la audiencia de control de acusación, que en el proceso inmediato se lleva a cabo inmediatamente antes al auto de enjuiciamiento, por lo que no aplicaría. Y en cuanto al segundo supuesto, procede bajo una especial argumentación, entendida como la oportunidad que tiene el afectado con la decisión para cuestionar los argumentos que tuvo el juez para desestimar la admisibilidad de su medio de prueba, es decir, argumentar que se equivocó, con la finalidad de que un juez distinto evalúe si dicha decisión fue o no acertada y, en su momento, la conforme o la revoque. En este caso, al ser el mismo juez quien va a reevaluar su decisión emitida en la misma audiencia, tampoco procederá una nueva prueba. Ello de ninguna manera significa dejar en indefensión a la parte afectada o coactar su derecho a ofrecer nuevos medios de prueba, pues aún cabe la posibilidad de su actuación ante la Sala Superior, conforme lo establecen los literales a) y b) del numeral 2 del artículo 422° del CPP de 2004.

4.8. Citación de parte

Pues ahora las partes ya no se van a limitar a coadyuvar con la notificación de sus órganos de prueba, recayendo en el juez la responsabilidad de su notificación, sino que la parte que los ofreció se hace responsable de su citación y de garantizar su concurrencia a la audiencia única de juicio inmediato. De no concurrir injustificadamente a la audiencia, el apercibimiento es la prescindencia del órgano de prueba, ello a diferencia del proceso común, donde el primer apercibimiento es la conducción compulsiva.

4.9. Impugnable

Pues la resolución que admite o rechaza la incoación del proceso inmediato es apelable, lo que posibilita la revisión de la decisión de una instancia superior, sin que al admisorio de dicho medio impugnatorio suspenda los efectos de la decisión.

4.10. Excepcional

Porque la regla general en el CPP de 2004 es la vía del proceso común, en tanto que los procesos especiales son de aplicación excepcional, de ahí la exigencia de condiciones particulares para su procedencia.

5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL PROCESO INMEDIATO

Sobre este punto, refiere VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (2015) que:

Desde el punto de vista académico y la práctica procesal surge el problema que los fiscales nunca sintieron que fuese una obligación incoar el proceso inmediato, el término “podrá” del inciso 1 del artículo 446°, siempre se interpretó como una facultad y no como un imperativo. Preparar un proceso inmediato y la acusación en un plazo tan breve como el establecido en la norma previa siempre presentó problemas a los fiscales que ya tienen, por cierto, una elevada cantidad de carpetas a su cargo en procesos comunes u ordinarios (p, 53).

Compartimos opinión con este autor cuando señala que tal vez el problema más complejo sea el de la prueba. En provincias, donde se encuentra vigente el Código Procesal Penal de 2004, no existen laboratorios especializados. Por ejemplo, en los casos de tráfico ilícito de drogas, es poco probable la aplicación de un proceso inmediato, pues incluso siendo evidente la flagrancia, se requiere de la pericia que permita precisar el tipo de droga, su grado de pureza y peso neto, la cual se practica únicamente en la ciudad de Lima y demora algunos meses.

Lo mismo pasará en el caso de pericias dactiloscópicas, grafotécnica, pruebas de ADN, prueba cuantitativa de alcoholemia, etc. A primera vista, puede pensarse que estas pruebas no son necesarias debido precisamente a la existencia de flagrancia, pero esto sería así solo en los casos de la flagrancia pura. En los casos de Cuasiflagrancia siempre habrá margen para la duda.

El nuevo proceso inmediato solo funcionará eficazmente si a la creación de los juzgados especiales de flagrancia se agrega la implementación de oficinas descentralizadas encargadas de la realización de estas pericias en tiempos realmente cortos, ello en concordancia con los plazos dispuestos por la norma comentada.

Por nuestra parte, debemos precisar que con el procedimiento penal como el mayor problema que ha originado es sobre la violación de derechos de carácter fundamental de las personas, como es precisamente sobre el derecho a la libertad ambulatorio o de libre tránsito cuando se detiene a una persona por el delito de conducción en estado de ebriedad por más de 24 horas que señala la Constitución, o como cuando el mismo juez sentencia y no existe la imparcialidad.

Finalmente, la presente investigación no se realiza con la finalidad de contradecir al proceso inmediato o por el hecho de que no les guste a muchos, sino por el contrario pese a que viola derechos fundamentales se pretende un análisis del mismo para dar alternativas de solución y contribuir para un mejor

tratamiento del mismo y se evite la vulneración de estos derechos fundamentales, así como brindar un pequeño aporte sobre una mejor regulación del mismo para una mayor eficacia y ahorro procesal, siendo que a simple vista se hace necesario una mayor profundización del tema en toda la población jurídica como son jueces, secretarios, asistentes de juzgados, representantes del Ministerio Público, asistentes de función fiscal, abogados litigantes, entre otros , asimismo implementar mayores juzgados que tengan a su caso este tipo de procesos con la finalidad de que los juzgados con amplia carga procesal no descuiden dichos procesos por atender los recién llegados.

6. EL PROCESO INMEDIATO EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL

En el II pleno Jurisprudencia Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de agosto de 2016, se consolidó en el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, precisó ne los fundamentos jurídicos:

En el Fundamento Jurídico 7, señala que en los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto (i) de evidencia delictiva y (ii) de ausencia de complejidad o simplicidad, a los que se refiere el artículo 466, apartados 1 y 2, del NCPP, reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial, en cuanto el proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesa, reduce al mínimo indispensable las garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente, en la medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente.

Se señala en el fundamento jurídico 8, dentro del delito flagrante señala que si el concepto de flagrante delito se utiliza, por ejemplo, para efectos procesales, a fin de decidir un procedimiento a seguir –este sería el caso-, no hay nada que

objetar a una interpretación más o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es fundamentar en él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la interpretación debe ser necesariamente restrictiva. La flagrancia se erige, en este caso del proceso inmediato, como una circunstancia que hace solamente más segura la determinación del autor del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en la investigación y en la celebración del juicio.

Ahora bien, en cuanto a la legitimidad constitucional del proceso inmediato reformado, se tiene que en el fundamento jurídico 13º precisa que: El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad. No es, pues un proceso ofensivo tendente a condenar irremediabilmente al imputado. En rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos materiales y la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia dela garantía de presunción de inocencia. Por consiguiente si el resultado probatorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente –que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía- derecho fundamental- , el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria.

Ahora bien, se desprende que para la Corte Suprema de la República la justificación constitucional del proceso inmediato –su fundamento material- se basa en dos nociones, siendo estas: los presupuestos y requisitos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad, siendo que sin ellas se vulnera ña garantía de defensa procesal y se restringe irrazonablemente la garantía de la tutela jurisdiccional, pues se propendería a la emisión de sentencias con prueba

inidónea y con un nivel de celeridad que conspiraría contra la regularidad y equidad del proceso jurisdiccional

De otro lado, el apartado uno, del artículo 446° del NCPP, establece la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de la interposición de la solicitud de incoación del proceso inmediato, claro está –así debe entenderse- cuando se presentan los presupuestos materiales de evidencia delictiva y no de complejidad. Pero, tal exigencia u obligatoriedad ¿vulnera alguna garantía o principio procesal o procedimental?, ¿cómo entender, en su caso, esa obligatoriedad?

Esa norma, ineludiblemente, debe concordarse con el apartado uno, del artículo 447° del NCPP, y el párrafo final de dicho artículo, que son condiciones de legitimidad constitucional del proceso inmediato. No debe variar el análisis la expresión “bajo responsabilidad”, que preside el artículo 446.1 del NCPP, pues en modo alguno altera el sentido de la norma procesal. Siendo así:

- a) El supuesto de delito flagrante, en tanto el imputado esté efectivamente detenido. Determina la solicitud de incoación del procedimiento inmediato luego de vencido el plazo de 24 horas o 15 días, según sea el caso –delito común o exceptuado-, en cuanto no haga falta la solicitud de detención preliminar comunicada y de detención convalidada y siempre que no se presenten las circunstancias de ausencia de complejidad o simplicidad procesal.
- b) Es claro que si se trata de un delito menor es susceptible de aplicar el artículo 2° del NCPP, donde el fiscal puede optar por el principio de oportunidad. El hecho de que el apartado cuatro, numeral b), del artículo 447° del NCPP permite que se inste el principio de oportunidad en el curso de la audiencia única de incoación del procedimiento inmediato, en modo alguno importa la inaplicación o abrogación del principio de oportunidad en sede preliminar a la inculpación formal –disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria-. El fiscal tiene la potestad de examinar, antes de

inculpar formalmente a una persona, si es posible la aplicación de algún criterio de oportunidad y, en consecuencia, decidir bajo su propia autoridad. Distinto es el caso de la denominada “Oportunidad tardía”, que presupone inculpación formal y autoriza la intervención del juez en la decisión, conforme con lo dispuesto por el artículo 2.7 del NCPP.

- c) Si se cumplen acabadamente las notas materiales o sustantivas y adjetivas de la flagrancia delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean aplicables, en los términos ya expresados, los artículos 2,265 y 266 del NCPP, se hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del procedimiento inmediato. Aquí no se impone una actuación irrazonable al Ministerio Público, sino que se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y requisitos. La responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta sin fundamento razonable alguno.
- d) La flagrancia delictiva, como se sabe, no es el único presupuesto material de la evidencia delictiva. También se encuentran los presupuestos de confesión y de delito evidente. En estos últimos, el párrafo final, del artículo 477° dispone que el requerimiento de incoación del procedimiento inmediato se presenta luego de culminar la sub-fase de diligencias preliminares (artículo 330° del NCPP) –claro está, si se dan los requisitos para su instauración- o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. Las diligencias de averiguación fiscal, como paso inevitable al requerimiento de procedimiento inmediato, desde luego, tendrán lugar cuando al final de cuentas se superen los defectos de la intervención en flagrancia, se presente con toda claridad una confesión corroborada o se consolide y/o superen omisiones o defectos en actos de investigación, que dan lugar a un delito evidente; a consecuencia de lo cual no se requiere de nuevos o

distintos actos de investigación, siempre que ello no importe una restricción irrazonable del derecho de probar de las co-partes o de las contrapartes.

Finalmente, se asume que la norma puede salvar su constitucionalidad si se le interpreta en la forma prevista en el párrafo anterior. Es inadmisibles obligar, sin más, al Ministerio Público a una actuación irrazonable por la incoación de un proceso reformado si no se presentan sus presupuestos materiales, que la propia ley procesal penal desarrolla. También es intolerable que se prescriba la responsabilidad –obviamente funcional, nunca penal- del fiscal sino solicita la incoación del proceso inmediato, pues este tiene desde la ley –y así debe reconocérsele-, precisamente varias opciones posibles, sujetas desde luego a una valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas que en cada caso se presenta. Las conminaciones disciplinarias y las determinaciones de actuación sin tomar en cuenta las circunstancias del caso son constitucionalmente desproporcionadas y afectan la autonomía y la libertad de actuación, dentro de la ley, de los fiscales.

Sin embargo, como es posible, en clave sistemática y de coherencia y respeto de los principios de la constitución, optar por una interpretación de las normas ordinarias acorde con esas previsiones institucionales, cabe concluir que si la norma en cuestión se interpreta tal como se plantea en este Acuerdo Plenario será viable excluir su inaplicación por inconstitucional. El control constitucional, como se sabe, es de última ratio, y por consiguiente, es excepcional; el control difuso, en todo caso, se circunscribe a la real existencia de un problema concreto entre las partes, y la declaración de inaplicabilidad de la norma cuestionada solo procede para resolver cuestiones litigiosas respecto de las cuales existe incompatibilidad manifiesta, no simples interpretaciones entre la norma legal y una constitucional (sentencia del Tribunal Constitucional N° 145-99-AA-TC, del 8 de setiembre de 1999).

7. EL PROCESO INMEDIATO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

7.1. En Costa Rica

La Corte Plena de este país, en sesión N° 28-2008 aprobó el Reglamento de Organización de Organización y Competencias de los Funcionarios Penales de San José cargo del Trámite de Delitos y Contravenciones y Flagrancia y finalizó el 21 de Abril de 2009, cuando se publica en la Gaceta N° 77 la Ley de protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, Ley N° 8720, donde se modifica el Código Procesal Penal, adicionándose el título VIII: Procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, el cual reza así:

Artículo 422°.- Procedencia. Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral.

Artículo 423°.- Trámite Inicial. El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente. No serán necesarios la presentación escrita del informe o el parte policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.

Artículo 424°.- Actuación Por el Ministerio Público. El fiscal dará trámite inmediato al procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la investigación. Para ello contará con la versión especial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un primer momento, así como toda la prueba que se acompañe.

Artículo 425°.- Nombramiento de la defensa técnica. Desde el primer momento en que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. En caso de negativa de la persona sospechosa o si no comparece su defensor particular en el término de 24 horas, se procederá a nombrar, de oficio, a un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una vez nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte del fiscal, un término de 24 horas, para que prepare su defensa para tal efecto. El ministerio Público, de inmediato, deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y de la prueba existente.

Artículo 426°.- Solicitud de audiencia ante el juez de juicio cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.

Artículo 427°.- Constitución del tribunal de juicio y competencia. El tribunal de juicio, en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante este procedimiento, será constituido según su competencia, conforme lo dispone la ley orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades. También tendrá competencia para aplicar cualquiera de las medidas alternativas al proceso, así como el procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas anteriores, el tribunal realizará el debate inmediatamente.

Artículo 428°.- Realización de la audiencia por el Tribunal. Recibida la solicitud por parte del fiscal, el tribunal, en forma inmediata, realizará la audiencia, la cual será oral y pública. De la audiencia quedará registro digital de video y audio; tendrán acceso a ellas las partes, por medio de una copia. En la Primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá oralmente la acusación

dirigida en contra del imputado, donde se describan los hechos y se determine la calificación legal de estos, así como el ofrecimiento de prueba. La defensa podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de ofrecer la prueba para el proceso. El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá corregirla oralmente en el acto. Inmediatamente, se conocerá de la aplicación de medidas alternativas y el procedimiento abreviado. En el caso de que no proceda la aplicación de las medidas, no se proponga por la defensa o no se acepte por el Ministerio Público o la víctima, según fuere la medida, o el tribunal las considere improcedente, este último procederá a realizar el juicio en forma inmediata y en esa misma audiencia. En este caso, deberá calificar la rocedencia y pertinencia de la prueba ofrecida por las partes.

Artículo 429°.- Realización del Juicio. En la segunda parte de la audiencia inicial, se verificará el juicio, donde se le recibirá la declaración al imputado. En forma inmediata, se recibirá la prueba testimonial de la siguiente manera: inicialmente la declaración del ofendido y luego la demás prueba; posteriormente, se incorporará la prueba documental y las partes podrán prescindir de su lectura. Por último, se realizarán las conclusiones por el fiscal y luego, la defensa. En forma inmediata, el tribunal dictará sentencia en forma oral; si lo considera necesario, se retirará a deliberar y luego de un plazo razonablemente corto, el cual no podrá sobrepasar las cuatro horas, salvo causa excepcional que lo justifique y lo comunique oralmente a las partes, sin que la ampliación del plazo exceda de veinticuatro horas luego de finalizada la audiencia de debate. Posteriormente, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias, donde oralmente dictará sentencia en forma integral. El dictado de la resolución en forma oral, valdrá como notificación para todas las partes, aunque estas no comparezcan.

Artículo 430°.- Dictado de la prisión preventiva. Cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquiera otra medida cautelar, lo podrá solicitar así al tribunal de juicio, desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, conforme a los parámetros establecidos en este código, considere proporcional y razonable la solicitud del fiscal, establecerá la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no podrá sobrepasar los quine días hábiles. Cuando deba solicitarse por un plazo superior, así como en los casos donde el fiscal o el tribunal de juicio considere que no corresponde aplicar el procedimiento expedito, por no estar ante hechos cometidos en flagrancia o al ser incompatible la investigación de los hechos, procederá la prisión preventiva, si existe mérito para ello, según las reglas establecidas en este código. El juez penal será el encargado de resolver acerca de la solicitud dirigida por parte del fiscal. En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal lo considera oportuno, fijará la prisión preventiva en contra del imputado, por un plazo máximo de los seis meses. Cuando en sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida cautelar o restrictiva impuesta en contra de él. Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las reglas de la prisión preventiva que se regulan en esta normativa procesal.

Artículo 431°.- Recursos. En contra de la sentencia dictada en forma oral, procederán los recursos conforme a las reglas establecidas en este código.

Artículo 434°.- Localización y Horarios.- Mediante reglamento se definirán la localización y los horarios de los jueces de las causas en flagrancia que establece esta ley. La fijación de los días y el horario de atención al público de estos jueces, deberá establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana o feriados, para la mejor prestación del servicio de administración de justicia, en forma tal que los términos establecidos en la presente ley puedan cumplirse efectivamente.

Artículo 435°.- Duración del Proceso. Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal. El incumplimiento de ese plazo será causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora.

Artículo 436°.- Normas Supletorias. Para lo no previsto en este título, se aplicarán las regulaciones de este código de manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del procedimiento expedito.

7.2. En Chile:

En este país el proceso inmediato recibe la denominación de procedimiento simplificado, y se encuentra regulado por el Código Procesal Penal chileno en:

Artículo 388°.- Ámbito de aplicación. El conocimiento y fallo de las faltas se sujetará al procedimiento previsto en este Título. El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión, menores en su grado mínimo.

Artículo 389°.- Normas supletorias. El procedimiento simplificado se regirá por las normas de este Título y, en lo que éste no proveyere, supletoriamente por las del Libro Segundo de este Código, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza.

Artículo 390°.- Requerimiento. Recibida por el fiscal la denuncia de un hecho constitutivo de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 388°, solicitará del juez de garantía competente la citación inmediata a audiencia, a menos que fueren insuficientes los antecedentes aportados, se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado o el fiscal decidiere hacer aplicación de la facultad que le concede el artículo 170°. De igual manera, cuando los antecedentes lo ameritaren y hasta la deducción de la acusación, el fiscal podrá dejar sin efecto la formalización de la investigación que ya hubiere

realizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 230°, y proceder conforme a las reglas de este Título. Asimismo, si el fiscal formulare acusación y la pena requerida no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, la acusación se tendrá como requerimiento, debiendo el juez disponer la continuación del procedimiento de conformidad a las normas de este Título. Tratándose de las faltas indicadas en los artículos 494°, N° 5, y 496, N° 11, del Código Penal, sólo podrán efectuar el requerimiento precedente las personas a quienes correspondiere la titularidad de la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 54° y 55°. Si la falta contemplada en el artículo 494° bis del Código Penal se cometiere en un establecimiento de comercio, para la determinación del valor de las cosas hurtadas se considerará el precio de venta, salvo que los antecedentes que se reúnan permitan formarse una convicción diferente.

Artículo 391°.- Contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener: a) La individualización del imputado; b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes; c) La cita de la disposición legal infringida; d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación; e) La pena solicitada por el requirente, y f) La individualización y firma del requirente.

Artículo 392°.- Procedimiento monitorio.- Se aplicará el procedimiento monitorio a la tramitación de las faltas respecto de las cuales el fiscal pidiere sólo pena de multa. En el requerimiento señalado en el artículo precedente el fiscal indicará el monto de la multa que solicitare imponer. Si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la proposición relativa a la multa, deberá acogerlos inmediatamente, dictando una resolución que así lo declare. Dicha resolución contendrá, además, las siguientes indicaciones: a) La instrucción acerca del derecho del imputado de reclamar en contra del requerimiento y de la imposición de la sanción, dentro de los quince días

siguientes a su notificación, así como de los efectos de la interposición del reclamo; b) La instrucción acerca de la posibilidad de que dispone el imputado en orden a aceptar el requerimiento y la multa impuesta, así como de los efectos de la aceptación, y c) El señalamiento del monto de la multa y de la forma en que la misma debiere enterarse en arcas fiscales, así como del hecho que, si la multa fuere pagada dentro de los quince días siguientes a la notificación al imputado de la resolución prevista en este inciso, ella será rebajada en 25%, expresándose el monto a enterar en dicho caso. Si el imputado pagare dicha multa o transcurriere el plazo de quince días desde la notificación de la resolución que la impusiere, sin que el imputado reclamare sobre su procedencia o monto, se entenderá que acepta su imposición. En dicho evento la resolución se tendrá, para todos los efectos legales, como sentencia ejecutoriada. Por el contrario, si, dentro del mismo plazo de quince días, el imputado manifestare, de cualquier modo fehaciente, su falta de conformidad con la imposición de la multa o su monto, se proseguirá con el procedimiento en la forma prevista en los artículos siguientes. Lo mismo sucederá si el juez no considerare suficientemente fundado el requerimiento o la multa propuesta por el fiscal.

Artículo 393°.- Citación a audiencia. Recibido el requerimiento, el tribunal ordenará su notificación al imputado y citará a todos los intervinientes a la audiencia a que se refiere el artículo 394°, la que no podrá tener lugar antes de veinte ni después de cuarenta días contados desde la fecha de la resolución. El imputado deberá ser citado con, a lo menos, diez días de anticipación a la fecha de la audiencia. La citación del imputado se hará bajo el apercibimiento señalado en el artículo 33° y a la misma se acompañarán copias del requerimiento y de la querella, en su caso. En el procedimiento simplificado no procederá la interposición de demandas civiles, salvo aquella que tuviere por objeto la restitución de la cosa o su valor. La resolución que dispusiere la citación ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus

medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal, deberán formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

Artículo 393° bis.- Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito flagrante. Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo una falta o un simple delito de aquellos a que da lugar este procedimiento, el fiscal podrá disponer que el imputado sea puesto a disposición del juez de garantía, para el efecto de comunicarle en la audiencia de control de la detención, de forma verbal, el requerimiento a que se refiere el artículo 391°, y proceder de inmediato conforme a lo dispuesto en este Título.

Artículo 394°.- Primeras actuaciones de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el tribunal efectuará una breve relación del requerimiento y de la querella, en su caso. Cuando se encontrare presente la víctima, el juez instruirá a ésta y al imputado sobre la posibilidad de poner término al procedimiento de conformidad a lo previsto en el artículo 241, si ello procediere atendida la naturaleza del hecho punible materia del requerimiento. Asimismo, el fiscal podrá proponer la suspensión condicional del procedimiento, si se cumplieren los requisitos del artículo 237°.

Artículo 395°.- Resolución inmediata. Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitare la realización de la audiencia. Para los efectos de lo dispuesto en el presente inciso, el fiscal podrá modificar la pena requerida para el evento de que el imputado admitiere su responsabilidad. Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento, permitiéndose la incorporación de antecedentes que sirvieran para la determinación de la pena.

Artículo 395° bis. Preparación del juicio simplificado. Si el imputado no admitiere responsabilidad, el juez procederá, en la misma audiencia, a la preparación del juicio simplificado, el cual tendrá lugar inmediatamente, si ello fuere posible, o a más tardar dentro de quinto día.

Artículo 396°.- Realización del juicio. El juicio simplificado comenzará dándose lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si la hubiere. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba, tras lo cual se preguntará al imputado si tuviere algo que agregar. Con su nueva declaración o sin ella, el juez pronunciará su decisión de absolución o condena, y fijará una nueva audiencia, para dentro de los cinco días próximos, para dar a conocer el texto escrito de la sentencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si no hubiere comparecido algún testigo o perito cuya citación judicial hubiere sido solicitada de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 393° y el tribunal considerare su declaración como indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días, transcurridos los cuales deberá proseguirse conforme a las reglas generales, aun a falta del testigo o perito.

Artículo 397°.- Reiteración de faltas. En caso de reiteración de faltas de una misma especie se aplicará, en lo que correspondiere, las reglas contenidas en el artículo 351°.

Artículo 398°.- Suspensión de la imposición de condena por falta. Cuando resulte mérito para condenar por la falta imputada, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. En tal caso, no procederá acumular esta suspensión con alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216.6 Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el

imputado hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.

Artículo 399°.- Recursos. Contra la sentencia definitiva sólo podrá interponerse el recurso de nulidad previsto en el Título IV del Libro Tercero. El fiscal requirente y el querellante, en su caso, sólo podrán recurrir si hubieren concurrido al juicio.

SUB CAPÍTULO III

DERECHOS VULNERADOS CON EL PROCESO INMEDIATO

1. DERECHO A LA LIBERTAD

1.1. Concepto

El derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales que se encuentra protegido y reconocido en la Constitución Política peruana. Según PLACENCIA RUBIÑOS (2014), al respecto refiere que:

El derecho ampara todas las manifestaciones de la libertad, por considerarlas principios estructuradores del ordenamiento jurídico, como exigencias del modelo de sociedad y los valores que ella defiende. Dentro de esas herramientas se consideran los derechos fundamentales, que permiten el desarrollo de la persona humana, pues se entiende que es persona aquel sujeto que en primer lugar quiere y es libre y se comporta como un ser libre. No se puede hablar del hombre sin que al menos se le piense como libre y como responsable de sus actos (p, 102).

RUBIO CORREA (1999), por su parte señala que:

La libertad puede ser descrita de dos formas: una es la jurídica y está contenida en el literal a) del inciso 24, del artículo 2° de la Carta Magna dice que consiste en que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Pone a la ley como la tasa de la posibilidad de ejercitar la libertad, es en este sentido, una norma de medios formales no de fines, así por ejemplo, si la legislación no prohíbe que el consumidor tenga drogas y las utilice entonces mi libertad me permite ser un drogadicto (p, 433).

Este derecho está contemplado en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando regula que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo

por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”. Así también en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando precisa que: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

CALDERÓN CRUZ y FABIÁN ROSALES (2008) señalan que:

El artículo 2.24 de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Y a continuación, en ocho apartados, desarrolla las situaciones jurídicas que las mencionadas libertad y seguridad significan. Especial mención merece el apartado “b” al disponer que no se permite formar alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley (p, 125).

El profesor español MUÑOZ CONDE (2001), al respecto, expresa que

En un sentido amplio, libertad es un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere y no quiere y para trasladarse de un lugar a otro o situarse en sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 1091-2002-HC/TC, fundamento jurídico 1, de la parte referida a los alcances constitucionales de la libertad personal, ha dicho que libertad personal:

Es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la Constitución y, al mismo tiempo, uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional.

Modernamente la libertad ha sido especializada en muchas libertades de culto de tránsito de pensamiento de opinión de expresión de asociación de contratación etc. No hay que olvidar que todas ellas se reducen a un núcleo genérico como en que tiene el designio de dar al ser humano la libertad de

actuar para realizarse mejor. Para comprender cabalmente a las especies es necesario no sólo mirar sus particularidades sino lo que tienen de común en el género.

1.2. El Derecho de Libertad Personal

El Derecho a la libertad personal es un derecho fundamental que está en relación con la expresión de la dignidad humana y la libertad. Por su parte, EGUIGUREN PRAELI (2002), señala que:

En su aspecto de libertad física garantiza a su titular a no verse arbitraria o irrazonablemente privado de ésta, ni ser detenido o sometido a restricciones de la libertad en supuestos distintos a los previstos por la norma constitucional, la ley o los pactos internacionales sobre derechos humanos (27-28).

CÁCERES JULCA (2009), señala que:

La detención policial en caso de flagrancia tiene un fundamento doble. Primero necesaria intervención de la autoridad policial para terminar con la realización del delito, que es una situación anómala, porque está produciendo un daño social que debe terminar inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento. Segundo, en la cautela del inicio de la fase de investigación, momento que puede ser aprovechado por el delincuente para hacer desaparecer las pruebas que lo incriminen; o los útiles, efectos e instrumentos del delito; o para confabularse con otros partícipes o falsos testigos, a fin de evitar las responsabilidades derivadas del acto ilícito. (p, 244-251).

Por su parte, ESPINOZA-SALDAÑA (2003) refiere que:

Se está hablando del pleno ejercicio de la dimensión más bien física de aquel derecho y valor que se conoce con el nombre de libertad. Como es de conocimiento general, esta faceta de la libertad (entendida al mismo tiempo como autodeterminación y no interferencia) es doctrinariamente conocida con el nombre de la libertad personal (p, 146).

CALDERÓN CRUZ y FABIÁN ROSALES (2008) señalan que:

Esta referida al reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico de la capacidad de autodeterminación libre y voluntaria del ejercicio de las facultades o de locomoción de las personas. Ello como expresión de la cláusula personalista del artículo 1° de la Constitución y de manera más concreta como una de las manifestaciones del principio general de libertad, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, reconocido en el literal a) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución (p, 127).

De otro lado, GARCÍA MORILLO (1995), señala que:

El contenido de este derecho suele ser recogido doctrinariamente en términos negativos, dado que el reconocimiento del mismo surgió en un escenario de facultades ilimitadas del poder estatal, erigiéndose así como una forma de límite ante actos abusivos e injustificados del Estado. Esta conceptualización negativa se proyecta aún hasta nuestros días, pues la protección de la libertad personal constituye una garantía frente a detenciones a cargo de agentes públicos, lo cual suele ser la razón por la cual aún el concepto de la libertad personal se encuentra identificado como el rechazo o exclusión de interferencias (p, 30).

El mismo autor precisa que:

El derecho a la libertad personal se encuentra adoptando calificaciones positivas en cuanto a su terminología, como el reconocimiento de una dimensión física en la cual se despliega este derecho, dado como resultante que “la libertad personal sea el derecho fundamental resultante a la sustracción, a la libertad genérica, de todos los derechos autónomamente reconocidos en la constitución” (p, 37).

En el ámbito internacional, el derecho a la libertad personal se encuentra manifiestamente protegido, con lo que se reconoce su especial trascendencia y reafirma su calidad del vehículo para la concreción de otros derechos.

Podemos advertir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9° inciso 1, recoge la prohibición para que ninguna persona se vea socavada en su derecho a la libertad personal por causas que no se encuentren fijadas por leyes o que no cumplan con los procedimientos diseñados por estas.

En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7° numeral 2, señala la misma prohibición y amplía la exigencia formal para validar una limitación del derecho a la libertad personal, al decir que las causas y las condiciones se encuentran “fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

Finalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia contenida en el expediente N° 019-2005-PI/TC, párrafo 11, ha contribuido en dotar de contenido a este derecho a través de su jurisprudencia, pudiendo concluir que entiende al mismo en los siguientes términos: El derecho a la libertad personal es un derecho Subjetivo, calificable como vital para un Estado social y democrático de derecho, que concretiza el valor libertad que se reconoce en nuestra Constitución como es el requisito necesario para el ejercicio de otros derechos, garantizando que ninguna persona pueda ser sometida a una limitación o restricción de su libertad física o ambulatoria, siempre que esta sea arbitraria. A pesar de su condición esencial en un Estado democrático, este derecho cuenta con límites que deben ser impuestos por la misma norma que lo reconoce, o por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o varios bienes jurídicos de carácter constitucional.

Por otra parte, debemos indicar que el literal f; numeral 24) del artículo 2° de la Constitución, establece que: “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del

juzgado correspondiente dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

A esto señalamos que la policía detiene sólo en casos de flagrante delito, y es de obligación poner a disposición del juez a un detenido dentro de las 24 horas o al término de la investigación. Como podemos observar estos dos supuestos pueden perfectamente incumplirse, vulnerando el derecho a la libertad personal de los investigados, como sucede precisamente con el proceso Inmediato.

Finalmente, se debe indicar lo que refiere el profesor BAZALAR PAZ (2016), cuando señala que:

No se consideran detenciones por flagrante delito las interrupciones momentáneas de la libertad ambulatoria, tales como las derivadas de los controles de alcoholemia, los cacheos y las resultantes de las inmovilizaciones de los vehículos a efectos de la individualización de su propietario o conductor, pues se sustentan en fundamentos diferentes a las restricciones a la libertad personal, como son el control preventivo para la preservación de la regularidad y seguridad del tráfico; controles a los que – desde una perspectiva constitucional- el ciudadano está sometido, aun sin la existencia de indicios de alguna infracción o delito (p, 251).

1.3. Derecho Fundamental de la Libertad de Tránsito

La libertad de tránsito es un derecho que cuenta con reconocimiento constitucional e internacional. Tanto su contenido, características y límites se encuentran en la Constitución y en los Tratados sobre Derechos Humanos. De igual manera el Tribunal Constitucional ha identificado a través de su

jurisprudencia los actos lesivos a este derecho, siendo uno de los casos más frecuentes la instalación de rejas metálicas en las vías públicas.

El derecho a la libertad de tránsito se encuentra reconocido en el artículo 2° inciso 11) de la Constitución de 1993 de la siguiente forma: “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 11. A elegir su lugar de residencia a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”.

Al interpretar los alcances de este artículo el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 3482-2005- PHC. Fundamento Jurídico 5 (caso Luis Brain Delgado y Otros), ha señalado que: La libertad de tránsito implica que toda persona “pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta que en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer como o por donde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo o simplemente salida o egreso del país. De esta definición se desprende que el ejercicio de libertad de tránsito conlleva a su vez al ejercicio de otro derecho, como el libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo, para el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 6322-2005-PHC, Fundamento Jurídico 12 (caso César Inca Soler), el derecho a la libertad de tránsito se manifiesta a través del uso de vías de naturaleza pública (por ejemplo, parques, calles, avenidas, carreteras, etc.), vías privadas de uso público (por ejemplo uso de servidumbres de paso) o espacios privados. En una de sus decisiones, por ejemplo, ha señalado que “no se puede descartar la posibilidad de que se vulnere, dentro de un espacio privado, el derecho fundamental a la libertad de tránsito, en aquellos supuestos, por ejemplo, en que no obstante que un espacio sea de dominio

privado, una persona que es miembro de una asociación o cualquier persona que tiene una propiedad dentro de ella, se ve impedido de ingresar o salir de él, arbitrariamente, por decisión de una persona o de un grupo de ellas.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12°) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22°) reconocen el derecho que tiene toda persona a circular libremente por el territorio de un Estado, a escoger libremente su residencia, a salir libremente de cualquier país y a no ser privado del derecho de entrar en su propio país. En consecuencia, pues, tanto el Pacto Internacional como la Convención Americana establecen un contenido similar sobre la libertad de tránsito al previsto en nuestra Constitución, no obstante se debe resaltar que ambos tratados adicionalmente reconocen la garantía que tiene toda persona a no ser impedida de ingresar a su propio país.

Por otra parte, como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto sino que en su ejercicio se deben respetar otros derechos fundamentales o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Al respecto, la Constitución Política señala que la libertad de tránsito puede limitarse por razones de sanidad, **mandato judicial** y por aplicación de la ley de extranjería, así RUBIO CORREA precisa lo siguiente (p, 297):

- Las razones de sanidad se refieren al peligro de ingreso de enfermedades del exterior o por restricciones debido a epidemias de ocasión.
- El mandato judicial implica que el juez podrá restringir este derecho en ejercicio de sus competencias dentro de un proceso regular.
- La aplicación de la ley de extranjería se relaciona con el supuesto de expulsión de los extranjeros que incumplan las normas de ingreso o permanencia del país.

2. DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN EN DERECHO QUE PONGA FIN AL PROCESO

El derecho a una resolución fundada en derecho, comprende el derecho a que los órganos judiciales motiven sus decisiones y a que resuelvan todas las pretensiones de las partes (INIELTA, 2003, p, 224).

No sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria; y, la primera, no sólo en su aspecto eminentemente penal sino también en lo que corresponde a la reparación civil, porque es que se impone, su monto o porque es que se niega su imposición.

Según OLSEN GHIRARDI (1998), se considera que:

La resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado (p, 231).

2.1. Derecho a la Efectividad de las Resoluciones Judiciales:

El Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales o derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia expresa a la “efectividad” de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos.

LUJÁN TÚPEZ (2013) señala que:

Es la garantía judicial o norma-principio que forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por el que se protege y garantiza la expectativa del litigante vencedor a que se cumpla en todos sus términos lo decidido en una sentencia, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; sin que el sujeto vencido

judicialmente pueda impedir, modificar o retrasar la materialización efectiva de lo resuelto (p, 179).

El Máximo intérprete de la Constitución Política peruana, también se ha pronunciado sobre el tema, señalando en la sentencia recaída en los expedientes N° 00015-2001, N° 00016-2001 y N° 00004-2002-AI/TC-Lima (Acumulados), caso bienes inembargables del Estado - Leyes N° 27684 y N° 27584, del 29 de enero de 2004, en el fundamento jurídico 11°: El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable, etc.). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías judiciales, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante, causando daño a una de sus partes (...)”.

En el fundamento jurídico 12°, señala que el contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone especiales exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se encuentran en principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en calidad de partes en el proceso y, desde luego, al propio juez. Pero también lo está el Presidente de la República, a quien, en su condición de titular del Poder Ejecutivo, conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la Constitución,

le corresponde “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”. Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan, o quienes resulten responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y procedimientos aplicables –y con independencia de que la resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no– las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento.

A juicio del Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 13 señala que: tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las sentencias no solo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del “Estado democrático de derecho” que proclama la Constitución. En efecto, tras los artículos 38°, 45°, 51°, 102°, inciso 2, 118°, inciso 1, y 138° de la Constitución, existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción al ordenamiento jurídico, cuando se produce un conflicto, ordinariamente se procesa a través del Poder Judicial, en tanto que tercero imparcial. De ahí que cuando un tribunal de justicia emite una resolución, y ésta adquiere la condición de firme, con su cumplimiento no solo se resuelve un conflicto y se restablece la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. El Estado Democrático de Derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos los días. Y es difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.

En el fundamento jurídico 14 señala que cuando el obligado –sea un particular o el Estado– no cumple lo ordenado por la sentencia o la resolución

judicial firme, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a pedir del órgano jurisdiccional competente la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo dispuesto.

En el fundamento jurídico 15, precisa que no obstante como sucede con todos los derechos fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley pueda prever, como puede ser que la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente; que se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando el contenido del fallo, etc., el Tribunal Constitucional considera legítimo que, tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, cuando ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que estas tengan una justificación constitucional.

En consecuencia, somos de opinión similar por NEYRA FLORES (2010), cuando precisa que el cumplimiento pleno de lo establecido en una decisión judicial supone, por otro lado, la satisfacción real y efectiva, en tiempo oportuno, de lo decidido por el poder jurisdiccional. El derecho a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales resulta de especial relevancia no sólo por su manifestación de derecho de tutela judicial, sino porque constituye una garantía sine qua non para que pueda evidenciarse, en la práctica, el principio de independencia judicial, que conforme lo ha declarado el Tribunal Constitucional, no es sólo uno de los elementos que, conforme al artículo 43º de la Constitución, nos configuran como una República Democrática, sino que, además, resulta necesaria(o) para inspirar la confianza de los ciudadanos en los tribunales (p, 129).

2.2. El Debido Proceso:

Esta garantía se encuentra reconocida en el inciso 3 del artículo 139^o de la Constitución Política del Estado de 1993, así como también se encuentra reconocida a nivel supranacional: en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La noción del debido proceso, tiende a ser imprecisa en muchos aspectos, pues abarca diversas cosas que no siempre quieren significar exactamente lo mismo. Sin embargo, si se habla de las nociones más usuales que de dicho atributo puede coincidirse en que aquel, tiene dos dimensiones una procesal o adjetiva, que normalmente es la más conocida y por ende, aplicada y una sustantiva o material, según lo veremos posteriormente.

VILELA CARBAJAL (2011) señala que el Máximo intérprete de la Constitución peruana establece cual es el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso en la sentencia recaída en el expediente N° 00023-2005-AI/TC, ff.jj. 41 y 42:

“41. Este derecho se encuentra contenido en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución, en cuanto establece que: son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera su denominación.

42. Mediante ambos derechos se persigue garantizar que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos, la solución de un conflicto

jurídico o la aclaración de una incertidumbre jurídica sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Asimismo, estos derechos poseen un contenido complejo (pues se encuentran conformados por un conglomerado de mecanismos que no son fácilmente identificables) que no se limita a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 139°, el segundo párrafo del artículo 103° u otras disposiciones de la Constitución, sino también a aquellos derechos que resulten esenciales para que el proceso pueda cumplir con su finalidad y que se deriven del principio- derecho de dignidad de la persona humana (artículo 3° de la Constitución)".

CASTILLO CÓRDOVA (2008) señala que:

El derecho al debido proceso se encuentra garantizado por el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del estado, y la incorporación de contenidos específicos de este derecho en casos concretos, se ha efectuado sobre la base de la norma internacional sobre derechos humanos vinculante para el Perú (p, 473).

Para Ticona Postigo (1995), el debido proceso:

Es un derecho fundamental, natural o humano que tiene por faculta el exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente; pues el Estado no solo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial (p, 8).

Fix-Zamudio (1997), señala que el debido proceso legal es la traducción del concepto anglo-americano del "*Due Process of Law*", consagrando expresamente en las Enmiendas V y XIV de la Constitución

de los Estados Unidos, introducidas en 1789 y 1869 respectivamente, con una gran repercusión- sobre todo la primera de ellas- en los ordenamientos constitucionales latinoamericanos a partir de ese entonces, tomándose para el efecto la tradición española del proceso legal o derecho de audiencia y que por ello también es señalada bajo el concepto lato de “*Derecho de Defensa de juicio*” (p, 10).

Se suele hablar de “Debido Proceso Jurisdiccional” para referirse al derecho que tiene toda persona o sujeto justiciable, de invocar al interior del órgano jurisdiccional el respeto de aquel conjunto de principios fundamentalmente procesales (excepcionalmente también sustantivos) y por demás relevantes, para que una causa, pueda ventilarse y resolverse con auténtica justicia.

Quiere esto decir, que el proceso jurisdiccional en cualquiera de sus manifestaciones (sea civil, penal, administrativo, laboral, constitucional, agrario, etc.) no es simplemente o no debe aparecer en modo alguno, como un camino formal orientado hacia el logro de determinados objetivos de justicia, sino como un instrumento dotado de reglas suficientemente optimas, de principios especialmente útiles, como para que el resultado obtenido pueda ser o pueda considerarse verdaderamente justo o inobjetable (Justo no solo como resultado sino como camino para lograr el resultado).

Esas directrices o reglas, que le dan contenido al proceso y lo distinguen de cualquier forma de solución de conflictos, distinta a la estrictamente jurisdiccional, son las que en suma o agrupadas, articulan el llamado “Debido Proceso Jurisdiccional”, y sus variantes, para ser más específicos, se encuentran expresamente previstas, principalmente aunque no exclusivamente, en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado, bajo la forma de principios y derechos ante la función jurisdiccional. Las más conocidas, sin lugar a dudas, son entre otras, “el

derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley”, “El derecho a los procedimientos preestablecidos”, “el principio cosa juzgada”, “el derecho a la motivación en las resoluciones judiciales”, “el derecho a la pluralidad de instancia”, “el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley” , “el principio de inaplicabilidad por analogía penal”, “el principio de no ser penado sin proceso judicial”, “la aplicación de la ley más favorable al procesado”, “el principio de no ser condenado en ausencia”, “la no privación del derecho de defensa”, “El principio de gratuidad en la administración de Justicia para quienes carecen de recursos”, etc.

CAROCCA PÉREZ (2005) señala que:

La característica esencial de la garantía del debido proceso, que se explica por el sistema jurídico en el cual se origina, es que su contenido debe ser precisado judicialmente en cada caso; es decir, no puede el legislador a priori, determinar si un proceso, que es siempre particular, ha sido justo o debido. Eso debe examinarse en cada caso, ya que cada juicio es único, y por más que haya podido seguir las formas establecidas en los procedimientos legales, por alguna razón, puede llegarse a la conclusión que no ha sido justo o debido. Esa decisión no importará en caso alguno desconocer la facultad del legislador, que opera en un plano general y abstracto, para establecer los mejores procedimientos posibles (P, 83).

El debido proceso presenta lo siguiente:

2.2.1. El Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas:

JAÉN VALLEJO (2001), señala que:

Muy interesante es la doctrina del Tribunal Supremo español que toma en cuenta en consideración las dilaciones indebidas como elemento tomar en consideración en sede de individualización. Con un razonamiento impecable, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 14 de Diciembre de 1991, entendió que el hecho de haber sido juzgado el acusado en un

proceso de duración exagerada compensaba parcialmente la culpabilidad por el hecho, por lo que era procedente la atenuación de la pena. Según esta sentencia, las consecuencias del delito deben ser proporcionales a la gravedad de la culpabilidad y por lo tanto si el acusado ya ha sufrido un mal con la excesiva duración del proceso, éste debe serle computado en la pena... (pues) toda circunstancia derivada del proceso que tenga sobre los derechos del acusado efectos de carácter aflictivo, importa una anticipada retribución, que paralelamente se debe reflejar en la pena que se imponga (p, 28).

Conforme ha señalado IÑAKI ESPARZA (1995), para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad (p, 214). Siendo una garantía aplicable a cualquier tipo de proceso.

Como su denominación lo indica, este derecho garantiza que el proceso se lleve adelante y finalice sin que existan dilaciones indebidas en su tramitación. Sin embargo, más allá, como bien lo ha señalado el Tribunal Supremo Federal Norteamericano, quizá la nota más importante que caracteriza a esta garantía, es la de que se trata de un concepto más vago que los que definen otros derechos procesales, de modo que es imposible determinar de manera general y con absoluta precisión cuando ha sido violado.

No toda dilación o retraso en la tramitación del proceso puede identificarse como una infracción de la garantía en comento, sino que las dilaciones indebidas han sido entendidas como supuestos extremos de funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o lo tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la administración de justicia.

En este marco, la evaluación sobre la existencia de un proceso con dilaciones indebidas debe realizarse caso por caso, mediante la aplicación a las circunstancias de cada supuesto de un grupo de factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico, no se puede limitar a una simple constatación del incumplimiento de los plazos, pues, incluso, reclama su funcionalidad para los casos en que no se ha previsto un plazo específico.

La evaluación de la existencia de dilaciones indebidas ha de ser integrado en cada caso concreto mediante el examen de la naturaleza del objeto procesal, de la actividad del órgano judicial y del propio comportamiento del recurrente. Así, se debe analizar la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de otros litigios del mismo tipo, el interés en juego del presuntamente perjudicado, su conducta procesal y, finalmente, la conducta de las autoridades y la consideración de los medios disponibles.

Es necesario tener debidamente en cuenta que, como el Tribunal Constitucional español ha precisado, excluir del derecho al proceso sin dilaciones indebidas las que vengan ocasionadas por defectos de estructura de la organización judicial sería tanto como dejar sin contenido a este derecho frente a esa clase de dilaciones; que el deber estatal de garantizar la justicia sin dilaciones lleva implícita la dotación a los órganos judiciales de los necesarios medios personales y materiales.

Finalmente, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se debe complementar con un principio de celeridad procesal, en el sentido que, en cuanto a los funcionarios estatales les sea posible, la resolución del conflicto se tiene que dar en el menor tiempo posible.

2.2.2. El Derecho a un Juez Imparcial:

Doctrinariamente la naturaleza del derecho a un juez imparcial se señala como dice BARJA DE QUIROGA: La imparcialidad judicial es otra garantía esencial de la función jurisdiccional, especialmente ligada a la preservación del principio acusatorio (1999, p, 453).

Este derecho ha sido diagramado por el procesalista MONTERO AROCA (1999) al indicar que:

La misma esencia de la jurisdicción supone que el titular de la potestad jurisdiccional, no puede ser al mismo tiempo parte en el conflicto que se somete a su decisión. En toda actuación del derecho por la jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas entre sí que acuden a un tercero imparcial, que es el titular de la potestad, es decir, el juez o magistrado. Esta no calidad de parte ha sido denominada también imparcialidad (p, 109).

Por su parte, OVALLE FAVELA (1991) refiere que:

La imparcialidad del juez tiene su contraparte en el interés directo de los sujetos en el proceso, en tanto que resulta garantía del Debido Proceso que un juez desinteresado resuelva el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial. Este criterio de objetividad implica además que el juez debe estar comprometido con el cumplimiento correcto de sus funciones y con la aplicación el derecho objetivo al caso concreto, sin que ninguna circunstancia extraña influya en sus decisiones (p, 145).

Por su parte, el Tribunal Constitucional señala que “la imparcialidad judicial es una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona su existencia misma. Sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional” (sentencia N° 11/2000). En otras palabras pero con idéntico significado, se expresa también el TC en su sentencia N°

146/2006: “La imparcialidad del tribunal forma parte de las garantías básicas del proceso, constituyendo incluso la primera de ellas”.

Asimismo, señala el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 6149-2006-PA/TC, f, j, 48, señala que: “ciertamente el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este tribunal reconocer en él a un derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución (...)”.

En lo que atañe a los ordenamientos supranacionales El Pacto Internacional de Derechos Políticos, (Artículo 14°) establece como derecho del imputado, el ser juzgado por un juez o tribunal imparcial; así también la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica ha contemplado el derecho a un juez imparcial entre las garantías judiciales de la siguiente manera: “Art. 8.1.- Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (...)”.

De la misma manera, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales ha precisado sobre los derechos de las personas que: “Art. 6.1.-(...) Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley (...)”.

En el caso del ordenamiento jurídico peruano el Derecho a un Juez Imparcial ha sido consagrado en los artículos 139° inciso 1 y 3 de la Constitución Política del Estado, cuando se contempla a la unidad, exclusividad y tutela jurisdiccional como principios y derechos de la

función jurisdiccional: “artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (...)”.

En resumen, el derecho a un juez o tribunal imparcial se encuentra regulado en los principales convenios internacionales, por lo que su interpretación en el ámbito peruano deberá realizarse dentro de lo preceptuado por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución Política que señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

2.3. Derecho a la Defensa

Este derecho es importante porque se configura como una garantía del debido proceso. Y es que en realidad esta garantía se convierte en el resumen en el que se puede sintetizar la existencia del debido proceso.

El respeto por el derecho a la defensa, señala PLACENCIA RUBIÑOS (2014), a ser escuchado antes de ser denunciado formalmente constituye la forma primera y más elemental del derecho a la defensa. Es decir, antes de ser escuchado por un juez, el derecho a la defensa exige ser oído por el fiscal o policía; no para rendir una declaración formal, sino la oportunidad que la parte requirente oiga por primera vez la posición del denunciado. Esto solo y exclusivamente con la finalidad de ser oído, y no de brindar declaración alguna (p, 108).

Para GIMENO SENDRA (1985) en cuanto al derecho de defensa señala que:

Los actos de defensa en todo su despliegue, desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del proceso, no como resultado de una concepción liberal-individualista (propia del Estado del siglo XIX) que concibe

la defensa como derecho potestativo del imputado, sino como producto de la defensa pública, que responde a la concepción del Estado Social sobre el proceso penal, garantizando la defensa efectiva del procesado (p, 49).

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 05085-2006-AA/TC, f, j, 5, señala que: “sentada esta premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”.

QUIROGA LEÓN (2003), refiere que el derecho de defensa:

También significa que en un medio jurídico y judicial especializado, profesionalizado, donde los agentes de la justicia son lusperitos y donde la intervención de las partes está mediatizada por la Defensa Cautiva, la asistencia letrada de las partes en juicio termina siendo un elemento que incide en el derecho de defensa, de modo que su ausencia determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión constitucionalmente reprobada (p, 72).

El derecho a una adecuada defensa es trascendental, y en un proceso inmediato por el plazo muy corto para una buena defensa de viene vulnerando este derecho. En ese sentido, debemos señalar que la defensa adecuada letrada debe hacerse en un plazo prudente, porque puede suceder que a pesar de que los hechos muestran la culpabilidad de los hechos al presunto autor este precisamente no pudo haberlo hecho, es decir inclusive se afecta a la presunción de inocencia.

2.4. Derecho a la Pluralidad de Instancias

2.4.1. Concepto

El derecho a la pluralidad de instancia constituye un mecanismo de control que posibilita la revisión de las decisiones judiciales por un juez de mayor rango, así nuestra Constitución política, en el artículo 139° inciso 6, ha recogido el sistema de instancia plural frente al sistema de instancia única. La forma como se hace efectiva esta garantía se encuentra relacionada con el llamado “*derecho a los recursos*” y ambos son la base de la teoría impugnatoria. También regulado en el artículo 11° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que “las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión con arreglo a ley, en una instancia superior”.

Los tratados internacionales reconocen esta garantía, así el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: “*El derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior*”, en tanto que el artículo 14 .5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “*toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo precepto por la ley*”.

En la doctrina, se tiene que CUBAS VILLANUEVA (2009) señala que:

La instancia plural reconoce la posibilidad de que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales inferiores puedan ser revisadas y eventualmente modificadas por las autoridades superiores, conforme al sistema de recursos prescrito por la ley. Permite que las partes vuelvan a fundamentar su posición y que los Tribunales Superiores corrijan los errores en que se hubiere incurrido. De ese modo, la garantía de la doble instancia resguarda la rectitud y permite el control sobre las decisiones judiciales (p, 93).

Al respecto, LUJÁN TÚPEZ (2013) señala que:

El derecho a la pluralidad de instancia es el término que el ordenamiento jurídico peruano ha conferido a la garantía procesal o norma-principio que permite a cualquier sujeto sometido al proceso, al procedimiento o en quien repercute la decisión del juez o instructor de un expediente a solicitar una segunda opinión sobre la decisión que provenga del superior de quien la tomó, como expresión tanto de la tutela jurisdiccional efectiva procesal como del debido proceso, así como de la prerrogativa humana a discrepar legalmente de un criterio o posición tomada como manifestación del derecho procesal a recurrir (pp, 207-208).

GUILLERMO CABANELLAS (2003) señala que:

En primer lugar, debemos de tener en cuenta que existen dos definiciones de relieve jurídico acerca de la instancia. La primera se conecta de modo directo con el impulso del procedimiento, ya que a los tribunales no les corresponde la iniciación de la administración de justicia, que se confía a los interesados o a los perjudicados. En este aspecto instancia equivale a iniciativa procesal y a la posterior actividad mediante solicitudes, peticiones o súplicas, de carácter escrito o verbal, esto último en el curso de diligencias, audiencias o vistas. La otra acepción básica de instancia en lo procesal se relaciona con la jerarquía de los tribunales o conjunto de actuaciones practicadas desde la iniciación litigiosa hasta la sentencia definitiva. Así, se llama primera instancia al ejercicio de la acción ante el primer juez que conoce el asunto y segunda instancia al ejercicio de la misma acción ante el juez o tribunal de apelación con el objeto de que reforme la sentencia del primer juez (pp, 442-443).

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0023-2003-AI/TC señala que el derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esa manera

se permita que lo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional.

Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente N° 05194-2005-AA/TC, f, j, 5, sobre el derecho a la pluralidad de instancias señala que:

Igualmente, el Tribunal tiene expresado que, en tanto derecho de configuración legal, corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio. Excluida de ese ámbito de protección se encuentra la evaluación judicial practicada en torno al cumplimiento, o no, de las condiciones o requisitos legalmente previstos, en la medida en que no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en particular, en lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección. El Tribunal, en ese sentido, ha dejado sentado que: (...) la apreciación y aplicación de la ley en un caso concreto es competencia del juez ordinario; (...) el juez constitucional no tiene entre sus competencias el imponerle al juez una determinada forma de interpretar la ley, pues ello implicaría una inadmisibles penetración en un ámbito reservado al Poder Judicial, salvo que para tutelar un derecho fundamental de configuración legal sea necesario interpretar su conformidad con la Constitución.

Finalmente, somos de similar opinión lo señalado por SALAS BETETA (2011) cuando concluye que:

Todo proceso debe ser conocido por dos jueces de distinta jerarquía, cuando así lo requieran los interesados por medio de un recurso de

impugnación. Ello en aplicación del derecho que toda persona tiene de impugnar las decisiones judiciales (p, 34).

En consecuencia, la Pluralidad de instancias es un derecho fundamental de carácter procesal que permite al sentenciado por una sentencia u otra resolución acceder a otra instancia de mayor jerarquía para el análisis de del proceso.

2.4.2. Base Constitucional

El Tribunal Constitucional señala en la sentencia recaída en el expediente N° 3361-2004-AA/TC, señala que: puede aseverarse la necesidad de reconocer una instancia plural. Este derecho es el fundamento a recurrir razonablemente las resoluciones ante las instancias superiores de revisión final, más aún si se ha reconocido este derecho en la Constitución, en su artículo 139, inciso 6, cuando señala que debe existir la pluralidad de instancias. El recurso no debe tener una nomenclatura determinada, pero debe suponer una revisión integral de la recurrida, fundada en el derecho.

El derecho a la pluralidad de la instancia “tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal (LUJÁN TÚPEZ, 2013, p, 208).

Por otra parte, conforme lo establece el inciso 6 del artículo 139 y artículo 244° de la Constitución Política del Estado, la pluralidad de instancias es un principio de la función jurisdiccional, correspondiendo a la Corte Suprema fallar en última instancia cuando la acción se inicia en la Corte Superior; sin embargo, el artículo 141 de nuestra Carta Magna otorga facultades casatorias a la Corte Suprema a fin de poder pronunciarnos sobre el fondo de la controversia, pero ello será siempre y cuando se advierta grave infracción de carácter procesal, o sustantivas de la ley penal.

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo de la presente investigación está constituido por la recopilación de datos estadísticos sobre expedientes seguidos, a través del proceso inmediato en la que se han producido la violación de derechos fundamentales como son el derecho a la libertad personal o ambulatoria, el derecho a un juez imparcial, derecho a una defensa adecuada, todo ello con la finalidad de poder brindar una propuesta legislativa adecuada que contribuya a que el proceso inmediato continúe y sea realmente eficaz sin violar o restringir derechos fundamentales ya sea de la parte agraviada como del imputado, buscado siempre una solución adecuada.

Luego de recopilada la información y la extracción de copias de algunas resoluciones en la que a través del proceso inmediato se ha vulnerado derechos fundamentales del imputado por parte de los diferentes Juzgados Penales: Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados Unipersonales, Juzgados Colegiados y La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la ciudad de Chiclayo, finalmente se aplicó una encuesta a los jueces penales, fiscales y abogados que tienen a su cargo procesos inmediatos con flagrancia delictiva con la finalidad de conocer y comprender como se viene tratando jurídicamente el proceso inmediato en el Distrito Judicial de Lambayeque, así como también comprender cuando se vulneran los derechos fundamentales de los procesados o imputados, siendo estos:

3.1.1. Procesos Inmediatos en el Distrito Judicial de Lambayeque

CUADRO 01: “REGISTRO DE PROCESOS INMEDIATOS DE 29 NOV 2015- 31 ABRIL 2016”

INFORME FINAL DE TESIS

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO”

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE PROCESOS INMEDIATOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

(ESTADISTICA AL 100%)

CUADRO N° 01: PROCESOS INMEDIATOS 29 NOV 2015-31 ABRIL 2016 POR DELITO

N°	DELITO	TOTAL
1	Actos contra el pudor	8
2	Apropiación Ilícita	1
3	Conducción Estado Ebriedad	891
4	Cohecho	2
5	Desobediencia a la Autoridad	17
6	Estafa	4
7	Feminicidio	1
8	Homicidio	6
9	Hurto	127
10	Lesiones	21
11	Microcomercialización de drogas	17
12	Omisión Asistencia Familiar	1953
13	Receptación	9
14	Robo	92
15	Tenencia Ilegal de Armas	7
16	Tráfico Ilícito de Drogas	10
17	Violación Sexual	3
18	Violencia Contra Autoridad	4
19	Otros	74
	TOTAL	3247

Datos proporcionados por el Área de Administración de la Corte de Justicia de Lambayeque en el mes de Julio de 2016.

**CUADRO 02: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS Y DE FLAGRANCIA
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016”**

INFORME FINAL DE TESIS

**“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN
EL PROCESO INMEDIATO”**

**RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE PROCESOS INMEDIATOS EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE**

(ESTADISTICA AL 100%)

**CUADRO N° 02: INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS Y DE
FLAGRANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016**

ORGANO JURISDICCIONAL	SEDES	TOTAL	TOTAL POR SEDE
1° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	SEDE CENTRAL	501	2074
2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo		514	
3° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo		535	
4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo		524	
2 Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz		446	
Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque	SUB SEDES	255	1317
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe		121	
Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe		111	
Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén		359	
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo		5	
Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio		15	
Juzgado de Investigación Preparatoria de Oyotún		5	
TOTAL		3391	

Datos proporcionados por el Área de Administración de la Corte de Justicia de Lambayeque en el mes de Julio de 2016.

**CUADRO 03: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: AL 13 DE MARZO DE
2016”.**

INFORME FINAL DE TESIS

**“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL
PROCESO INMEDIATO”**

**RECOPIACIÓN INFORMACIÓN DE PROCESOS INMEDIATOS EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE**

(ESTADISTICA AL 100%)

**CUADRO N° 03: INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS
JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: AL 13 DE MARZO DE
2016**

CUENTA EXPEDIENTE	NORMAL	TURNOS	Total general
1° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	209	18	227
2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	213	15	228
3° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	222	18	240
4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	218	7	225
5° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo	1		1
1° Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén	161	7	168
2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén	2	2	4
2° Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortíz	64	4	68
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo	4	1	5
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe	42		42
Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque	61	7	68
Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe	49	2	51
Juzgado de Investigación Preparatoria de Oyotún	4		4
Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio	10	5	15
Total General	1260	86	1346

Datos proporcionados por el Área de Administración de la Corte de Justicia de Lambayeque en el mes de Julio de 2016.

CUADRO 04: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS: AL 13 DE MARZO DE 2016”.

INFORME FINAL DE TESIS

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO”

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE PROCESOS INMEDIATOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

(ESTADISTICA AL 100%)

CUADRO N° 04: INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS: AL 13 DE MARZO DE 2016				
	CUENTA EXPEDIENTE	NORMAL	TURNO	Total General
	3° Juzgado Penal Unipersonal	65	3	68
	4° Juzgado Penal Unipersonal	41	3	44
	5° Juzgado Penal Unipersonal	40	3	43
	6° Juzgado Penal Unipersonal	41	2	43
	Juzgado Colegiado	6	7	13
	Juzgado Colegiado T	9	10	19
	3° Juzgado Penal Unipersonal Jaén	10	1	11
	Juzgado Penal Colegiado de Jaén	2		2
	Juzgado Penal Unipersonal de Lambayeque	4	1	5
	Juzgado Penal Unipersonal de Motupe	1	1	2
	Juzgado Penal Unipersonal de Oytún	1		1
	Total General	220	31	251

Datos proporcionados por el Área de Administración de la Corte de Justicia de Lambayeque en el mes de Julio de 2016.

**CUADRO 05: “EXPEDIENTES CON PROCESOS INMEDIATOS EN LOS QUE SE
HAN VULNERADO DERECHOS FUNDAMENTALES”**

INFORME FINAL DE TESIS		
“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO”		
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE PROCESOS INMEDIATOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE		
(ESTADISTICA AL 100%)		
97 EXPEDIENTES		
CUADRO N° 05: EXPEDIENTES CON PROCESOS INMEDIATOS EN LOS QUE SE HAN VULNERADO DERECHOS FUNDAMENTALES		
N° EXPEDIENTE	DELITO	DERECHO VULNERADO
4053-2016	Extorsión	Libertad personal. De defensa. A la imparcialidad de Juez
4522-2016	Robo Agravado	Libertad personal. De defensa. A la imparcialidad de Juez
3252-2016	Robo Agravado	Al Plazo razonable
2506-2016	Robo Agravado	Al plazo razonable
9352-2016	Robo Agravado	Al Juez Imparcial
10026-2016	Hurto Agravado	Al plazo razonable
887-2017	Conducción en Estado Ebriedad	A la libertad personal
1071-2017	Conducción en Estado Ebriedad	A la libertad personal
7583-2017	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
141-2017	Conducción en Estado Ebriedad	Al Plazo razonable
3268-2017	Conducción en Estado Ebriedad	A la libertad personal

2119-2017	Hurto agravado-tentativa	Al Plazo razonable
10532-2016	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
3268-2017	Robo agravado-tentativa	A la libertad personal
2318-2017	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
229-2017	Conducción en Estado Ebriedad	Al Plazo razonable
2425-2017	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
4909-2017	Conducción en Estado Ebriedad	A la libertad personal
4790-2016	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
4325-2017	Lesiones culposas	A la libertad personal
5251-2017	Omisión a la Asistencia Familiar	Al Plazo razonable
Datos proporcionados por el Área de Administración de la Corte de Justicia de Lambayeque en el mes de Octubre de 2017.		

3.1.2. Cuadros Estadísticos – Encuestas Aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo.

CUADRO N° 06: “CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

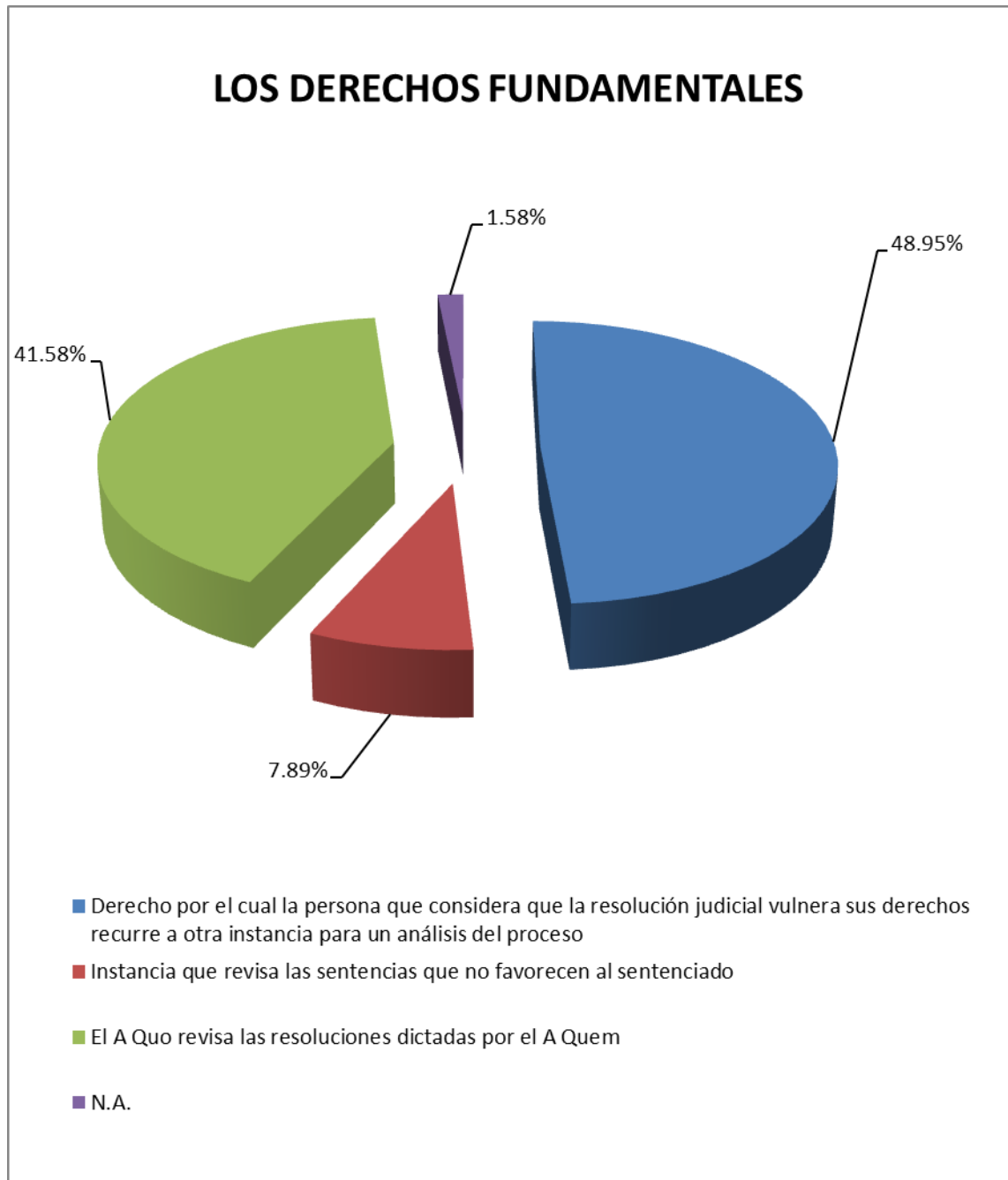
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 06 : CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
1.- ¿Cuál de los siguientes conceptos logra ajustarse con mayor precisión doctrinaria a la idea de los Derechos fundamentales? (puede marcar más de una opción):	Constituyen la máxima expresión jurídica que garantizan y protegen las facultades y libertad que son una manifestación de la dignidad humana.	104	52.79%
	Derechos reconocidos en la Constitución taxativamente en su artículo 2°.	36	18.27%
	Su violación entraña, a parte de un perjuicio individual, una repercusión social cuyo desconocimiento puede afectar a toda la comunidad.	56	28.43%
	N.A.	1	0.51%
T O T A L		197	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 01



CUADRO N° 07: "EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD"

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

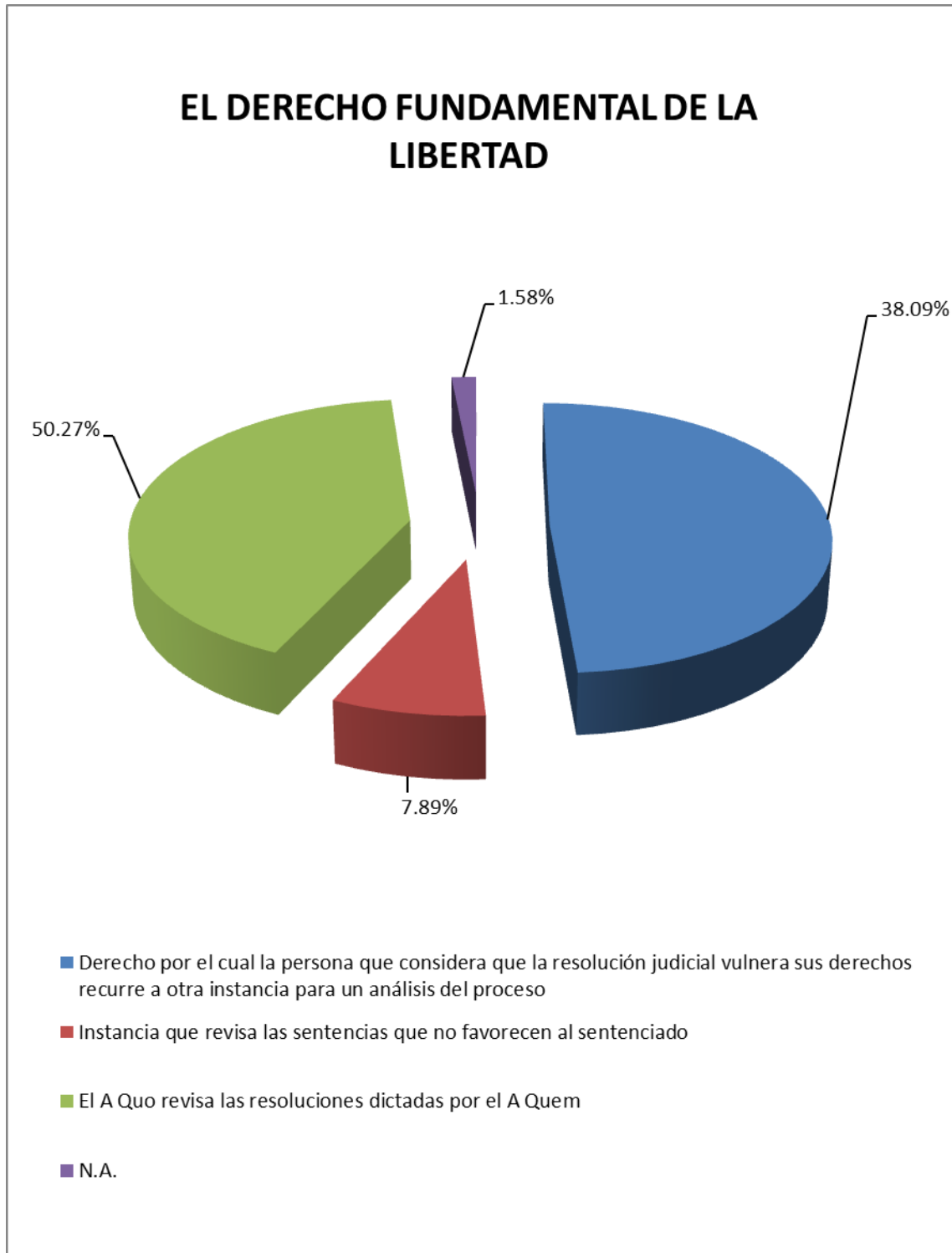
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 07 : EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
2.- A su criterio, el Derecho Fundamental a la libertad se concibe como: (puede marcar más de una opción):	En su aspecto de libertad física garantiza a su titular a no verse privado de ésta, ni ser detenido o sometido a restricciones en supuestos distintos a los previstos por la constitución.	72	38.09%
	Es el requisito necesario para el ejercicio de otros derechos y sólo con limitaciones reguladas.	17	8.99%
	La libertad se priva por mandato judicial o por la autoridad policial en caso de flagrante delito.	95	50.27%
	N.A.	5	2.65%
T O T A L		189	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 2



CUADRO N° 08: “EL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL”

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

**TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS
QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO**

Total encuestados: 180 personas

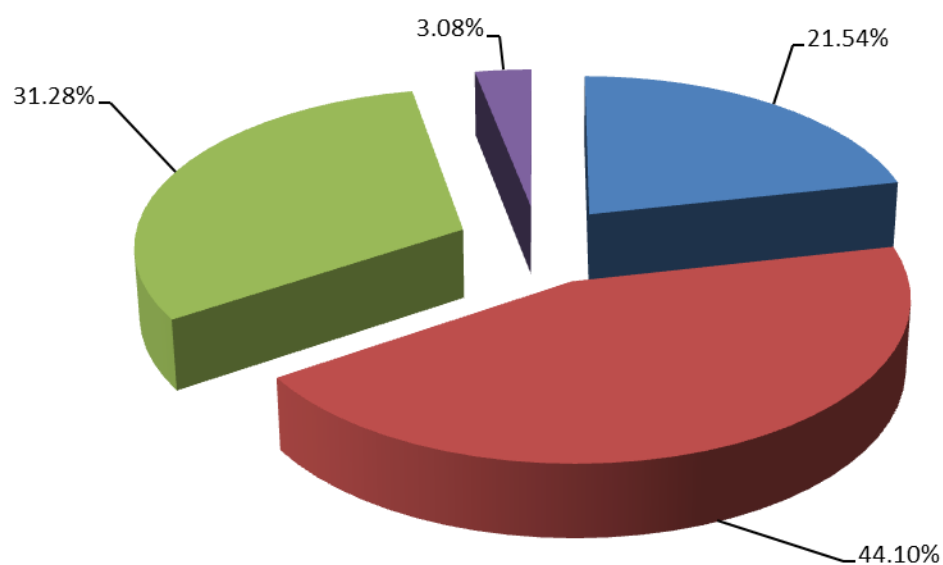
CUADRO N° 08 : EL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
3.- ¿Cuál de los conceptos, que a continuación se le mencionan, se ajusta con mayor proximidad, a la idea del derecho a un juez imparcial?, (puede marcar más de una opción):	Garantía esencial de la función jurisdiccional, ligada a la preservación del principio acusatorio.	42	21.54%
	Un juez desinteresado resuelve el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial.	86	44.10%
	Sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional.	61	31.28%
	N.A.	6	3.08%
T O T A L		195	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 3

EL DERECHO A LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ



- Garantía esencial de la función jurisdiccional, ligada a la preservación del principio acusatorio.
- Un juez desinteresado resuelve el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial
- Sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional
- N.A.

CUADRO N° 09: “EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS”

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

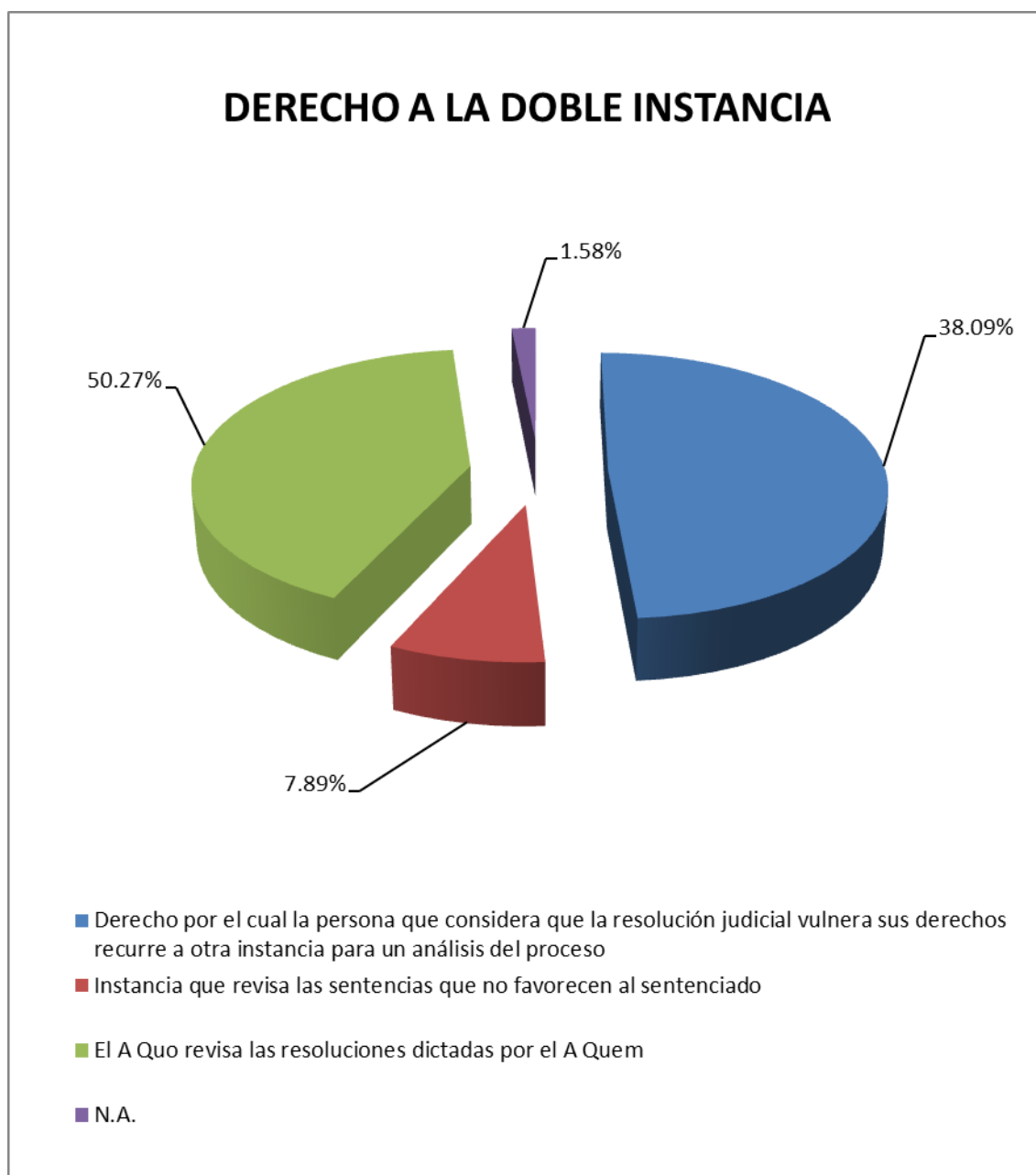
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 09 : EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
4.- Dentro de los conceptos señalados sobre el derecho a la Pluralidad de Instancias ¿Cuál de ellas considera que mejor aborda su tratamiento? (puede marcar más de una opción):	Derecho por el cual la persona que considera que la resolución judicial vulnera sus derechos recurre a otra instancia para un análisis del proceso.	93	48.95%
	Instancia que revisa las sentencias que no favorecen al sentenciado.	15	7.89%
	El A Quo revisa las resoluciones dictadas por el A Quem	79	41.58%
	N.A.	3	1.58%
T O T A L		190	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 4



CUADRO N° 10: "CONCEPTUALIZACIÓN DE FLAGRANCIA"

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

Total encuestados: 180 personas

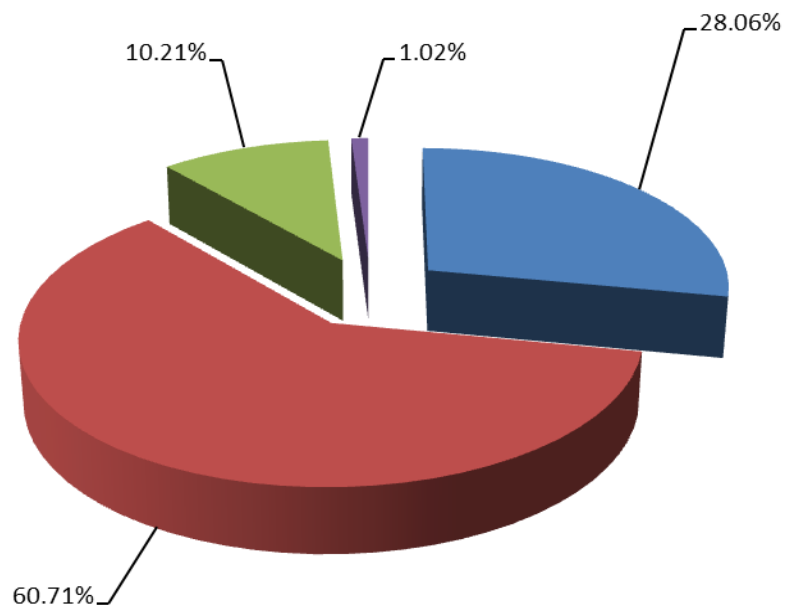
CUADRO N° 10 : CONCEPTUALIZACIÓN DE FLAGRANCIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
5.- A su entender, la Flagrancia puede ser definida como: <u>(puede marcar más de una opción):</u>	Supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir.	55	28.06%
	Sorprender a alguien con las manos en la masa, incluye también a la Cuasiflgrancia y flagrancia presunta.	119	60.71%
	La policía captura cometiendo el hecho delictivo.	20	10.21%
	N.A.	2	1.02%
T O T A L		196	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 05

EL CONCEPTO DE FLAGRANCIA



- Supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir
- Sorprender a alguien con las manos en la masa, incluye también a la Cuasiflgrancia y flagrancia presunta
- La policía captura cometiendo el hecho delictivo
- N.A.

CUADRO N° 11: "LA DETENCIÓN DE LA FLAGRANCIA"

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

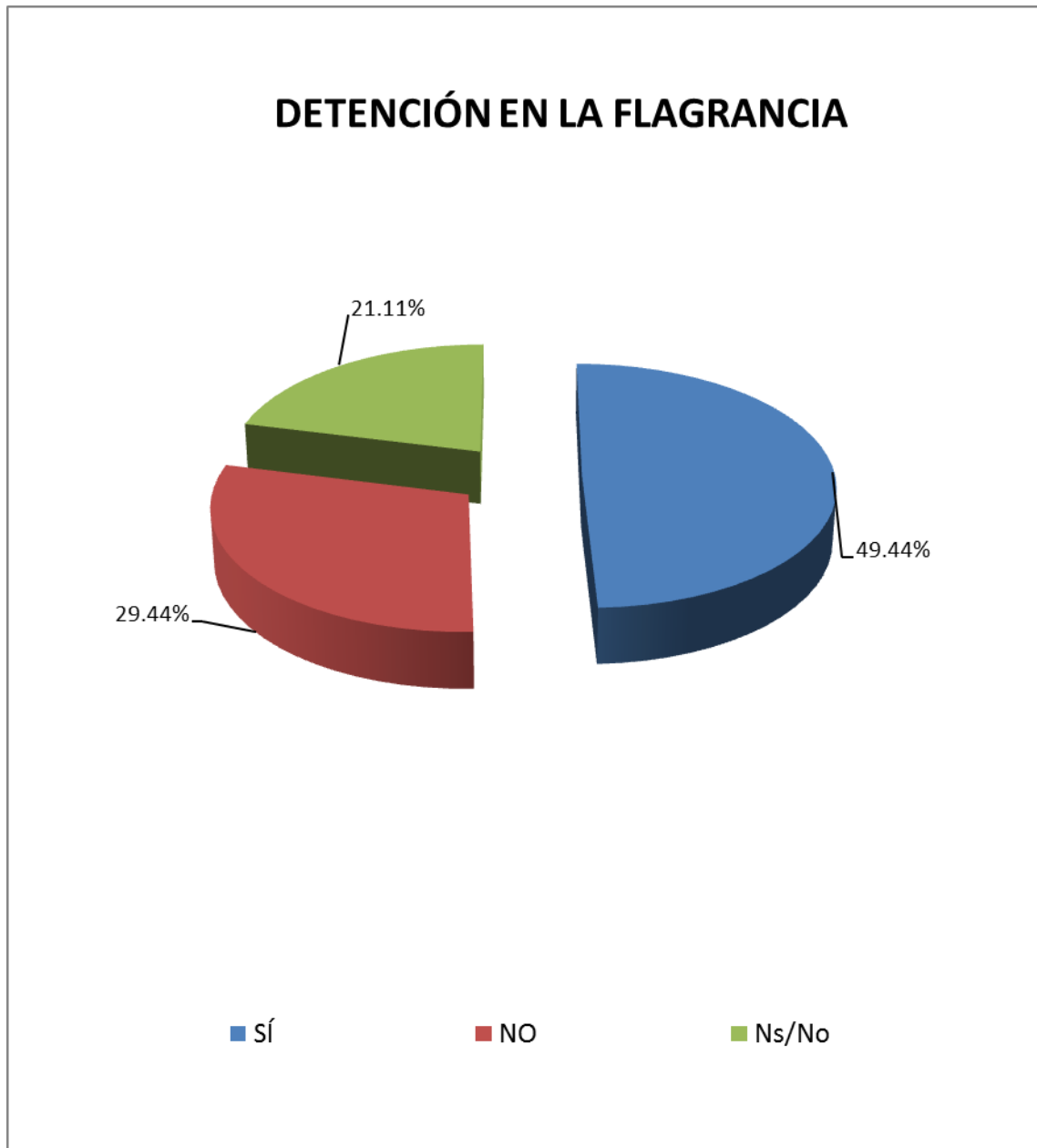
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 11 : LA DETENCIÓN EN LA FLAGRANCIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6.- A los fines de comprender la detención en la flagrancia, le preguntamos: ¿Considera que es la medida coercitiva excepcional, por la cual se dispone el encarcelamiento del imputado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia, resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave?	SÍ.	137	76.11%
	NO.	29	16.11%
	Ns/No.	14	7.78%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 06



CUADRO N° 12: “EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA”

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

Total encuestados: 180 personas

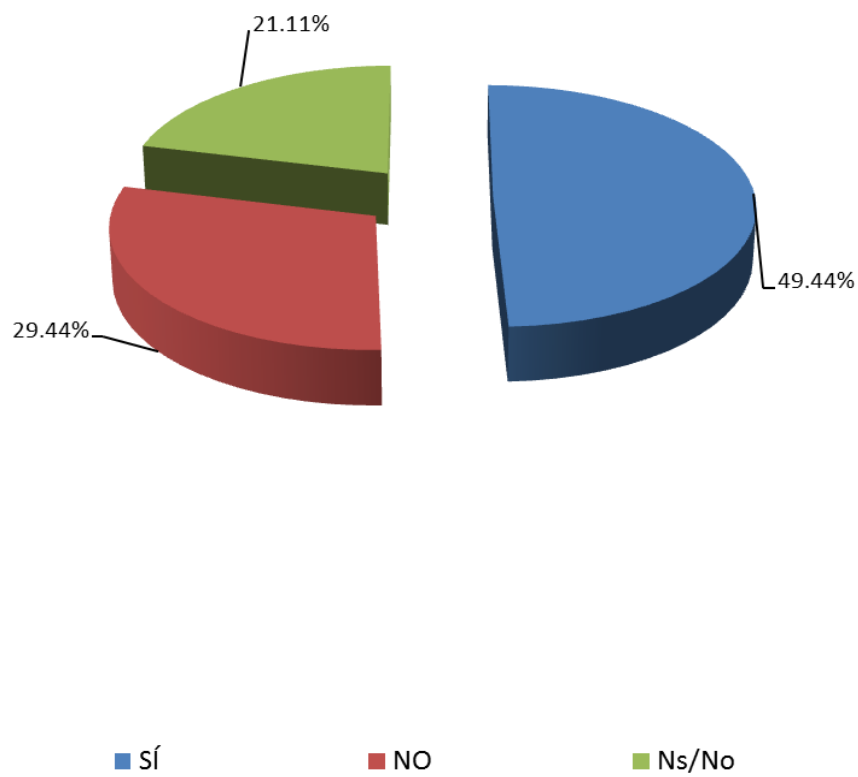
CUADRO N° 12 : EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
7.- Según su percepción, sobre El Decreto Legislativo N° 1194 que tiene como principal objetivo regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, considera que: ¿El proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación?	SÍ.	138	76.67%
	NO.	31	17.22%
	Ns/No.	11	6.11%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 07

LA FLAGRANCIA EN EL PROCESO INMEDIATO



**CUADRO N° 13: “VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD POR EL D.
LEG. N° 1194”**

INFORME FINAL DE TESIS

**"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO
INMEDIATO"**

**TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS
QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO**

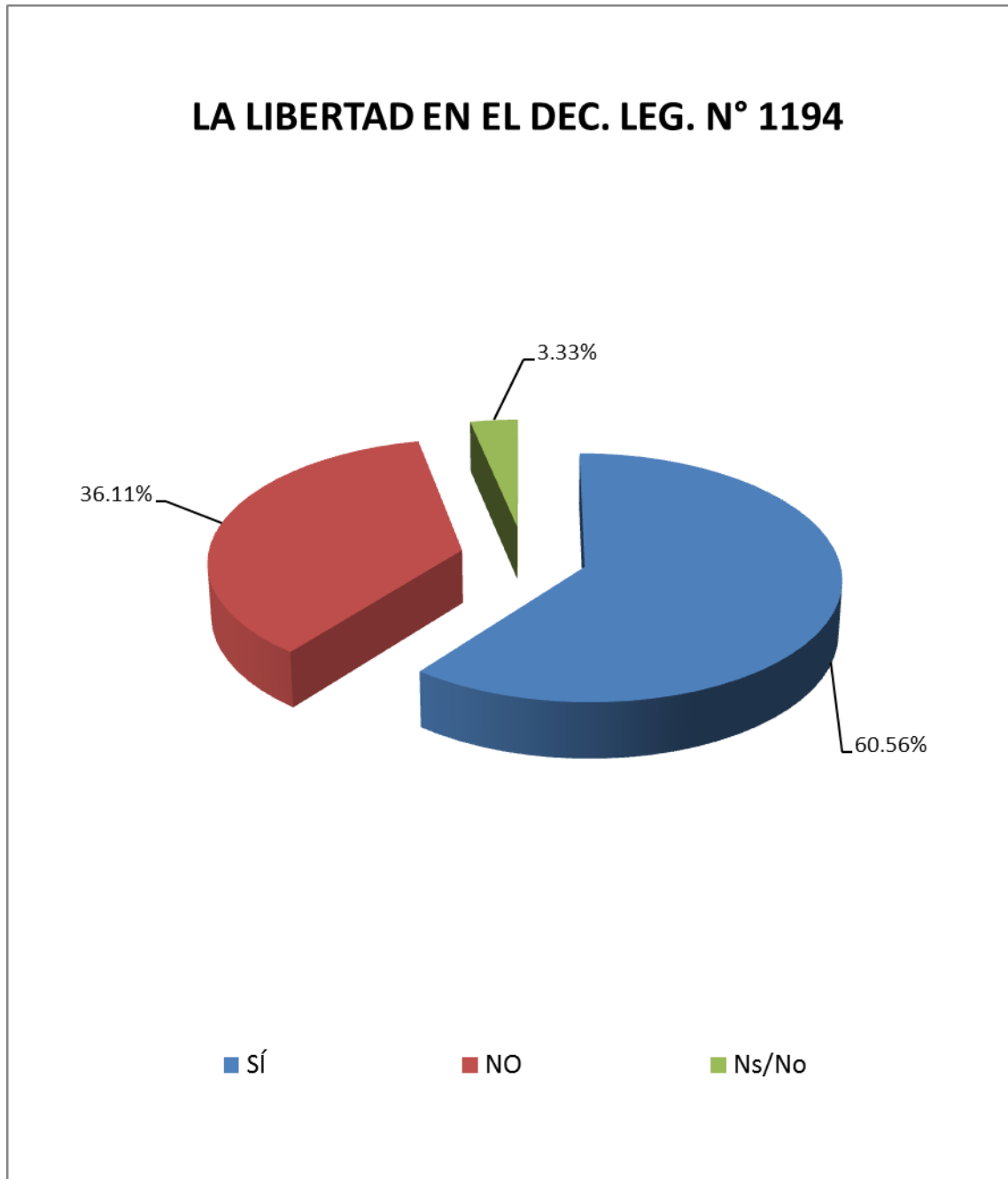
Total encuestados: 180 personas

**CUADRO N° 13 : VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD POR EL DEC.
LEG. N° 1194**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
8.- A su criterio: ¿Considera que con el Decreto Legislativo N° 1194 se viola el derecho a la libertad al privarlo de ella a una persona hasta por 72 horas sin que exista necesidad de ello, cuando la norma constitucional señala que sólo puede ser hasta por 24 horas?, como por ejemplo en los casos de conducción en estado de ebriedad, pese a aplicarse el principio de oportunidad sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es posible requerir prisión preventiva, el imputado de este delito tendrá que permanecer privado de su libertad como mínimo tres días.	Sí.	109	60.56%
	NO.	65	36.11%
	Ns/No.	6	3.33%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 08



CUADRO N° 14: “PLAZOS CORTOS EN EL PROCESO INMEDIATO”

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

Total encuestados: 180 personas

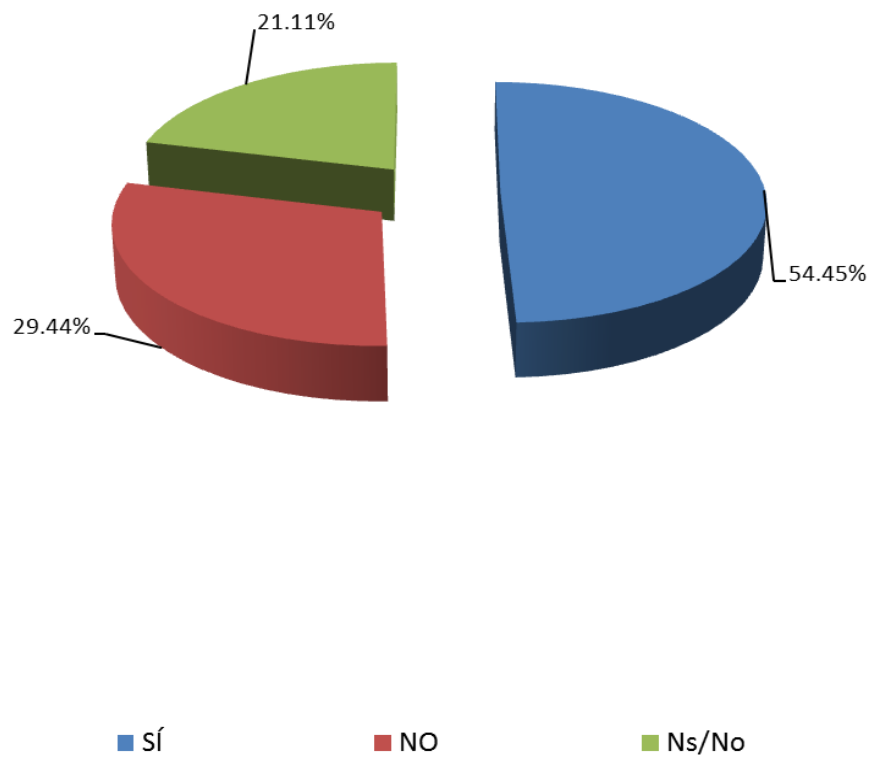
CUADRO N° 14 : PLAZOS CORTOS EN EL PROCESO INMEDIATO

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
9.- En el Proceso inmediato los plazos procesales son muy cortos: ¿Considera que se viola el derecho a una defensa letrada adecuada, toda vez que incoado el proceso inmediato, el juez competente fijará en un plazo no mayor de 72 horas la audiencia única de juicio inmediato, que además es oral, publica e inaplazable y en donde las partes tendrán el mismo plazo, es decir las 72 horas, para convocar sus órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos?	SÍ.	98	54.45%
	NO.	69	38.33%
	Ns/No.	13	7.22%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 09

PLAZOS CORTOS EN EL PROCESO INMEDIATO



CUADRO N° 15: “AFECTACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

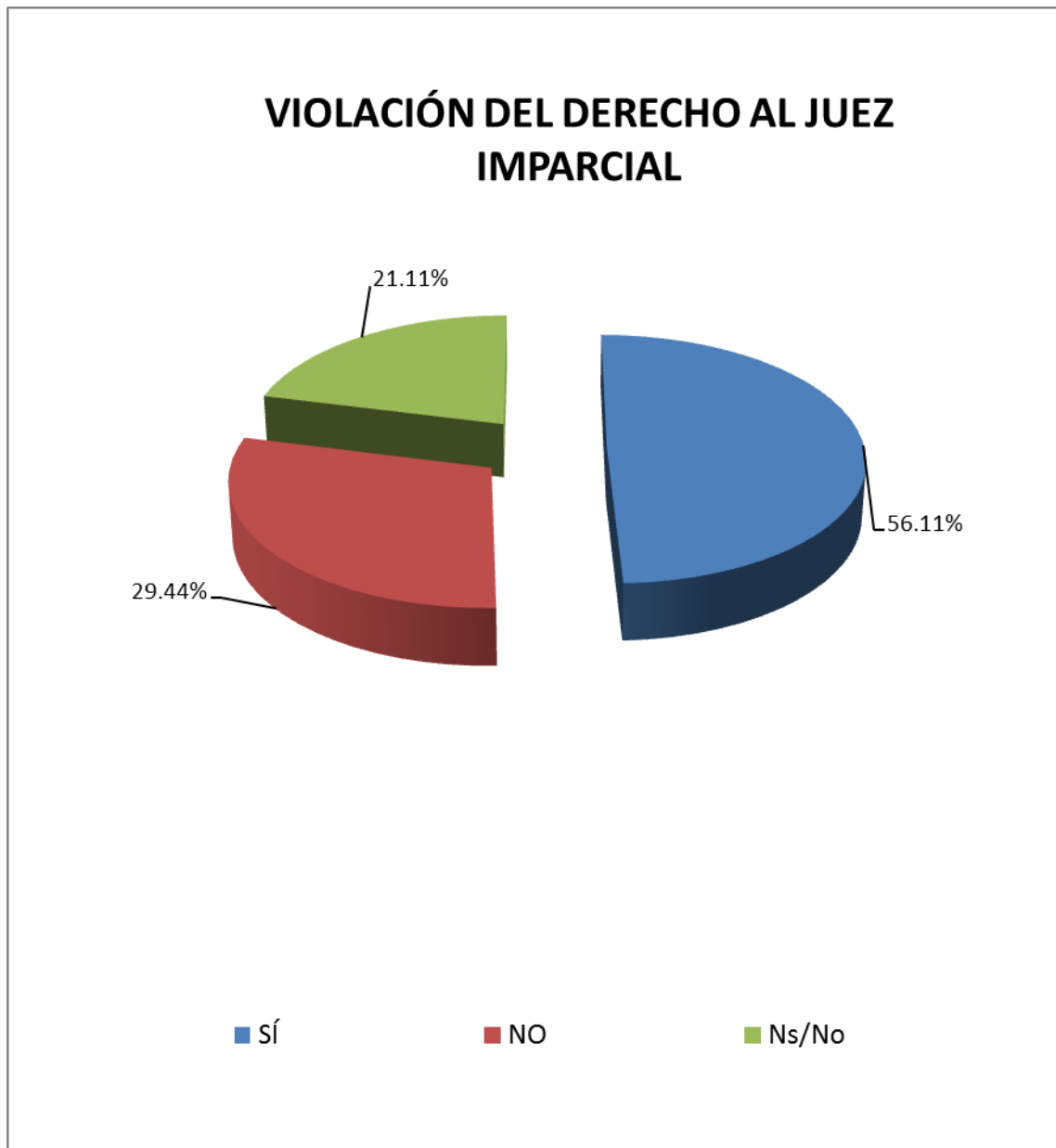
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 15 : AFECTACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
10.- El artículo 447°, inciso 6, del Código Procesal Penal refiere que: Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. <u>CONSIDERA QUE: ¿Con esta redacción se entiende que es el juez penal unipersonal o colegiado quien dictará acumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio oral, AFECTANDO DE ESTA MANERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN JUEZ IMPARCIAL,</u> ya que como bien sabemos el juez de juzgamiento no puede conocer actos de investigación pues perjudica al procesado al generarse un prejuicio sobre su responsabilidad?	Sí.	101	56.11%
	NO.	76	42.22%
	Ns/No.	3	1.67%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 10



CUADRO N° 16: “MODIFICATORIA LEGISLATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1194”

INFORME FINAL DE TESIS

"LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO INMEDIATO"

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS QUE HAN LLEVADO PROCESOS INMEDIATOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

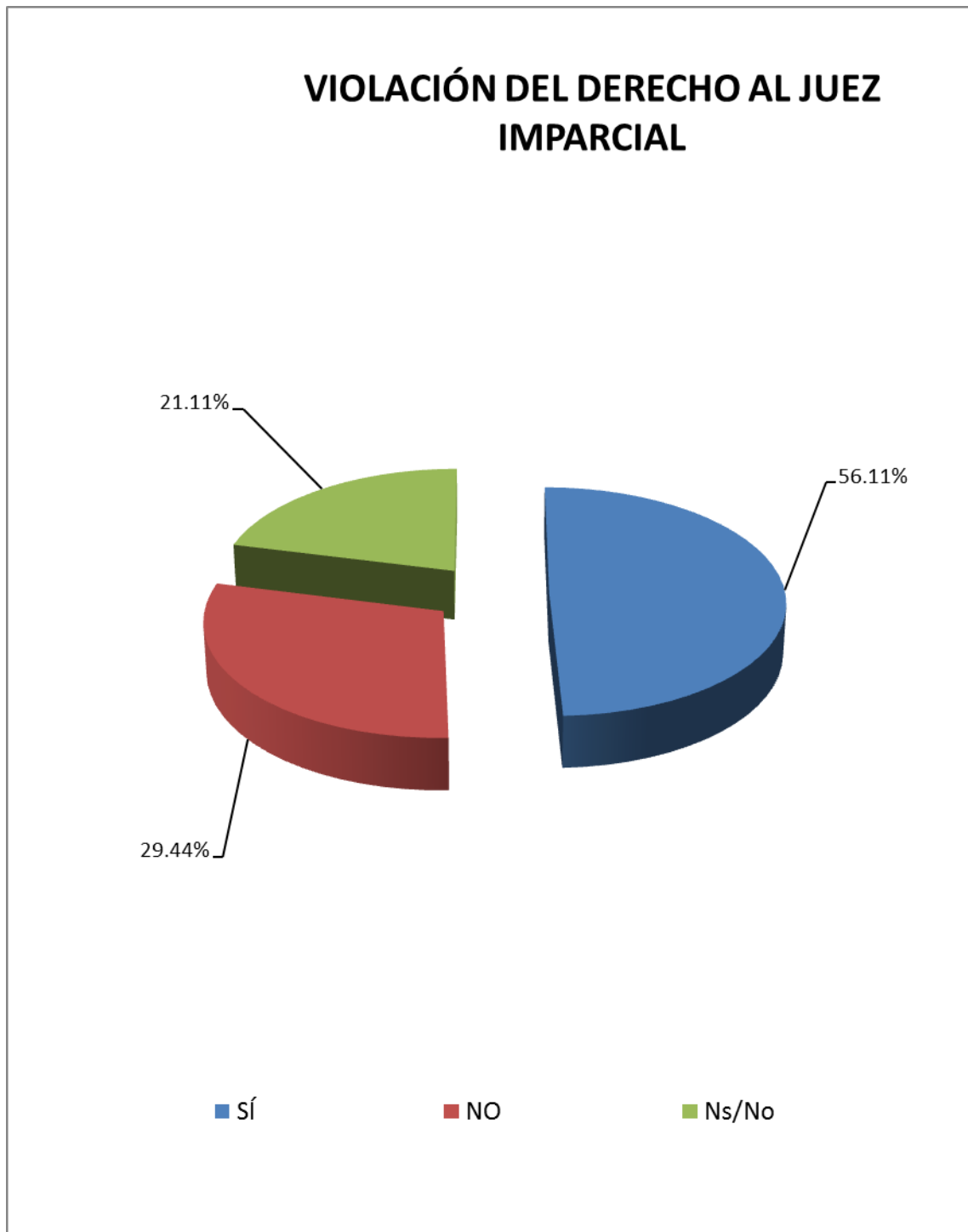
Total encuestados: 180 personas

CUADRO N° 16: MODIFICATORIA LEGISLATIVA AL DEC. LEG. N° 1194

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
11.- ¿Considera que deben hacerse modificatorias al Decreto Legislativo N° 1194 para corregir las falencias que presenta para no continuar vulnerándose derechos fundamentales como los mencionados: Derecho a la libertad, a la defensa técnica adecuada, a un juez imparcial, al plazo razonable?	SÍ.	101	52.78%
	NO.	76	32.78%
	Ns/No.	3	14.44%
T O T A L		180	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2016.

GRÁFICO 11



3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Antes de abordar el análisis de los resultados del trabajo de campo, debemos indicar que, la presente investigación tuvo como referente territorial, esto es, el ámbito geográfico en el cual se desarrolló, al Departamento de Lambayeque, y muy especialmente en su ciudad capital, la ciudad de Chiclayo, taxativamente en los Juzgados Penales.

Así, tenemos que los resultados del trabajo de campo han sido recopilados de la aplicación de una encuesta innominada aplicada a Jueces, Fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, sobre el proceso inmediato por flagrancia delictiva, así como también la recopilación de datos estadísticos proporcionados por el área de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ubicada en la ciudad de Chiclayo, sobre la cantidad de procesos inmediatos solucionados desde su aplicación, esto es desde el 29 de Noviembre de 2015 hasta la actualidad.

A través del empleo del programa Microsoft Office Excel 2010, se logró la elaboración y diagramación de los Cuadros y construcción de los Gráficos Estadísticos, lo que nos permite un sencillo acercamiento y una práctica interpretación para proporcionar una mejor información acerca del desenvolvimiento del proceso inmediato y la afectación que con este proceso se viene dando sobre los derechos fundamentales de los procesados como son el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la imparcialidad del juez, el derecho a una defensa adecuada y a los plazos razonables.

Así pues, una vez efectuada la referencia correspondiente a la obtención de los datos y posterior elaboración de los Cuadros y Gráficos Estadísticos, la misma que está estructurada de la siguiente manera:

El apartado que contiene los cuadros estadísticos se denomina **Procesos Inmediatos en el Distrito Judicial de Lambayeque**, el mismo que contiene cinco cuadros: siendo el primero: **CUADRO 01: “REGISTRO DE PROCESOS INMEDIATOS DE 29 NOV 2015- 31 ABRIL 2016”** en cual muestra que desde

el 29 de Noviembre de 2015, fecha en que inició su aplicación a nivel de todo el territorio nacional, hasta el mes de Abril de 2016 se han registrados 3247 procesos inmediatos por flagrancia y otros supuestos, siendo que los que los delitos que registran mayor cantidad de procesos inmediatos es el delito de Omisión a la asistencia familiar con 1953 casos, luego el delito de conducción en estado de ebriedad con 891 casos, el delito de hurto con 127, el delito de robo con 92 casos, seguido del delito de lesiones con 21 procesos, Microcomercialización de drogas y desobediencia a la autoridad con 17 cada uno, el delito de tráfico ilícito de drogas con 10 casos por ser los de mayor incidencia.

El segundo cuadro denominado: **CUADRO 02: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS Y DE FLAGRANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016”**, muestra que en la sede central que contiene los Juzgados de Investigación Preparatoria de la ciudad de Chiclayo hasta el mes de junio del presente año, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria han ingresado un total de 501 casos, en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria han ingresado un total de 514 casos, en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria han ingresado un total de 535 casos, en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria han ingresado un total de 524 casos. Así mismo, el presente cuadro muestra que en las subsedes como son: en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz han ingresado un total de 446 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque han ingresado un total de 255 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe han ingresado un total de 121 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe han ingresado un total de 111 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén han ingresado un total de 359 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo han ingresado un total de 5 casos, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio han ingresado un total de 15 casos y finalmente

en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Oytún han ingresado un total de 5 casos.

Del **CUADRO 03: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: AL 13 DE MARZO DE 2016”**, se desprende que en los juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Lambayeque se han registrado 1346 expedientes desde el 29 de Noviembre del 2015 hasta el 13 de marzo de 2016 de los cuales en los Juzgados de la Sede Central de Chiclayo, es decir del primer juzgado al Quinto Juzgados de Investigación Preparatoria se han registrado un total de 921 expedientes con proceso inmediato y en las sub-sedes los Juzgados de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, de Lambayeque, de Ferreñafe, de Motupe, de Jaén, de San Ignacio, de Oytún se han registrado un total de 425 expedientes tramitados bajo el proceso inmediato.

En el **CUADRO 04: “INGRESO DE PROCESOS INMEDIATOS EN LOS JUZGADOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS: AL 13 DE MARZO DE 2016”**, se tiene que desde el 29 de Noviembre de 2015 hasta el 13 de marzo de 2016 han ingresado a los juzgados Unipersonales y Colegiados del Distrito Judicial de Lambayeque un total de 251 expedientes, de los cuales Los juzgados Penales Unipersonales (1°, 2°, 3°, 4° y 5°) y Juzgado Colegiado y el Juzgado Colegiado Transitorio de la sede central de la ciudad de Chiclayo han ingresado un total de 230 expedientes, mientras que en los juzgados penales Unipersonales de las sub sedes: 3° de Jaén, de Lambayeque, de Motupe, de Oytún y el Juzgado penal Colegiado de Jaén, se registraron un total de 21 procesos inmediatos.

Finalmente, en el **“CUADRO 05: EXPEDIENTES CON PROCESOS INMEDIATOS EN LOS QUE SE HAN VULNERADO DERECHOS FUNDAMENTALES”**, se desprende que se han analizados 97 expedientes tramitados bajo el proceso inmediato, aplicando el 3% como muestra del total de expedientes de 3247 expedientes, resultando que en los expedientes N°

4053-2016, N° 4522-2016, N° 3252-2016, N° 2506-2016, N° 9352-2016 se han vulnerado derechos fundamentales como son el derecho a la libertad personal, el derecho de defensa, el derecho a la imparcialidad del juez y el derecho al debido proceso.

El Segundo apartado denominado: **Cuadros Estadísticos – Encuestas Aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo**, contiene los datos estadísticos referentes a las opiniones vertidas por los Jueces, Fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, que hayan o llevan procesos inmediatos, a través de una encuesta, plasmados en los siguientes cuadros estadísticos:

En el **CUADRO N° 06: “CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES”**, que contiene la interrogante **¿Cuál de los siguientes conceptos logra ajustarse con mayor precisión doctrinaria a la idea de los Derechos fundamentales?** (puede marcar más de una opción), se tiene que de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo y de 197 opiniones vertidas, se tiene que el 52.7% conceptualizó a los derechos fundamentales como aquellos que constituyen la máxima expresión jurídica que garantizan y protegen las facultades y libertad que son una manifestación de la dignidad humana, luego un 18.27% del total de encuestados señaló que son derechos reconocidos en la Constitución taxativamente en su artículo 2°, un 28.43% precisa que su violación entraña, a parte de un perjuicio individual, una repercusión social cuyo desconocimiento puede afectar a toda la comunidad, mientras que un 0.51% del total de ellos prefirió no emitir opinión alguna. Lo dicho anteriormente se demuestra con el GRÁFICO 01.

Del **CUADRO N° 07: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD”**, que contiene la pregunta de a su criterio, el Derecho Fundamental a la libertad se concibe como: (puede marcar más de una opción), se desprende que de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de

Chiclayo y de 189 opiniones vertidas se tiene que para el 38.09% del total de encuestados concibe a este derecho como: en su aspecto de libertad física garantiza a su titular a no verse privado de ésta, ni ser detenido o sometido a restricciones en supuestos distintos a los previstos por la constitución, luego el 8.99% del total de encuestados señala que es el requisito necesario para el ejercicio de otros derechos y sólo con limitaciones reguladas, mientras que para el 50.27% del total de ellos refiere que la libertad se priva por mandato judicial o por la autoridad policial en caso de flagrante delito, y finalmente el 2.65% restante prefirió no emitir opinión alguna, siendo que todo lo indicado se corrobora con el GRÁFICO 02.

Se desprende del **CUADRO N° 08: “EL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL”**, ante la pregunta ¿Cuál de los conceptos, que a continuación se le mencionan, se ajusta con mayor proximidad, a la idea del derecho a un juez imparcial?, (puede marcar más de una opción), de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados, y de 195 opiniones vertidas que el 21.54% refiere que el derecho al juez imparcial es la Garantía esencial de la función jurisdiccional, ligada a la preservación del principio acusatorio, por su parte un 44.10% señaló que un juez desinteresado resuelve el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial, luego un 31.28% del total de encuestados indicó que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional, por último un 3.08% restante prefirió no emitir opinión. <lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO N° 03.

En el **CUADRO N° 09: “EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS”**, se desprende que dentro de los conceptos señalados sobre el derecho a la Pluralidad de Instancias ¿Cuál de ellas considera que mejor aborda su tratamiento? (puede marcar más de una opción), de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados, así como de 190 opiniones vertidas, el 48.95% considera que la pluralidad de instancias es Derecho por el cual la persona que considera que la resolución judicial vulnera sus derechos

recurre a otra instancia para un análisis del proceso, para un 7.89% del total de encuestados este derecho es la Instancia que revisa las sentencias que no favorecen al sentenciado, para un 41.58% refirió que el A Quo revisa las resoluciones dictadas por el A Quem, mientras que el 1.58% restante no emitió opinión valedera, todo esto se demuestra con el GRÁFICO 4.

Del **CUADRO N° 10: “CONCEPTUALIZACIÓN DE FLAGRANCIA”**, y a su entender, la Flagrancia puede ser definida como: (puede marcar más de una opción), de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo y de 196 opiniones vertidas, se tiene que el 28.06% del total de encuestados conceptualiza a la flagrancia como el supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir, por su parte un 60.71% señala que sorprender a alguien con las manos en la masa, incluye también a la Cuasiflgrancia y flagrancia presunta, para un 10.21% la policía captura cometiendo el hecho delictivo y el 1.02% prefirió no emitir opinión alguna, siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO N° 05.

Sobre la detención por flagrancia delictiva, el **CUADRO N° 11: “LA DETENCIÓN EN LA FLAGRANCIA”**, que contiene la pregunta: a los fines de comprender la detención en la flagrancia, le preguntamos: ¿Considera que es la medida coercitiva excepcional, por la cual se dispone el encarcelamiento del imputado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia, resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave?, de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados se tiene que para el 76.11% de encuestados considera que sí es la medida coercitiva excepcional por la cual se dispone el encarcelamiento del imputado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia, resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave, mientras que el

16.11% no lo considera de esta manera y el 7.78% se reservó su derecho a opinar, lo cual se corrobora con el GRÁFICO N° 06.

Ahora bien, del **CUADRO N° 12: “EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA”**, y según su percepción, sobre **El Decreto Legislativo N° 1194** que tiene como principal objetivo regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, considera que: ¿El proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación?, de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados se tiene que el 76.67% señaló que el proceso inmediato sí es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación, mientras que el 17.22% de los encuestados no lo considera de esta manera y el 6.115 se reservó su derecho a opinar, Siendo que todo ello se demuestra con el GRÁFICO N° 07.

Sobre la vulneración de los derechos fundamentales se tiene que el **CUADRO N° 13: “VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD POR EL DEC. LEG. N° 1194”**, que contiene la interrogante a su criterio: ¿Considera que con el Decreto Legislativo N° 1194 se viola el derecho a la libertad al privarlo de ella a una persona hasta por 72 horas sin que exista necesidad de ello, cuando la norma constitucional señala que sólo puede ser hasta por 24 horas?, como por ejemplo en los casos de conducción en estado de ebriedad, pese a aplicarse el principio de oportunidad sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es posible requerir prisión preventiva, el imputado de este delito tendrá que permanecer privado de su libertad como

mínimo tres días. De un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que para el 60.65% Sí considera que el Decreto Legislativo N° 1194 viola el derecho a la libertad al privarlo de ella a una persona hasta por 72 horas sin que exista necesidad de ello, cuando la norma constitucional señala que sólo puede ser hasta por 24 horas, siendo de opinión contraria el 36.11% de los encuestados y el 3.33% restante no emitió opinión alguna. Lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO N° 08.

Otro derecho vulnerado por el proceso inmediato es el derecho sobre los plazos, así teneos que el **CUADRO N° 14: “PLAZOS CORTOS EN EL PROCESO INMEDIATO”**, que contiene la pregunta en el Proceso inmediato los plazos procesales son muy cortos: ¿Considera que se viola el derecho a una defensa letrada adecuada, toda vez que incoado el proceso inmediato, el juez competente fijará en un plazo no mayor de 72 horas la audiencia única de juicio inmediato, que además es oral, publica e inaplazable y en donde las partes tendrán el mismo plazo, es decir las 72 horas, para convocar sus órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos?, de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que para el 54.45% de ellos el Proceso inmediato Sí viola el derecho a una defensa letrada adecuada, mientras que el 38.33% no considera que viole este derecho, y finalmente el 7.22% restante de los encuestados ´se reservó su derecho a emitir opinión, Lo cual queda corroborado con el GRÁFICO N° 09.

El derecho al juez Imparcial también se ve vulnerado con el proceso inmediato, en ese sentido, el **CUADRO N° 15: “AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ”**, que contiene la interrogante: el artículo 447°, inciso 6, del Código Procesal Penal refiere que: Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo

responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. CONSIDERA QUE: ¿Con esta redacción se entiende que es el juez penal unipersonal o colegiado quien dictará acumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio oral, AFECTANDO DE ESTA MANERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN JUEZ IMPARCIAL, ya que como bien sabemos el juez de juzgamiento no puede conocer actos de investigación pues perjudica al procesado al generarse un prejuicio sobre su responsabilidad?, de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que el 56.11% de los encuestados precisó que esta redacción Sí se entiende que es el juez penal unipersonal o colegiado quien dictará acumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio oral, AFECTANDO DE ESTA MANERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN JUEZ IMPARCIAL, ya que como bien sabemos el juez de juzgamiento no puede conocer actos de investigación pues perjudica al procesado al generarse un prejuicio sobre su responsabilidad, mientras que de opinión contraria es el 42.22% y el otro 1.67% restante prefirió no emitir opinión alguna, lo cual se demuestra con el GRÁFICO N° 10.

Finalmente, el **CUADRO N° 16: “MODIFICATORIA LEGISLATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1194”**, contiene la interrogante: ¿Considera que deben hacerse modificatorias al Decreto Legislativo N° 1194 para corregir las falencias que presenta para no continuar vulnerándose derechos fundamentales como los mencionados: Derecho a la libertad, a la defensa técnica adecuada, a un juez imparcial, al plazo razonable?, de un total de 180 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que el 52.78% del total de encuestados refirió que sí deben hacerse modificatorias al Decreto Legislativo N° 1194 para corregir las falencias que

presenta para no continuar vulnerándose derechos fundamentales como los mencionados: Derecho a la libertad, a la defensa técnica adecuada, a un juez imparcial, al plazo razonable, mientras que existe un 32.78% que se opone a una modificatoria por considerar que no vulnera estos derechos fundamentales y un 14.44% restante prefirió no emitir opinión alguna, lo cual se demuestra con el GRÁFICO 11.

3.3. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DONDE SE VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES

1. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS: A LA LIBERTAD PERSONAL, AL JUEZ IMPARCIAL Y DE DEFENSA

1. EXPEDIENTE 4053-2016-0-1706-JR-PE-02:

- Imputado: Miguel Spencer Yaipém Guzmán.
- Agraviado: Nelso Cruz Torres y Luciano Pérez Chinchay.
- Delito: Extorsión.
- **El Acta de Registro de Audiencia Única de Incoación de Proceso Inmediato y Prisión Preventiva, de fecha 31 de mayo de 2016, emitido por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo:**
- **EL MINISTERIO PÚBLICO:** La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo solicitó la imposición de la medida de Prisión Preventiva en contra del imputado indicando que existen suficientes elementos de convicción, como: 1) intervención policial s/n en la que se describe la forma y circunstancias en la que fue detenido el investigado momentos después de haber extorsionado a los agraviados, en la que se ha precisado: “cuatro sujetos en dos (02) motos lineales (dos en cada moto) de los cuales descendieron tres con arma de fuego y uno de ellos trajo consigo tarjetas de pollada, obligándolos a que les compre las tarjetas respectivas a los moradores del lugar y así mismo, se

apersonó exigiéndole la suma de S/. 5000.00 manifestando que ellos eran los propietarios de los terrenos y que no era primera vez que sucedían estos hechos, sino era semanal”, 2) acta de registro personal de incautación de 11 tarjetas de pollada a diez soles cada una, 3) Acta de registro personal de incautación realizada el 29 de mayo de 2016 al menor Yenner Ricardo Huamán Guevara donde consta que al momento de la intervención policial se le halló un arma de fuego, revolver calibre 38 y tres cartuchos en buen estado, 4) declaración del agraviado Luciano Pérez Chinchay, quien narra la forma en la que el imputado le exigió le pagase la suma de S/. 1,500.00 soles y le adquiriese tarjetas de pollada, 5) declaración del agraviado Nelso Cruz Torres, quien narra la forma en la que el imputado le exigió le pagase la suma de S/. 5,000.00 soles y le adquiriese tarjetas de pollada, 6) Declaración del Imputado, quien refiere haber tenido enfrentamientos en anteriores oportunidades con el agraviado Nelso Cruz torres. Respecto a la Prognosis de pena indicó que este delito establece una pena no menor de 15 ni mayor de 25 años (se cumple el segundo requisito). En cuanto al peligro procesal, señalo que el imputado no cuenta con trabajo formal conocido, ni oficio estable.

- **LA DEFENSA TÉCNICA:** Indicó que no existen suficientes elementos de convicción, así como señala que los agraviados son asociados de la asociación que preside el imputado, con quienes ha tenido enfrentamiento, también indico que su patrocinado cuenta con arraigo domiciliario y no cuenta con antecedentes penales ni judiciales.

Precisando además que su patrocinado es inocente, que no había realizado actos amenazantes, y que únicamente se encontraba junto con los moradores de la Asociación Virgen de Guadalupe para una reunión, en ese sentido, resulta el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo señala que resulta pertinente indicar que nos

encontramos frente a un requerimiento de Prisión Preventiva, en la que no se debate lo concerniente a la responsabilidad penal del imputado, sino más bien el cumplimiento de los requisitos establecidos para la imposición de esta medida.

Ante esto, debemos señalar que: se vulnera el derecho a una adecuada defensa técnica letrada, toda vez que el cortísimo tiempo que se le da a la defensa para preparar la defensa resulta insuficiente, es por ello que se consagra temas en una prisión preventiva cuando están referidos a la responsabilidad penal, así como también, se demuestra que con el corto tiempo que otorga el proceso inmediato no se ha podido presentar documentos fehacientes que demuestren el arraigo domiciliario, familiar, laboral del procesado para que no se configure uno de los presupuestos para evitar que su defendido termine con prisión preventiva.

- **EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO:** señala que en su fundamento seis de la resolución dos, de fecha 31 de mayo del 2016, en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo permite la Constitución Política del Estado, a través de su artículo 200° ultima parte resulta amparable el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado no solamente porque se presentan de manera concurrente los tres presupuestos materiales que señala el artículo 268° del Código Procesal Penal, sino por los principios antes señalados, resulta claro con relación a la idoneidad, la prisión preventiva resulta la más eficaz para garantizar la presencia del imputado en juicio además la ejecución de la pena en caso de una sentencia condenatoria, sucediendo lo mismo con respecto a la necesidad.

En consecuencia declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por cuatro meses contra el imputado por el presunto delito

de extorsión contra los agraviados. Disponiendo su ingreso al penal de Chiclayo, ex Picsi.

Asimismo, mediante resolución tres, de fecha 31 de mayo de 2016 declaró procedente el requerimiento de proceso inmediato presentado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, disponiendo la incoación del Proceso Inmediato, notificándose al representante del Ministerio Público para que de acuerdo a lo previsto por el artículo 447°, inciso 5) del CPP proceda a formular acusación dentro del plazo de 24 horas, bajo responsabilidad y recibido deberá ser remitido en el día al Juez Penal Colegiado competente.

- **El Acta de Registro de Audiencia de Juzgamiento de Proceso Inmediato, de fecha 08 de Junio de 2016, emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Chiclayo-Ferreñafe:**
- **EL MINISTERIO PÚBLICO:** La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo oralizó la acusación contra el imputado, atribuyéndole los siguientes hechos: Que con fecha 29 de mayo de 2016 al promediar las 4:30 horas, en compañía de tres sujetos, llegaron a bordo en dos motos lineales a los terrenos de la Asociación Virgen de Guadalupe ampliación Pomalca donde se encontraban los agraviados, en dicho lugar los acusados descendieron de la moto lineal, donde el imputado provisto de un arma de fuego apunto al cuerpo del agraviado Nelson he hizo que se colocara cuerpo a tierra y le requirió la suma de cinco mil nuevos soles, ello con la finalidad de no atentarse contra su vida y la de su familia, a razón de cupo que le daba por ser el propietario de dichas tierras, asimismo le dijo que apoyara con la adquisición de tarjetas de pollada, respondiendo el agraviado que no tenía dinero, pues era una persona humilde, al retirarse estos cuatro sujetos , una de las motos lineales casi atropella a una menor de edad que estaba en el lugar, ante lo cual el agraviado Luciano Pérez le reclamó los

hechos por lo que dichos sujetos le apuntaron con sus armas de fuego y lo amenazaron de muerte, para posteriormente el imputado le exigía la suma de mil quinientos nuevos soles, indicándole que en el caso que no le entregara lo votaría de su lote, para luego ofrecerle en venta tarjetas de pollada lo que el agraviado indicó que no tenía dinero para adquirirlas. Subsumiendo los hechos en el artículo 200° del Código Penal como tipo penal base del primer párrafo, con las agravantes de los incisos a y b, quinto párrafo del Código Penal.

- **EL JUZGADO PENAL COLEGIADO TRANSITORIO DE CHICLAYO-FERREÑAFE:** Advierte que: a) se trataría de dos hechos, uno en agravio de Nelson Cruz Torres y otro en agravio de Luciano Pérez Chinchay, en tal sentido si bien no encontraríamos en el mismo presupuesto penal, esto es extorsión, se habría configurado la excepción a los procesos inmediatos regulados en el numeral 2) del artículo 446° del CPP, esto es cuando la investigación se comprenda de numerosos delitos, en este caso estamos hablando de un concurso real en el cual habrían aparecido dos hechos ilícitos; b) A lo que se debe sumar también la posición de la defensa, por lo que se trataría de dos presidentes de Asociaciones que estarían disputando lotes en la zona donde se habría producido el hecho, siendo así consideramos que también habría otra causal de excepción, que si bien es cierto no está reglada, sin embargo consideramos que se aplica cuando la defensa requiera un mayor espacio de tiempo para poder acreditar los elementos de convicción de su teoría, lo que configuraría una defensa eficaz. Este delito requiere de una mayor investigación. C) máxime si conforme en este caso se está requiriendo imponer 16 años de pena privativa de la libertad por un hecho, ahora si entendemos que estamos frente a un concurso real sería una pena de 32 años, la misma que

consideramos grave y que por ello mismo recomendamos sea ventilado a través de un proceso común y no en un proceso inmediato.

Finalmente, este Colegiado señala en su fundamento quinto: debemos indicar que si bien es cierto lo ideal hubiera sido efectuar un control de esta situación a través de la audiencia de incoación de proceso inmediato, ello no es óbice para que este colegiado en su deber de garante del derecho de defensa y también como garante del debido proceso (control de legalidad), no advierta esta situación y en su caso reexamine la acusación propuesta por el Ministerio Público y proceda conforme a las razones antes indicadas por lo que en mérito a ello y teniendo como amparo la norma procesal antes glosada, así como el artículo 6° inciso 1), literal a) **acoger de oficio una excepción de naturaleza de juicio**, disponiendo que este proceso sea reencausado en la vía del proceso común en el cual deberá ser dilucidado.

Por Nuestra Parte, somos de Opinión que: al hacer esta práctica procesal por parte del Colegiado Transitorio de Chiclayo y Ferreñafe, es decir acoger una excepción de naturaleza de juicio para que el proceso debidamente instalado como proceso Inmediato e inclusive haber concedido la prisión preventiva del imputado se vulneró Los derechos fundamentales, siendo estos el derecho a la libertad personal, a una adecuada defensa al plazo razonable y el derecho a un juez Imparcial.

En primer lugar: se dictó la prisión preventiva el juzgado de investigación preparatoria y la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirma la solicitud del representante del ministerio Público, pero resulta que el Juzgado Colegiado Transitorio manifiesta que no es posible que el proceso se lleve a través de un proceso inmediato sino a través de uno más lato, es decir un proceso común, en donde los

plazos son más largos, no se hubiese concedido tal solicitud de prisión preventiva y su internamiento de manera inmediata al establecimiento Penitenciario de Chiclayo, así como también se hubiera efectuado una mejor defensa técnica del procesado, lógicamente con los plazos adecuados establecidos por ley.

En segundo lugar, luego de precisar la vulneración hasta de tres derechos fundamentales, se tiene que en este caso se ha vulnerado un derecho importantísimo como es el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, expresado en el derecho a un juez imparcial, el cual implica que los magistrados tienen el deber de velar por la transparencia y porque el proceso se desarrolle con respeto a los derechos de las partes. Asimismo la imparcialidad constituye una garantía de la administración de justicia que obliga al juez, a resolver la causa puesta en su conocimiento con sujeción a la ley y a la constitución, en el entendido que la función jurisdiccional que realiza el juez se circunscribe básicamente a aplicar el derecho al caso concreto, caso contrario se orienta al interés a una de las partes, como es precisamente lo sucedido, toda vez que al requerir al Ministerio Público que proceda de acuerdo a sus atribuciones en un proceso inmediato quiere indicar que se necesitaría de mayores elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria porque los hechos expuestos obligarían al juzgado a emitir sentencia absolutoria.

Es necesario indicar que está reconocido la independencia y autonomía de los magistrados en todas las instancias, pero es cuestionable desde todo punto de vista que al resolverse judicialmente que un determinado caso penal se tramite bajo las reglas del proceso inmediato, el juez de juzgamiento sin que ninguna de las partes lo solicite, decida de oficio, en una especie de “Súper Juez”, que la causa debe ser atendida por otro órgano jurisdiccional en un procedimiento

común. Por lo tanto, resulta evidente precisar que el Juzgado de Juzgamiento debió llevar a cabo el juicio inmediato hasta que termine, emitiendo la sentencia correspondiente.

2. EXPEDIENTE N° 04522-2016-O-1708-JR-PE-01:

- Imputado: Luis Antonio Barandiaran Villaseca.
- Agravado: Nils Anderson Sánchez Chapoñan.
- Delito: Robo Agravado.
- **El Acta de Registro de Audiencia de Proceso Inmediato, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por el Juzgado Colegiado Penal Transitorio de Chiclayo y Ferreñafe:**
- **La tesis incriminatoria del Ministerio público**, consiste en el día 9 de junio de 2016, aproximadamente a las 13:45 minutos, en circunstancias que la persona de Nils Anderson Sánchez Chapoñan se encontraba entregando un pedido de balón de gas,,, en la cuadra 13 de la calle Baca Mattos- San Martín- Lambayeque, aparecieron dos sujetos queriendo sustraer su canguro con S/. 400.00, lo alzaron es peso y luego lo votaron para luego los sujetos entrar a una casa para sacar cerveza y ponerse a beber, el agraviado solo avanzo dos cuerdas por el dolor de la clavícula, luego pidió apoyo policial.
- **La Defensa Técnica:** señala que no existe una imputación necesaria, suficiente, puesto que no hay flagrancia ya que estos al cometer el hecho han tenido que huir y se quedaron a tomar cerveza, siendo esto más bien una gresca callejera.
- **El Juzgado Colegiado:** resuelve declarar de Oficio la excepción de naturaleza de juicio en base al artículo 6°, numeral 1, literal A; en la cual cuando se ha dado en el proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley y esto definitivamente declarando fundada la misma en la cual el proceso se deberá adecuar a trámite reconocido y totalmente correspondiente concordante con el artículo 7°, último numeral en lo

cual “los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio”, debiendo por lo tanto seguirse los actuados en un proceso más lato o común.

- **Opinión de la Tesista:** Por nuestra parte somos de opinión que con la resolución que declara procedente de oficio la excepción de naturaleza de acción se han vulnerado varios derechos como específicamente el derecho al juez imparcial, ya que dicha excepción sólo procede cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley, lo cual no sucede en este caso, ya que si se observan en la primera fase donde se lleva a cabo la audiencia de control de acusación y calificación de medios de prueba se advierten defectos en la acusación planteada por el representante del Ministerio Público, que requieran de un nuevo análisis, puede disponer la devolución de la acusación y suspender la audiencia por cinco días para que se corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará la audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 352° del Código procesal Penal, o incluso en la misma audiencia, dándose un tiempo razonable.

Ahora bien, no sólo se vulnera el derecho a un juez imparcial, sino también se vulnera el derecho de libertad de la persona detenida porque su situación jurídica se ve desfavorecida, toda vez que al iniciarse un nuevo proceso debería estar en libertad pero permanece recluido por dictarse prisión preventiva.

Por consiguiente, se vulnera el derecho al plazo razonable, ya que al modificarse el proceso también varían los plazos, pero quedan en incertidumbre el plazo para el cambio de un proceso inmediato a un proceso común.

Finalmente, el derecho de defensa se vulnera a todas luces, porque el detenido se estaba defendiendo en un proceso inmediato de una imputación y al cambio de proceso por el común implica que el

representante del Ministerio Público formule nueva acusación y la variación de la defensa.

2) VULNERACIÓN AL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE

3. EXPEDIENTE N° 03252-2016-O-1706-JR-PE-03:

- Imputado: José Enrique Valencia Gutiérrez.
- Agraviado: Wilfredo Miranda Carrero y Otros.
- Delito: Robo Agravado.
- **El Acta de citación a Proceso Inmediato, de fecha 06 de mayo de 2016, emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Chiclayo y Ferreñafe:**

En dicha acta se señala citar a audiencia única de juicio inmediato para el día once de mayo de 2016 a horas 11 de la mañana por el delito contra el patrimonio en su figura de robo agravado en agravio de Wilfredo Miranda Carrero.

- **Opinión de la Tesista:** El Juzgado Colegiado Penal Transitorio no ha tenido en cuenta lo regulado por el artículo 448° numeral 1) del Decreto Legislativo N° 1194, cuando señala que: “(...) la audiencia única de juicio inmediato no debe exceder las setenta y dos horas desde la recepción (...)”, Sin embargo, la audiencia fue programa dentro del sexto día.

Con este proceder se desfigura por completo los plazos que señala el Proceso Inmediato, es decir las 72 horas, que está completamente regulado, afectando consecuentemente el derecho de libertad personal, entendido como derecho fundamental de las personas.

4. EXPEDIENTE N° 02506-2016-O-1706-JR-PE-02

- Imputado: Freddy Carlos Galán Pazos
- Agraviado: Elis Milagros Mires Mori.

- Delito: Robo Agravado.

- **El Acta de citación a Proceso Inmediato, de fecha 07 de Abril de 2016, emitido por el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo y Ferreñafe:**

En dicha acta se señala citar al imputado a la audiencia única de juicio inmediato para el día once de Abril de 2016 a horas 3:00 de la tarde por el delito contra el patrimonio en su figura de robo agravado en agravio de Elis Milagros mires Mori.

- **Opinión de la Tesista:** El Juzgado Colegiado Penal Transitorio no ha tenido en cuenta lo regulado por el artículo 448° numeral 1) del Decreto Legislativo N° 1194, cuando señala que: “(...) la audiencia única de juicio inmediato no debe exceder las setenta y dos horas desde la recepción (...)”, Sin embargo, la audiencia fue programa dentro del sexto día.

Con este proceder se desfigura por completo los plazos que señala el Proceso Inmediato, es decir las 72 horas, que está completamente regulado, afectando consecuentemente el derecho de libertad personal, entendido como derecho fundamental de las personas. Como es de notarse se excedió el plazo de 24 horas, es decir que la audiencia se realizó dentro de las noventa y seis horas.

En consecuencia, de los expedientes indicados se demuestra que con el proceso inmediato si se viene vulnerado derechos fundamentales como son precisamente los derechos fundamentales al juez imparcial, a la libertad personal, al derecho de defensa y al plazo razonable.

3) Vulneración de derechos a la libertad personal y plazo razonable

5. Expediente N° 10026-2016-58-1706-JR-PE-02

En este caso al sentenciado LEIMER FERNANDE CASIQUE se le atribuye el hecho de haber entrado a la vivienda de la agraviada JUANA ROSA LINAREZ DE LÓPEZ a cometer el delito de hurto agravado de dicho inmueble en donde sustrajo un televisor plasma y luego salió del lugar y cogió una motokar conducida por Daniel Aparicio Benites Fuentes y luego fue detenido por la policía y la agraviado preciso que un día había trabajado en su casa con un albañil.

En este proceso se tiene que el sentenciado fue detenido el 06 de noviembre de 2016, pero la audiencia de incoación de proceso inmediato se llevó a cabo dentro de 15 días de haberlo detenido, es por ello que se señala que los plazos para realizar la audiencia de incoación de proceso inmediato es de siete días, lo cual no se dio en este proceso, es más tampoco se dio un tiempo necesario para la defensa técnica del acusado, no quedando más remedio que acogerse a la terminación anticipada, imponiéndosele una pena de tres años dos meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y la suma de quinientos soles por concepto de reparación civil.

6. Expediente N° 887-2017-0-1706-JR-PE-08

El presente proceso se trata sobre el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción que por cierto es uno de los de mayor incidencia se resuelven en el Distrito Judicial de Lambayeque a través del proceso inmediato, pero viene afectando el derecho a la libertad personal, no siendo este caso la excepción, así: La tercera Fiscalía provincial corporativa de Chiclayo denunció por conducción en estado de ebriedad a JOSE NMIGUEL TINEO TINEO y fue detenido por la policía nacional del Perú el 8 de octubre del 2016 a horas 22:30 horas, precisándose que presentó 1.30 gramos de alcohol por litro de sangre.

Aquí se desprende que el detenido permaneció más del tiempo permitido antes de llevarse a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato, ya que la audiencia se llevó a cabo el día 20 de noviembre de 2016, dejándolo en libertad al sentenciado al tercer día por acogerse al proceso de conclusión anticipada aceptando los cargos materia de imputación. Siendo que por tal motivo se le impuso la pena de un año y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva convirtiéndose en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, más una reparación civil de S/. 620.00 soles e inhabilitación para conducir vehículo motorizado por el mismo tiempo que dura la condena, suspendiendo su licencia de conducir.

7. Expediente N° 01071-2017-07-1706-jr-pe-0

A LUIS ALBERTO LÁZARO MARQUEZ se le imputa el haber cometido el delito contra la seguridad pública- peligro común en la modalidad de conducción en Estado de ebriedad o drogadicción en agravio de la sociedad, siendo que los hechos sucedieron el día 25 de diciembre de 2016 a las 4:10 pm en la que el sentenciado conducía su vehículo menor trimóvil en estado de ebriedad, arrojando el dosaje etílico 0.73 gramos de alcohol en la sangre, configurándose los hechos en el delito tipificado en el artículo 274° del código penal.

Aquí se afectó el derecho al plazo razonable para efectuar las audiencia de incoación de proceso inmediato, siendo que el auto de incoación de proceso inmediato se llevó a cabo el día 15 de enero de 2017, excediendo a todas luces el plazo concedido de siete días para la audiencia de incoación, y en audiencia de juicio oral, el imputado se acogió al proceso de conclusión anticipada, precisándose que se le impuso la pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la

libertad suspendida en su ejecución. más una reparación civil de S/. 400.00 soles.

8. Expediente N° 07583-2017-0-1706-JR-PE-02

El procesado ABRAHAM LOZANO VÁSQUEZ, fue sentenciado por el delito de Omisión a la asistencia familiar previsto en el artículo 149° del Código Penal en agravio de Homero Lozano Leyva, representada por su madre Leyla Leyva Núñez. En este caso, el plazo desde la incoación de proceso inmediato se ha vulnerado el plazo en cuanto a tener una adecuada defensa técnica, siendo que en audiencia el procesado decidió acogerse a la conclusión anticipada en audiencia de juicio oral.

Al imputado se le impuso la pena de diez meses nueve días de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, fijándose un período de prueba de un año y reglas de conducta.

9. Expediente N° 00141-2017-91-1706-JR-PE-06

La presente causa se sigue contra Guillermo Manuel Salazar Altamirano por el delito contra la seguridad pública-peligro común en su figura de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad, siendo que los hechos se produjeron en circunstancias en que el día 25 de noviembre de 2016 a promediar las 21:50 horas de la noche, la PNP del Perú logró intervenir al sentenciado en estado de ebriedad, arrojando los resultados toxicológicos de 0.61 gramos de alcohol en la sangre.

En audiencia de juicio oral de fecha 18 de octubre del año 2017 se llevó a cabo el hecho de conceder cinco minutos para que la parte acusada llegue a un acuerdo con el representante del Ministerio Público, siendo que el tiempo para ejercer una adecuada defensa técnica resulta ser muy poca, afectando de esta manera el derecho a un plazo razonable para una adecuada defensa técnica, siendo que el acusado acepta los cargos.

En consecuencia, el Sexto Juzgado Unipersonal de Chiclayo lo sentencia al acusado por una pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente en su ejecución por el período de prueba de un año más el monto de S/. 157.00 soles por concepto de reparación civil.

10. Expediente N° 03268-2017-47-1706-JR-PE-06

En audiencia de juicio oral se llevó a cabo la causa seguida contra LUIS ALBERTO SAUCEDO PÉREZ por el delito contra la seguridad pública- peligro común en su figura de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.

De los hechos de se tiene que la PNP del Perú intervino el vehículo mototaxi conducida por el procesado quien presentaba visible síntomas de estado de ebriedad, corroborado ello con el certificado de dosaje etílico resultando 1.25 gramos por litro en la sangre.

En audiencia pública de juicio oral de proceso inmediato se tiene que el plazo para ejercer la defensa técnica del procesado resulta ser muy poco, vulnerándose de esta manera el derecho al plazo razonable para ejercer una defensa técnica.

Finalmente, se sentenció al procesado con una pena de diez meses y nueve días de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente en su ejecución por el periodo de prueba de un año e inhabilitación por el término de la condena.

11. Expediente N° 02119-2017-35-1706-JR-PE-01

El inculpado Marcelino Díaz Díaz se le imputa el haber cometido el delito de hurto agravado en grado de tentativa en agravio de José Daniel Zapata Zeña. De los hechos resulta que, el día 26 de febrero de 2017 el acusado ingreso al inmueble de la víctima en calle Tres Marías de la ciudad de Ferreñafe, sustrayéndole la billetera con S/. 850.00 soles, fugándose del inmueble cuando fue descubierto por el acusado.

Se desprende en este proceso, que el derecho al plazo razonable para ejercer una defensa técnica adecuada, siendo que por tal motivo el procesado aceptó el acuerdo de conclusión anticipada propuesto por el representante del ministerio público.

La audiencia de juicio oral de proceso inmediato se llevó a cabo el día catorce de diciembre de 2017, en donde se emitió sentencia, condenado al acusado a una pena de tres años nueve meses de pena privativa de libertad con carácter suspendida por un período de prueba de dos años y reparación civil de S/. 1.200.00 soles.

12. Expediente N° 10532-2016-46-1706-JR-PE-02

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la audiencia de juicio oral contra el acusado José Armando de la Cruz Santamaría por el delito contra la familia por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de Renzo Aimar de la Cruz Jesús.

El 17 de Agosto de 2017 se llevó a cabo la audiencia de juicio oral concediendo un plazo muy corto para realizar una defensa técnica adecuada y oportuna, es por tal motivo que se afectó este derecho y el procesado se acogió a la conclusión anticipada.

Finalmente, se condenó al acusado con la pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida por el período de prueba de un año, más la reparación civil de S/. 200.00 soles y aprobarse la cancelación del total del monto adeudado.

13. Expediente N° 03268-2017-47-1706-JR-PE-06

El Sexto Juzgado unipersonal penal de Chiclayo llevó a cabo la audiencia de juicio proceso inmediato contra Carlos Alberto del Castillo Nombera por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Siendo que de los hechos se tiene que el acusado sustrae una bolsa con dinero y celulares de propiedad de Vania Elizabeth Farro Chimoy el día 30 de

octubre de 2017 a las 16:50 horas y en la huida es detenido por transeúntes, es allí que personal policial que se encontraba por las inmediaciones y que se había percatado de los hechos logran intervenir al sentenciado, quien fue reconocido por la agraviado, logrando recuperar sus bienes.

Debemos precisar que se concedió un tiempo reducido para que se ejercitara el derecho de defensa adecuada por parte de la defensa técnica, y el acusado decidió acogerse al acuerdo de terminación anticipada arribada entre el Representante del Ministerio Público y el procesado.

En consecuencia, se le impuso una pena de dos años un mes de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un período de prueba de tres años y el pago de S/. 800.00 soles por concepto de reparación civil.

14. Expediente N° 02318-2017-0-1706-JR-PE-03

El imputado Juan Santamaría Ynga es procesado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Karen Pamela Santamaría Ynga.

En este proceso se llega a determinar el corto plazo que se concede al acusado para ejercer su defensa técnica adecuada, siendo que por tal motivo se afecta este derecho, y el acusado acepto acogerse a la terminación anticipada aceptando los hechos que se le imputaron.

Finalmente, se le sentenció a a dos años tres meses y dos días de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el período de prueba de un año y las reglas de conducta pertinente.

15. Expediente N° 00229-2017-10-1706-JR-PE-06

El presente caso es por el delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad por parte del Enrique Lumba Castro, en circunstancias que la PNP interviene a la altura de las avenidas Kennedy y Puerto Rico al acusado conduciendo su mototaxi en aparente estado de ebriedad, corroborándose ello con el certificado de dosaje etílico arrojando 1.81 gramos de alcohol por litro de sangre.

Es aquí que se solicita un tiempo prudencial para arribar a un acuerdo con el representante del ministerio Público a una conclusión anticipada con la finalidad de no terminar recluido en un establecimiento penitenciario, precisando que el plazo razonable para una adecuada defensa técnica como es el estudio pormenorizado y análisis de los hechos, situación que no pudo hacerse por la falta de tiempo.

Finalmente, el sexto juzgado unipersonal penal de la ciudad de Chiclayo condeno al sentenciado a una pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución.

16. Expediente N° 02425-2017-29-1706-JR-PE-06

El delito perseguido es el de Omisión a la asistencia familiar contra wilson Esgardo Serrato Roque en agravio de Diego Nilmar Serrato Burga, subsumidos los hechos dentro del artículo 149° del Código penal.

En este caso se concede un tiempo muy corto para que el procesado ejercer su derecho de defensa letrada adecuadamente, optando por acogerse a la conclusión anticipada.

En consecuencia, se le impuso la pena de diez meses y nueve días de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente en su ejecución por el período de prueba de un año y una reparación civil de trescientos soles.

17. Expediente N° 04909-2017-44-1706-JR-PE-03

El Quinto Juzgado Unipersonal de Chiclayo condenó a Oscar Daniel Cherres Montalvo por el delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad, imputándosele que el día 09 de mayo de 2017 a las 13:30 horas el imputado fue intervenido por la PNP presentando signos de haber bebido licor conduciendo su moto lineal, confirmándolo el certificado de dosaje etílico con 0.71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este proceso llegó hasta la etapa de juicio oral, siendo que en audiencia de juicio oral se concede un plazo poco pertinente para efectuar una adecuada defensa técnica, precisando que se afectó el derecho al plazo razonable para ejercer una adecuada defensa.

Finalmente, el procesado fue sentenciado por una pena de diez días de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el período de prueba de un año, e inhabilitación consistente en la suspensión para conducir cualquier tipo de vehículo, más la suma de S/. 500.00 por concepto de reparación civil.

18. Expediente N° 04790-2016-0-1706-JR-PE-02

El Quinto Juzgado Unipersonal Penal de Chiclayo condenó a Lincolnd Raúl Poma Román contra Poma Córdova Katherine Leydi por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

En este proceso se llegó hasta la etapa de juicio oral, otorgándose un tiempo muy reducido para la defensa del imputado, es decir se vulneró el derecho al plazo razonable para ejercer la defensa técnica, acogiéndose a terminar el proceso mediante la institución jurídica de conclusión anticipada, aceptando los cargos.

En consecuencia, se le impuso la pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, más reglas de

conducta y un monto de cuatro cientos soles por concepto de reparación civil.

19. Expediente N° 04325-2017-61-1706-JR-PE-06

CESAR NILTON GUEVARA BUSTAMANTE es imputado de haber cometido el delito contra la vida el cuerpo uy la salud en la modalidad de lesiones culposas en agravio de Sabina Rojas Vásquez. Siendo que el día 29 de agosto de 2016, a las 07:10 horas aproximadamente, colisionaron dos mototaxis a la altura de la institución educativa Túpac Amaru y luego trasladaron a la víctima al hospital más cercano donde le diagnosticaron accidente de tránsito TEC leve y amputación traumática parcial del quinto dedo de la mano izquierda.

Los hechos fueron subsumidos dentro del delito de lesiones culposas, regulado en el artículo 124°, último párrafo del Código Penal. Imponiéndosele una pena de tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente en su ejecución por el período de prueba de un año de seis meses.

En este proceso se afectó el derecho a un plazo razonable para el ejercicio de una defensa técnica adecuada por el poco tiempo que se concede para estudio del caso y elaborar su teoría del caso.

Finalmente, se le impone la pena de tres años suspendida condicionalmente en su ejecución.

20. Expediente N° 05251-2017-90-1706-JR-PE-09

Este proceso es uno por el delito de omisión a la asistencia familiar que se le imputa a Angello Eduardo Vásquez García en agravio de su menor hija Betzy Gianella Vásquez Reupo representada por su madre.

En audiencia de juicio oral debido al corto plazo para ejercer una defensa técnica adecuada el procesado decidió acogerse a la conclusión anticipada del proceso.

Finalmente, se le impone al imputado la pena de diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución con el carácter condicional.

3.4. DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Antes de abordar este apartado, se entiende que desde el punto de vista metodológico, los fines de toda investigación se abocan a la obtención de un conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones y los cambios de la realidad, que el hombre trata de comprender, para llegar a la esencia del conocimiento, siendo que este es un proceso que va de lo conocido a lo desconocido, a través de un proceso de constante y progresiva aprehensión; al moverse el conocimiento de lo singular a lo general, a través de lo particular, generando lo que conocemos como juicio, lo cual establece la relación entre determinados fenómenos de la misma especie y que conduce a la formulación de un juicio universal, o sea, al conocimiento de una determinada ley y su comprobación en la realidad puede convertirla en sólida teoría científica.

Luego, para los fines de la presente investigación, el Marco Teórico ha sido dividido en tres capítulos, el PRIMER CAPÍTULO referido a los Derechos Fundamentales, el SEGUNDO CAPÍTULO aborda el tema de la Flagrancia y el Proceso Inmediato; mientras que, el TERCER CAPÍTULO aborda el tema de los Derechos Fundamentales vulnerados con el Proceso Inmediato.

Ahora bien, de los datos obtenidos sobre el proceso inmediato proporcionados por el Área de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de la ciudad de Chiclayo se desprende que el 29 de Noviembre del 2015, fecha en la que se inició en la aplicación del proceso inmediato hasta el 31 de Abril de 2016 se han registrado de acuerdo al delito un total de 3247 expedientes, así también por sede en la que se han registrado un total de 3391 procesos inmediatos desde su aplicación hasta el 30 de Junio de 2016, indicado que en los juzgados de Investigación

Preparatoria en sede Principal (1°, 2°, 3°, 4° y 5°), Juzgado Colegiado y Colegiado Transitorio y en las sub sedes como son los Juzgados de Investigación Preparatoria (José Leonardo Ortiz, Lambayeque, Motupe, Ferreñafe, Jaén, San Ignacio, Oyotún) se registran un total de 1346, desde su aplicación hasta el 13 de marzo de 2016.

En ese sentido, con la finalidad de obtener una mejor opinión sobre el proceso inmediato, se tiene que, de la encuesta innominada aplicada a Jueces, Fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, la posición mayoritaria de los encuestados (52.79%), sostiene que los derechos fundamentales constituyen la máxima expresión jurídica que garantizan y protegen las facultades y libertad que son una manifestación de la dignidad humana. Entendiendo la mayoría de encuestados (50.27%) que el derecho fundamental a la libertad ambulatoria se priva por mandato judicial o por la autoridad policial en caso de flagrante delito.

Sobre la Imparcialidad del Juez, señala la posición dominante, es decir, el 44.10% que un juez desinteresado resuelve el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial. De otro lado, sobre el derecho a la Pluralidad de Instancias, el 48.95% de los encuestados lo definió como el derecho por el cual la persona que considera que la resolución judicial vulnera sus derechos recurre a otra instancia para un análisis del proceso.

Sobre la Flagrancia delictiva, la posición dominante (60.71%) precisa que esta se conceptualiza como que es sorprender a alguien con las manos en la masa, incluye también a la Cuasiflgrancia y flagrancia presunta. En ese sentido, la mayoría de los encuestados (76.11%) considera que la detención en la flagrancia delictiva sí es la medida coercitiva excepcional, por la cual se dispone el encarcelamiento del imputado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia, resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave.

Ahora bien, sobre el Decreto Legislativo N° 1194 que tiene como principal objetivo regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, este resulta ser, de acuerdo a la posición mayoritaria (76.67%) un proceso especial distinto al proceso común, el cual tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación. Así mismo, el 60,56% que representa la mayoría de la población encuestada considera que con el Decreto Legislativo N° 1194 se viola el derecho a la libertad al privarlo de ella a una persona hasta por 72 horas sin que exista necesidad de ello, cuando la norma constitucional señala que sólo puede ser hasta por 24 horas, como por ejemplo en los casos de conducción en estado de ebriedad, pese a aplicarse el principio de oportunidad sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es posible requerir prisión preventiva, el imputado de este delito tendrá que permanecer privado de su libertad como mínimo tres días.

También para la posición dominante (54.45%), en el Proceso inmediato los plazos procesales son muy cortos, y por lo tanto consideran que sí se viola el derecho a una defensa letrada adecuada, toda vez que incoado el proceso inmediato, el juez competente fijará en un plazo no mayor de 72 horas la audiencia única de juicio inmediato, que además es oral, publica e inaplazable y en donde las partes tendrán el mismo plazo, es decir las 72 horas, para convocar sus órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos.

Es de advertir que la mayoría de los encuestados (56.11%), señala que con la redacción del artículo 447°, inciso 6, del Código Procesal Penal se entiende que es el Juez Penal Unipersonal o Colegiado quien dictará acumulativamente el acto de enjuiciamiento y citación a juicio oral, AFECTANDO DE ESTA MANERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN

JUEZ IMPARCIAL, ya que como bien sabemos el juez de juzgamiento no puede conocer actos de investigación pues perjudica al procesado al generarse un prejuicio sobre su responsabilidad.

Finalmente, el 52.78% del total de encuestados considera que deben hacerse modificatorias al Decreto Legislativo N° 1194 para corregir las falencias que presenta para no continuar vulnerándose derechos fundamentales como los mencionados: Derecho a la libertad, a la defensa técnica adecuada, a un juez imparcial, al plazo razonable.

Se demuestra la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal, el derecho de defensa, el derecho a la imparcialidad del juez, el derecho al plazo razonable, en los siguientes expedientes: N° 02506-2016-0-1706-JR-PE-02, N° 04053-2016-0-1706-JR-PE-02, N° 04522-2016-0-1708-JR-PE-01, N° 03252-2016-0-1706-JR-PE-03, N° 9352-2016-14-1706-JR-PE-03.

Todo lo anterior, nos permite señalar que la hipótesis que nos formuláramos al inicio de la investigación resulta siendo válida; surgiendo así, la urgente necesidad de proceder a establecer plazos pertinentes y adecuados para que el fiscal realice la incoación de proceso inmediato, así como también para que la defensa técnica pueda sustentar una adecuada teoría del caso, bajo la conducción de un juez imparcial aunque tenga que emitir una sentencia absolutoria, y sin violar el derecho fundamental del imputado al privarlo de su libertad ambulatoria cuando no se reúnen los elementos de convicción pertinentes para acoger el pedido de prisión preventiva; siendo que, el tema del proceso inmediato en su afán de atender a una justicia rápida y eficaz no viene siendo aplicado correctamente tanto por los representantes del ministerio Público que como se ve en el caso no reunió de menara contundente la totalidad de elementos de convicción ya que el caso resulto ser de mayor complejidad que no reunía las características de proceso inmediato, sino debió llevarse en un proceso lato o proceso común,

así como también por parte de los Juzgadores Penales que con la emisión de la resolución analizada en el expediente 4053-2016 vulnera varios derechos fundamentales del proceso, taxativamente el derecho al juez imparcial, ya que no se puede devolver un expediente que ha sido decretado para tramitarse como proceso inmediato a otro proceso más lato como es el proceso común. De donde resulta que, de la merituación del marco teórico y del trabajo de campo, correlacionados con el marco empírico que se presentan en la investigación materia del Informe Final que comentamos, nos lleva a sostener que se ha logrado contrastar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, en razón al cumplimiento de los objetivos oportunamente señalados.

CONCLUSIONES

1. El proceso inmediato en casos de flagrancia al afectar derechos fundamentales como a la libertad personal, la libertad ambulatoria o de libre tránsito, al plazo razonable tanto en la acusación y defensa del procesado, al juez imparcial, etc., deviene en inconstitucional.
2. El Proceso Inmediato en casos de flagrancia delictiva es un proceso célere o rápido, en la que no existe la etapa de investigación preparatoria, debe aplicarse para ilícitos de trámite sencillo que no requieren de un abundante material probatorio vulnera derechos fundamentales.
3. De los expedientes analizados con la aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 en casos de flagrancia delictiva, en el Distrito Judicial de Lambayeque, se demuestra que se viene trasgrediendo Derechos Fundamentales como el derecho a la libertad personal, derecho de defensa, a la imparcialidad del juez y al plazo razonable, en los siguientes expedientes: N° 02506-2016-0-1706-JR-PE-02, N° 04053-2016-0-1706-JR-PE-02, N° 04522-2016-0-1708-JR-PE-01, N° 03252-2016-0-1706-JR-PE-03, N° 9352-2016-14-1706-JR-PE-03.
4. En la jurisprudencia nacional (Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional) se precisa sobre el proceso inmediato reformado que no es proceso configurado legalmente para condenar a los imputados, asimismo si la norma en cuestión se interpreta tal como se plantea será viable excluir su inaplicación por inconstitucional.
5. El Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en casos de Flagrancia delictiva, debe adecuarse a lo prescrito por la Constitución Política con la finalidad de ser un instrumento eficaz en la solución rápida de un ilícito penal sin tener que afectar derechos fundamentales.

RECOMENDACIONES

1. La comunidad jurídica debe comprender que el proceso inmediato es un proceso célere en la que se elimina la etapa preparatoria del proceso ordinario, con la salvedad que su aplicación debe ser para ilícitos de bagatela o menor cuantía y no complejos con la finalidad de evitar que se vulneren derechos fundamentales y que se siga considerando como inconstitucional.
2. En el Distrito Judicial de Lambayeque debe precisarse la vigencia de los derechos fundamentales y que su vulneración a través el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, implicaría una grave desestabilidad social e inseguridad jurídica en la población recurrente en busca de la administración de justicia, precisándose una especial profundidad doctrinaria y jurisprudencial sobre el derecho a la libertad personal, a la imparcialidad del juez, a la defensa y al debido proceso.
3. Se debe comprender que en la Jurisprudencia Nacional entiende sobre el Proceso inmediato reformado que se puede condenar un proceso a través de esclarecimiento probatorio del hecho punible, pero si las pruebas no son fiables, corroboradas, suficientes y legales el juez estará en la obligación de absolver al imputado.
4. Proponer el Siguiende Proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY

“LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 446°, 447° Y 448° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL CON RESPECTO AL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y OTROS SUPUESTOS”

LEY N°...

1. **OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:** La propuesta normativa que se presenta ha de estar encaminada a modificar la regulación procesal respecto al proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva y otros supuestos, siendo que este proceso resulta atentatorio a lo estipulado por nuestra Constitución Política del Perú; de allí que resulte de necesidad de compatibilizar la normatividad procesal Penal con los principios y postulados de la normatividad constitucional, para lo cual ha de modificarse los artículos 446°, 447° y 448°, del Código Procesal Penal.
2. **FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA-Exposición de motivos:**

La Promulgación del Decreto Legislativo N° 1194, que regula acerca del proceso inmediato en caso de flagrancia y otros supuestos, se trata de un proceso especial que constituye una forma de simplificación procesal el cual se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de razonabilidad y eficiencia en los casos en los que por sus propias características son innecesarias mayores actos de investigación, sabiéndose que no es un proceso de condenas, sino de un medio de simplificación procesal, no de supresión de garantías.

El artículo 159° de la Constitución Política establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el principio de la imputación necesaria como manifestación

del principio de legalidad y del principio de la defensa procesal, los que se encuentran regulados en los artículos 2° numeral 24) literal “d”, y 139 inciso 14) de la carta Fundamental del Estado. De esta forma, la persona a quien se le imputa la comisión de un delito debe conocer con exactitud los cargos formulados en su contra, reconociéndose como de (...) ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa con una descripción suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta (...). De ahí que la imputación necesaria supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que, ejerciendo la facultad de control, debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables.

El Proceso inmediato es un procedimiento célere por cuanto debe invocarse para hechos de simple y de sencilla tramitación (diligenciamiento probatorio escaso o nulo y resolución) esto es así por cuanto desde la aprehensión del sujeto se cuenta con los elementos probatorios necesarios para su vinculación (víctima, testigos, evidencias y justiciable).

La flagrancia delictiva, parte del supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir o apenas acabado de cometerlo (flagrancia tradicional o estricta), incluye también supuestos de cuasi flagrancia, flagrancia evidencial o presunción legal de flagrancia, cuando el imputado fuga y es detenido luego de ser identificado de inmediato por la víctima, testigo presencial o por medio audiovisual, dentro de las 24 horas de producido el hecho.

La flagrancia se encuentra compuesta por: a) Fumus Commisi Delicti, indicando que se trata de aquel supuesto fáctico en el cual para poder detener a un sujeto es imprescindible que exista una vinculación previa, directa e

inmediata del hecho mediante el sorprendimiento de su acción flagrante. Se trata pues de una percepción sensorial directa e inmediata –personal y temporal- por un tercero de la comisión del delito; y b) Periculum Libertatis, por el siendo la detención flagrante una excepción constitucional al principio pro libertates, se requiere para su aplicación que se funde en los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Es decir, debe ser realizada para alcanzar el objetivo constitucionalmente establecido (evitar que prosiga el hecho delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de una medida necesaria (sólo en los casos señalados), ejecutarse por los medios adecuados y menos gravosos (no medios excesivos o innecesarios) y por el tiempo estrictamente necesario (entrega a la autoridad pública de inmediato).

También se debe tener en cuenta que no todo supuesto de flagrancia encierra uno de flagrancia delictiva, porque lo que arde o lo que flagra, puede ser un hecho que solo tenga la apariencia del delito, y este ,uy lejos de serlo a la luz del juicio de tipicidad, máxime si la percepción inicial de la flagrancia está en manos de un tercero, es decir de un efectivo policial que detiene sin mandato judicial o de la persona que practica un arresto ciudadano, que no necesariamente estará en la capacidad de discernir entre la comisión de un delito o la apariencia de este.

Así también, se debe tener en cuenta que evidencia del delito no es lo mismo que flagrancia, sus significados no coinciden; la flagrancia es una de las modalidades de la evidencia, una de las vías que conducen a la certeza de un dato cualquiera. Sólo habrá flagrancia si el conocimiento fundado que conduce a la certidumbre es resultado de la percepción sensorial directa e inmediata del hecho delictivo que se está cometiendo o acaba de cometer, no siendo por tanto bastantes las presunciones o sospechas, por mucho que indiquen la probable comisión de un delito.

En cuanto a los derechos fundamentales, se tiene que estos constituyen derechos de ámbito constitucional, los mismos que constituyen una

manifestación de la dignidad de la persona humana, aquellos tienen una posición central en el ordenamiento jurídico. Esa centralidad implica, a su vez, la previsión de mecanismos jurídicos que garanticen su eficacia real, pues cuando se vulnera un derecho fundamental se afecta tanto el derecho subjetivo de las personas cuanto el conjunto de valores y bienes constitucionales que precisan ser igualmente protegidos.

Por lo tanto, una norma que vulnere derechos fundamentales deviene en inconstitucional, es en ese mismo sentido que el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos viene vulnerando derechos fundamentales como son: el derecho a la libertad personal o ambulatoria, el derecho a los plazos razonables, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a un juez imparcial y el derecho a la doble instancia.

En consecuencia, la reforma de una legislación armónica debe prescribir que los representantes del Ministerio público deben solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad, cuando se presente los supuestos: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259°, b) el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160°, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, sean evidentes , siendo que a ello debe agregarse uno más, delimitando los casos en los que se puede aplicar el proceso inmediato, como es precisamente por ser un procedimiento célere debe invocarse para hechos de simple y de sencilla tramitación (diligenciamiento probatorio escaso o nulo y resolución) y que desde su aprehensión del sujeto se cuenta con los elementos probatorios necesarios para su vinculación.

Finalmente, la propuesta que se adjunta, traducida en el Proyecto de Ley, se espera sea objeto del análisis y debate por parte de la comunidad jurídica local, regional y nacional, a cuyas críticas nos sometemos, pues lo aportado de

ninguna manera pretende constituirse en un cúmulo de conocimientos que dan por agotado el debate jurídico en torno al tema de la aplicación adecuada en el plazo razonable en las diligencias preliminares sin que se anticipe o se trate de asegurar medios probatorios o elementos de convicción relativos a la investigación que no tienen precisamente las características de ser urgentes o inaplazables y que corresponden a la etapa preparatoria.

3. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

3.1. MODIFICACIÓN LEGAL:

“Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 446°, inciso 1° del Código Procesal Penal:

<<Artículo 446°.- Supuestos de Aplicación

Artículo 446°. Supuestos de aplicación.

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

- a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
- b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160;
- c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes;

d) Debe invocarse para ilícitos penales de trámite simple y sencillo, de diligenciamiento probatorio escaso o nulo.

2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342°, sean necesarios ulteriores actos de investigación. **Así también quedan exceptuados los delitos que tengan una pena mayor a 12 años de pena privativa de la libertad.**

3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447° del presente Código.

Artículo 447°.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.

1. **El Sospechoso detenido en flagrancia será traslado inmediatamente y dentro del plazo constitucional establecido en el artículo 264°, por las autoridades policiales actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente, no será necesarios la presentación del informe escrito o el parte policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.** El Fiscal debe solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las veinticuatro horas (24) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe

contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336°.

3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
4. La Audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85°. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:
 - a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
 - b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
 - c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.
5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.
6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448°.
7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la investigación Preparatoria. Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta

luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación Preparatoria.

Artículo 448°.- Audiencia única de Juicio Inmediato.

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.
2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350°, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350°, y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral. **El Juez de juzgamiento no podrá emitir resolución alguna en la que derive el proceso tramitado como inmediato para que su análisis sea a través de un proceso común, porque estaría afectando el derecho al juez Imparcial, bajo responsabilidad.**
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros

hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato.

4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO:

El presente proyecto se enmarca en la manera como se debe aplicar adecuadamente el proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva y otros supuestos sin vulnerar derechos fundamentales como son la restricción del derecho a la libertad personal o ambulatoria, a la imparcialidad del juez, a la defensa técnica letrada adecuada, entre otros; no generando, la modificación legislativa, costo alguno al fisco.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS

- AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel (2015). "Presunción de Inocencia. Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio". Editorial del Instituto de la Judicatura Federal. México.
- ALEXY, Robert (2003). "*Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional*". En: Neoconstitucionalismo (s). Editorial Trotta. Madrid.
- ALEXY, Robert (2008). "*Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales*". En: Teoría de los derechos fundamentales. Segunda Edición. Editorial centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
- ARAGONES MARTINEZ, S (2002). "*Derecho Procesal Penal*". Quinta Edición. Editorial centro de estudios Universitarios Ramón Arces. Madrid.
- BERNAL PULIDO, Carlos (2002). "*El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales*". Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
- BIDART CAMPOS, Germán (1987). "*La Interpretación y el Control Constitucionales en la jurisdicción constitucional*". Editorial Ediar. Buenos Aires.
- BIDART CAMPOS, Germán (2007). "*Manual de Historia Política*". Editorial Ediar. Buenos Aires.

- CABALLERO ROMERO, Alejandro E (1999). *“Metodología de la Investigación Científica. Diseño con hipótesis explicativas”*. Editorial UDEGRAF S. A. Lima.
- CASTILLO ALVA, José Luís y otros (2004). *“Código Penal Comentado”*. Tomo I *“Título Preliminar. Parte General”*. Editorial Gaceta jurídica. Lima.
- CASTILLO CÓRDOVA, Luís (2005). *“Los Derechos Constitucionales. Elementos para una teoría general”*. Editorial Palestra. Lima.
- CASTILLO CÓRDOVA, Luís (2008). *“Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales”*. Editorial Grijley. Lima.
- CHANAMÉ ORBE, Raúl (2007). *“Diccionario de Derecho Constitucional”*. Quinta Edición. Abogados editores. Lima.
- CHANAMÉ ORBE, Raúl (2008). *“Comentarios a la Constitución”*. Quinta Edición. Editorial Jurista Editores. Lima.
- EGUIGUREN PRAELI, Francisco (2002). *“Estudios Constitucionales”*. Editorial ARA Editores. Lima.
- ETO CRUZ, Gerardo (2011). *“Teoría de la Constitución y teoría de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”*. En: Tribunal Constitucional reescribe el Derecho. Estudios sobre la incidencia de la jurisprudencia Constitucional en las diferentes especialidades del derecho. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (1997). *“Metodología de la investigación”*. Editorial Mc Graw-Hill. México.

- FERRAJOLI, Luigi (2001). *“Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”*. Editorial Trotta. S. A. Madrid.
- GARCÍA MORILLO, Joaquín (1995). *“El Derecho a la Libertad Personal”*. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia.
- GIMENO SENDRA, Vicente (1985). *“El Proceso de Hábeas Corpus”*. Editorial Tecnos. Madrid.
- HOYOS SANCHO, M (2001). *“Análisis comparado de la situación de Flagrancia”*. En: Revista de Derecho. Volumen XII. Editorial Valdivia. Lima.
- JAEN VALLEJO, Manuel (2001). *“Tendencias Actuales de la Jurisprudencia Penal Española. Derecho Procesal Penal y derecho Penal Sustantivo”*. Editorial Gráfica Horizonte. Lima.
- LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Análisis Artículo por Artículo. *“Obra Colecta por 117 destacados Juristas del País”* (2005). Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Director. Walter Gutiérrez. Lima.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (1999). *“Instituciones de Derecho Procesal Penal”*. Editorial Akal. Madrid.
- MANZINI, V (1987). *“Tratado de Derecho Procesal Penal”*. Tomo IV. Editorial Ediciones de Cultura Jurídica. Caracas.
- MUÑOZ CONDE, Francisco (2001). *“Derecho Penal. Parte Especial”*. Editorial Tirant lo Blanch. Barcelona.
- NAVARRETE MALDONADO, Alejandro José (2012). *“El respeto de los derechos fundamentales en el procedimiento de despido a través de la*

jurisprudencia constitucional". En: Gaceta Constitucional. Editorial Gaceta Jurídica. Tomo 57, Lima, Setiembre.

- NEYRA FLORES, José (2009). "Tratado de Derecho Procesal Penal". Editorial Idemsa. Lima.
- NIETO MARTÍN, Adán (2004). (Coordinador) "*Asociación Internacional de Derecho Penal. Estudios de derecho penal*". Fondo Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha. Instituto de derecho penal Europeo e Internacional. Castilla.
- NINO, Carlos Santiago (1989). "*Ética y derechos humanos*". Editorial Astrea. Buenos Aires.
- PAREJA PAZ SOLDÁN, José (2005). "*Historias de las Constituciones nacionales*". Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- PAZO PINEDA, Oscar Andrés (2014). "*Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional*". Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- PAZO PINEDA, Oscar Andrés (2014). "*Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional*". Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio (1999). "*Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General*". Editorial Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado. Madrid.
- PÉREZ LUÑO, Enrique (1998). "*Los Derechos Fundamentales*". Séptima Edición. Editorial Tecnos. Madrid.

- PICK, Susan y otros (1994). *“Cómo investigar en Ciencias Sociales”*. Editorial Trillas. México.
- PLACENCIA RUBIÑOS, Liliana (2014). *“El Habeas Corpus contra actos de Investigación Preliminar”*. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- PRIETO SANCHIS, Luis (1992). *“Estudios sobre Derechos Fundamentales”*. Editorial Debate. Madrid.
- PRIETO SANCHÍS, Luis (2007). *“Apuntes de Teoría del Derecho”*. Segunda Edición. Editorial Trotta. Madrid.
- QUIROGA LEON, Aníbal (1989). *“Las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. En la Constitución diez años después”*. Instituto Constitución y Sociedad – Fundación Friedrich Naumann. Lima.
- QUIROGA LEON, Aníbal (2003). *“El Debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de protección de Derecho Humanos - Jurisprudencia-”*. Editorial Jurista Editores. Lima.
- QUISPE CORREA, Alfredo (2007). *“Derecho Constitucional I”*. Comité Editorial de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Lima.
- QUISPE CORREA, Alfredo (2007). *“Derecho Constitucional II”*. Serie de Manuales de Enseñanza- Aprendizaje. Comité Editorial de derecho de la Universidad San Martín de Porres. Lima.
- REYNA ALFARO, Luis Miguel (2015). *“Manual de Derecho Procesal Penal”*. Editorial Pacífico. Lima.

- RIVES SEVA, A (1999). *“La prueba en el Proceso penal. Doctrina de la segunda Sala del Tribunal Supremo”*. Tercera Edición. Editorial Arazandi. Lima.
- RODRIGUEZ, Francisco. *“Introducción a la metodología de la investigación social”*. Editorial Política. La Habana.
- RODRÍGUEZ CEPEDA, Bartolo Pablo (2001). *“Metodología Jurídica”*. Editorial Oxford. Colección Textos Jurídicos Universitarios. México.
- ROSAS YATACO, Jorge (2002). *“Derecho Procesal Penal”*. Editorial IDEMSA. Lima.
- RUBIO CORREA, Marcial (1999). *“Estudio de la Constitución Política de 1993”*. Tomo 1. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- RUBIO CORREA, Marcial (1999). *“Estudio de la Constitución Política de 1993”*. Tomo 2. Fondo Editorial de la pontificia Universidad católica del Perú. Lima.
- SAN MARTÍN CASTRO, César (2003). *“Derecho Procesal Penal”*. Segunda Edición. Editorial Grijley. Lima.
- SERNA, Pedro y TOLLER, Fernando (2000). *“La Interpretación Constitucional de los Derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos”*. Editorial La Ley. Buenos Aires.

- SOSA SACIO, Juan Manuel (2008). “*Sobre el carácter indisponible de los derechos fundamentales*”. En: Gaceta Constitucional. Tomo 9, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, setiembre.
- ZELAYARAN DURAND, Mauro. “*Metodología de la investigación jurídica*”. Ediciones Jurídicas. Lima. 2002.

HEMEROGRÁFICAS

- ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor (2015). “Celeridad Procesal en casos de flagrancia o confesión. A propósito de la resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ y el Decreto legislativo N° 1194”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 76, Octubre, Lima.
- BAZALAR PAZ, Víctor M. (2015.) “La Prisión Preventiva dentro del turno fiscal: una herramienta constitucional dentro del nuevo Código Procesal Penal”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 76, Octubre, Lima,
- BAZALAR PAZ, Víctor (2016). “La Detención Policial por Flagrancia Delictiva”. En Gaceta Penal & Procesal Penal Información Especializada para abogados, jueces y fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 83, Mayo, Lima.

- CÁCERES JULCA, Roberto (2009). "La Detención Policial". En: Gaceta Penal & Procesal Penal Información Especializada para abogados, jueces y fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo N° 7, Enero, Lima.
- ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (2003). "Habeas Corpus contra resoluciones judiciales: Entre la evolución del concepto y proceso regular y la determinación del ámbito de acción del juez constitucional". En Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso, Editorial Ara Editores, Lima.
- ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (2000). "*Intimidad, Libertades informáticas y algunas técnica para poder hacer frente a una disputa aparentemente inacabable*". En Revista Peruana de derecho Constitucional. N° 2, Lima.
- FERRERIRA DE ABREU, F (2007). "*La flagrancia en los delitos permanentes y los delitos de ejecución instantánea y efectos permanente*". En: Revista CENIPEC. N° 26.
- FRANCO ALZAMORA, Carlos. Suboficial Técnico de Segunda. Consideraciones de carácter legal sobre la detención policial. En: Revista de la Policía Nacional del Perú.
- GARZÓN VALDÉS, Ernesto (1989). "*Algo más cerca del coto vedado*". En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. N° 6, Lima.

- GUILLERMO PISCOYA, Juan Riquelme (2016). “La Importancia de la Imputación en el proceso Inmediato”. En Actualidad Penal. Editorial Instituto Pacífico, Volumen 21, Marzo, Lima.
- GUÍA DE JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA EL ABOGADO LITIGANTE. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 2008.
- HOYOS SANCHO, M. “Análisis comparado de la situación de flagrancia”. En: Revista de Derecho. Volumen XII. Editorial valdivia. Lima. 2001.
- HUAYLLA MARÍN, José Antonio (2015). “El Proceso Inmediato a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 77, Noviembre, Lima.
- MENDOZA CALDERÓN, Galileo (2015). “El proceso inmediato en el proceso penal peruano (la aplicación del Decreto Legislativo N° 1194)”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 76, Octubre, Lima.
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. “Manual de Beneficios Penitenciarios y de lineamientos del modelo procesal acusatorio”, Lima, 2012.
- MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN. Plan de Trabajo Institucional – PTI – Estrategias. Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística, 1993.

- NAVARRETE MALDONADO, Alejandro José (2012). *“El respeto de los derechos fundamentales en el procedimiento de despido a través de la jurisprudencia constitucional”*. En: Gaceta Constitucional. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 57, Lima, Setiembre.
- PANTA CUEVA, D. (2007) “Redefiniendo la flagrancia delictiva. Análisis y crítica de una sentencia del Tribunal Constitucional y del Decreto Legislativo N° 989”. En: Dialogo con la Jurisprudencia, N° 111, Editorial Gaceta Jurídica, Diciembre, Lima.
- PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy (2015). “Análisis al Decreto Legislativo N° 1194: un balance de lo que se necesita trabajar en los operadores de la administración de justicia”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 77, Noviembre, Lima.
- ROJAS LÓPEZ, Freddy (2015). “Comentario al Decreto Legislativo N° 1194 sobre el Proceso Inmediato”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 77, Noviembre, Lima.
- SAN MARTÍN CASTRO, César (2016). “El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg. N° 1194)”. En Gaceta Penal & Procesal Penal Información Especializada para abogados, jueces y fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 79, Enero, Lima.

- SOSA SACIO, Juan Manuel (2008). “*Sobre el carácter indisponible de los derechos fundamentales*”. En: Gaceta Constitucional. Tomo 9, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, setiembre.
- VALDIVIEZO GONZÁLES, Juan Carlos. “Comentario al Proceso Inmediato: Análisis al Decreto Legislativo N° 1194”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 77, Noviembre, Lima, 2015.
- VÁSQUEZ GANOZA, Carlos Zoe (2015). “La Nueva Configuración del proceso inmediato: supuestos, incoación y juzgamiento. Un análisis del Decreto Legislativo N° 1194”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 76, Octubre, Lima.
- VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (2015). “El proceso inmediato: ¿Cuáles son los aportes de las modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1194?”. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 76, Octubre, Lima.

LEGISLACION

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ DE 1993
- CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1194.

LINCOGRAFÍA

- <http://diariouno.pe/2016/01/07/cambios-en-ley-de-flagrancia/>
- <http://radiosanmartin.pe/portal/?p=24881>
- https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ncpp/s_nuevo_ncpp/as_ncpp_nuevo/as_noticias/ncpp_n_graninterescausoiniciocapitacionessobreldl1194queregulaprocesoinmediatocasosflagranciaorganizadoetipenal
- <http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/08/30/1281034-2.html>
- <http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-dl-1194-es-herramienta-firme-y-eficaz-lucha-contradelincuencia-572948.aspx>
- <http://enfoquederecho.com/penal/el-fin-de-la-prision-preventiva-reflexiones-sobre-el-futuro-a-partir-de-la-entrada-en-vigor-del-decreto-legislativo-1194/>
- <http://enfoquederecho.com/penal/el-fin-de-la-prision-preventiva-reflexiones-sobre-el-futuro-a-partir-de-la-entrada-en-vigor-del-decreto-legislativo-1194/>
- http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj5zqGghbfKAhUF1R4KHZa1CF4QFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww2.congreso.gob.pe%2FSicr%2FTraDocEstProc%2FContdoc03_2011.nsf%2Fba75101a33765c2c05257e5400552213%2F25fc41be8923454b05257eb5008251a0%2F%24FILE%2FDL119420150901.pdf&usg=AFQjCNHs-XrK6ssUhQ6FEjdUclvpPNwetQ&bvm=bv.112064104,d.dmo
- <http://larepublica.pe/impresia/en-portada/723062-la-flagrancia-una-ley-que-puede-llevar-la-carcel-en-media-hora>

- <http://luislingaderechoypolitica.blogspot.pe/2015/08/el-decreto-legislativo-n-1194-y-el.html>
- <http://rpp.pe/politica/estado/pj-y-pnp-buscan-implementar-juzgados-de-flagrancia-ante-delincuencia-noticia-908066>
- MARTÍN MORALES, R. “*Entrada en domicilio por causa de delito Flagrante(a propósito de las SSTC 341/1993 y 94/1996)*”. EN: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Pág. 01-02. 1999. En: http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-02.html#1.